

REPUBLICA DEL ECUADOR

INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS NACIONALES

**XXXIII CURSO SUPERIOR DE SEGURIDAD Y DESARROLLO**



## **TITULO DE LA TESIS**

POBLACION PENITENCIARIA EXTRANJERA EN EL ECUADOR Y LA LEGISLACION INTERNACIONAL DE REPATRIACION DE PERSONAS SENTENCIADAS COLOMBIANAS A SU PAIS DE ORIGEN. EL CASO DEL CENTRO DE REHABILITACION SOCIAL DE VARONES DE QUITO NRO. 2

TESIS PRESENTADA PARA OPTAR AL TITULO DE MAGISTER EN SEGURIDAD Y DESARROLLO CON MENCIÓN EN GESTIÓN PÚBLICA Y GERENCIA EMPRESARIAL

**AUTORA:**  
**DIRECTOR:**

**DRA. MERCY MAGALLANES R**  
**DR. ENRIQUE GOMEZ S.**

QUITO, OCTUBRE DEL 2006

**2005- 2006.**

## DEDICATORIA

A mi Señor, JESUCRISTO, quien en todo momento me ha dado inteligencia y sabiduría para alcanzar un objetivo más en mi vida.

A mis hijos: Cristian, Zulay, Tahina, y Diego Rubén, motivo de superación para mi vida.....

A todos los internos colombianos de la cárcel numero dos que buscan en los Convenios de Repatriación su esperanza para lograr la reinserción a la sociedad, en especial a Rubén Jaramillo, Ricardo Prada, Draizon Arenas, y otros, así como por su valiosa ayuda en la colaboración para este trabajo.

## AGRADECIMIENTO

A MI QUERIDA INSTITUCIÓN PENITENCIARIA: LA DIRECCION NACIONAL DE REHABILITACION SOCIAL, LA CUAL ME DIO LA OPORTUNIDAD DE AMPLIAR MI UNIVERSO DE CONOCIMIENTOS LLENO DE VIVENCIAS ADQUIRIDAS ...

AL INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS NACIONALES, QUE ME PERMITIO CONOCER TAN DE CERCA EL HAMBRE, LA POBREZA, Y LA MISERIA EN QUE VIVEN LOS SECTORES MAS NECESITADOS DE MI PATRIA ECUATORIANA, DURANTE LOS VIAJES DE ESTUDIOS. ....

A MI DIRECTOR DE TESIS, DR. ENRIQUE GOMEZ SANTILLAN, QUIEN CON SU DON DE GENTE, PACIENCIA Y TOLERANCIA ME ORIENTO, Y ASESORO EN LA REALIZACION DE ESTE TRABAJO, TRABAJO EL CUAL ES EL REFLEJO DE SU PROFESIONALISMO ACADEMICO.

A MIS FAMILIARES, AMIGOS Y AMIGAS Y A TODOS CUANTO PUSIERON UN GRANITO DE ARENA PARA LOGRAR CULMINAR ESTE RETO.

# INDICE GENERAL

## CAPITULO I

### GENERALIDADES SOBRE EL DERECHO PENAL EN EL ECUADOR

#### 1. 1.- Evolución del Derecho Penal en la Historia Humana.....

a) Etapa oscurantista.....

b) Etapa de humanización del Derecho Penal.....

c) Etapa de las Escuelas Penales:

Escuela Clásica.....

Escuela Positiva.....

Tercera Escuela.....

La Escuela de la Política Criminal.....

La Escuela Finalista.....

Escuela Científico-Social.....

#### 1.2.- Antecedentes del Derecho Penal Ecuatoriano (Época Republicana)

a) Período aborígen.....

b) Período colonial.....

c) Período republicano.....

#### 1.3.- El Derecho Penal en la actualidad

#### 1.4. El Código Penal Ecuatoriano

Las Penas Peculiares del Delito.....

Penas peculiares de la contravención.....

Penas comunes a todas las infracciones.....

#### 1.5. El Código de Procedimiento Penal

#### 1.6. El Código de Ejecución de Penas y de Rehabilitación Social

El Consejo Nacional de Rehabilitación Social (CNRS)

La Dirección Nacional de Rehabilitación Social (DNRS)

Los Centros de Rehabilitación Social (CRS)

Clasificación de los Centros de Rehabilitación Social

Del Régimen Penitenciario, de la Ejecución de las Penas y el Tratamiento

1.7 Reglamento al Código de Ejecución de Penas y de Rehabilitación Social

## **CAPITULO II**

2.1. Los Antecedentes sobre Repatriación o Traslado de Personas condenadas en el Derecho Internacional. Referencias útiles del Derecho Humanitario.

2.2. Similitudes y Diferencias entre Prisioneros de Guerra y Prisioneros comunes

2.3. El contexto actual: la Repatriación de Personas Condenadas

2.4. La Legislación Internacional: los Convenios Internacionales en materia penal de repatriación. Relaciones entre algunos países latinos.

2.5. Aspectos relacionados con los derechos humanos

Antecedentes sobre los Derechos del Hombre

Carta de las Naciones Unidas

Comisión de Derechos Humanos (ONU)

La Declaración Universal de los Derechos Humanos

Comisión Interamericana de Derechos Humanos

Convención Americana de Derechos Humanos (Pacto San José)

2.6. Convenios Internacionales suscritos por el Ecuador en materia penal

2.7. Los Convenios Marco suscrito por el Ecuador en materia de Repatriación. Contexto actual.

2.8 Ley Interpretativa del artículo 208 inciso quinto, de la Constitución Política de la Republica del Ecuador, Registro Oficial Nr0. 345 de 31 de mayo del 2004, y que sirve de base para aplicar en las repatriaciones de detenidos extranjeros hacia su lugar de origen

2.9. Incumplimiento del Convenio sobre la Repatriación de presos colombianos: causas, razones.

El Subrogado Penal del 50% y la Ejecutoria de la Sentencia Condenatoria

Multas a ser Recaudadas por el CONSEP a través de la Jurisdicción Coactiva

Rebajas de Penas: “Del Dos por Uno al Diez por Uno”

2.10. Inexistencia de un Organismo Internacional apropiado que permita que el Convenio Sobre Repatriación de presos entre Ecuador y Colombia se cumpla? Cancillería, Corte Suprema, Ministerio de Gobierno, Organismos de Colombia, etc.

### **CAPITULO III**

3.1 Observaciones al Art. 86 del Convenio Sobre Traslado de Personas, Vehículos, Embarcaciones Fluviales y Marítimas y Aeronaves, suscrito en la ciudad de Esmeraldas. (Convenio de Esmeraldas)

3.2.- Reglamento Sobre el Procedimiento de Repatriación de Personas Sentenciadas entre el Gobierno de la Republica del Ecuador y el Gobierno de la Republica de Colombia

3.2.1.- Análisis al Reglamento Sobre el Procedimiento de Personas Sentenciadas entre el Gobierno de la Republica del Ecuador y el Gobierno de la Republica de Colombia.

3.3.- Reglamento Operativo del Ministerio de Justicia y del Derecho de Colombia y la Corte Suprema de Justicia del Ecuador sobre Traslado de Personas Condenadas

3.3.1.- Análisis al Reglamento Operativo del Ministerio de Justicia y del Derecho de Colombia y la Corte Suprema de Justicia del Ecuador sobre Traslado de Personas Condenadas

3.4. Inaplicabilidad del Convenio entre Colombia y Ecuador Sobre Transito de Personas, Vehículos, Embarcaciones Fluviales, Marítimas y Aeronaves,

suscrito en la ciudad de Esmeraldas, el 18 de abril de 1990, con los reclusos colombianos que habitan en las cárceles ecuatorianas.

3.5. - Ejemplo de un trámite de Repatriación de Personas condenadas, desde territorio ecuatoriano a territorio colombiano.

3.6.- Población Penitenciaria Extranjera en el Ecuador

3.7.- Estudio de la Población Penitenciaria colombiana en el Centro de Rehabilitación Social Varones de Quito número dos. Encuestas, cuadros estadísticos de hacinamiento, repatriación, entre otros.

3.8.- Encuestas aplicadas. Análisis para determinar hacinamiento y otros

## **CAPITULO IV**

4.1.- Propuesta de Reformas al Reglamento Sobre el Procedimiento, y Operativo de Repatriación de Personas Sentenciadas entre el Gobierno de la Republica del Ecuador y el Gobierno de la Republica de Colombia.

## **CAPITULO V**

CONCLUSIONES

RECOMENDACIONES

GLOSARIO DE TERMINOS USADOS FRECUENTEMENTE

BIBLIOGRAFIA

ANEXOS

## INTRODUCCION

Una de las mayores preocupaciones del Estado Ecuatoriano en materia de Rehabilitación Social es el hacinamiento humano que enfrentan los Centros Penitenciarios del país, pues no guarda relación con la capacidad física de estas estructuras, mucho menos con la funcionalidad y respeto al ser humano; garantías establecida en la Constitución de la República.

Permanentemente se han realizado reformas para mitigar esta situación problemática, pero al no haber coherencia con la realidad del sistema penitenciario se han vuelto ineficaces. Además es pertinente señalar que todas estas reformas se han ejecutado sin un verdadero estudio y mucho menos con una planificación técnica del problema.

Frente a esta realidad, y como funcionaria del Centro de Rehabilitación Social de Varones de Quito número 2, he podido percibir la situación caótica en el que se desenvuelven los internos de este centro, desde el aspecto legal hasta el campo de los derechos Humanos. Al problema del hacinamiento se suma la falta de recursos para satisfacer las necesidades básicas, para mejorar y aumentar la vigilancia, para establecer un verdadero programa de rehabilitación del interno, etc.

Los Centros de Rehabilitación Social del país cuentan con un número significativo de detenidos de origen extranjero, la mayoría de ellos son de nacionalidad Colombiana, los mismos que podrían pasar a cumplir sus penas en su propio país acogiéndose a la Legislación Internacional como, el “Convenio Sobre Traslado de Personas Condenadas entre el Gobierno de de la República del Ecuador y el Gobierno de la República de Colombia” (más conocido en el interior de los Centros Carcelarios como el

“Convenio de Esmeraldas” por la suscripción hecha en esa ciudad) que potencializada su aplicación permitiría reducir significativamente la población carcelaria del país, bajando su hacinamiento



Siendo testigo fiel de la problemática penitenciaria y como profesional del Derecho es de interés realizar un estudio sobre la legislación Internacional en la materia tratada, fundamentalmente en el caso de los detenidos colombianos por ser una población numerosa, y por las relaciones saludables que existen entre los dos Estados facilitaría su pronta y efectiva aplicación.

Es permanente la denuncia que realizan los medios de comunicación sobre el problema de los detenidos en los Centros de Rehabilitación Social del país; así tenemos a los organismos nacionales e internacionales de Derechos Humanos que denuncian la crisis social de los detenidos, la sociedad diariamente expresa sus censuras y denuncias al respecto, los organismos del Estado hacen eco de la problemática pero no resuelven nada para solucionarla, en definitiva todos los estamentos sociales hacen espacio para protestar pero hasta la presente lo único cierto es que este problema va de mal en peor.

Es necesario señalar que el Código Penal y el Código de procedimiento Penal han sido objeto de un sinnúmero de reformas, el primero ha aumentado las penas de dieciséis años a treinta y cinco años de reclusión mayor extraordinaria; el segundo con reformas como la Detención en Firme, para evitar la impunidad de los delincuentes; si bien, por un lado, estas reformas legales pueden recoger las demandas sociales de endurecer las penas para enfrentar la delincuencia, por otro lado, el Sistema Penitenciario se ve directamente afectado ya que la permanencia de los internos se alarga con el consiguiente impacto que ello implica, pues física y funcionalmente los centros de rehabilitación fueron diseñados para un número determinado de personas y que con el crecimiento de la población delictiva estos lugares no satisfacen la demanda, generándose un hacinamiento realmente inhumano.

Pero el hacinamiento no es en si todo el problema, son las derivaciones que este genera: como es la violencia entre internos, promiscuidad, insalubridad, mala alimentación, enfermedades, entre otros; crisis que a su vez lleva a los internos a intentos de fugas masivas, fugas, secuestros y muertes contra el personal de estos centros, huelgas de hambre, toma de las instalaciones, en fin

larga es la problemática, como larga y tormentosa es alcanzar que el Estado otorgue verdaderas soluciones al problema carcelario.

A estas dificultades que les toca vivir a los Centros de Rehabilitación, se suma la falta de presupuesto adecuado para cubrir las mínimas necesidades humanas e institucionales, convirtiéndose el Sistema de Rehabilitación Social en un sueño pues su soporte jurídico y económico no le permite identificarse como tal ni mucho menos cumplir con la misión para cual fue instituida: Rehabilitar para reivindicar a los internos que en el futuro puedan integrarse a sus familias y la sociedad misma como elementos útiles.

El Centro de Rehabilitación Social de Varones Quito No 2, caso de estudio escogido para la presente investigación es un prototipo de la crisis penitenciaria del país, la estructura física está concebida para dar albergue a 520 detenidos, pero hasta la presente investigación 791 personas detenidas, clara demostración del hacinamiento que soportan las cárceles, no sólo en la “dos” sino en el país, (esto hasta antes del voraz incendio que se produjo y que es noticia pública; hoy vemos que la cárcel número dos está ubicada en el Pabellón “Hogar San Pablo, en el ex penal García Moreno, en donde la infraestructura alcanza para 50 internos, sin embargo hay un hacinamiento de 220 detenidos)

De continuar esta despreocupación de los poderes del Estado, la situación penitenciaria ira alcanzado ribetes de peligrosidad, cuyas consecuencias serán nefastas para toda la sociedad, las familias de los internos y ellos mismos porque no tendrán oportunidad de regenerarse.

Bajo el análisis hecho anteriormente que en las cárceles del país se encuentran entre los detenidos un gran número de extranjeros principalmente colombianos, es necesario entonces dar plena aplicación al Convenio Internacional sobre Repatriación de las personas sentenciadas, legislación que en años anteriores ya ha transferido a presos de Ecuador y Colombia, fruto del convenio firmado entre las dos naciones.

La ejecución plena del convenio y la celeridad del proceso, será una importante medida de despoblar los centros de rehabilitación del país; consecuencia que si bien sigue siendo paliativa permitirá que los detenidos nacionales de cada Estado puedan continuar cumpliendo sus sentencias en su propio país y estar más cerca de su familia.

Las unidades de observación consideradas para el estudio son los detenidos colombianos, Autoridades Penitenciarias, así como organismos ejecutores del Convenio. Para el efecto se utilizará las técnicas de investigación como: la observación, entrevistas, y encuestas para recolectar la información.

La situación inhumana a la que se ven sometidos los detenidos en los centros de Rehabilitación Social en el país, principalmente en la “dos” es motivo objetivo de la investigadora para llevar adelante el presente trabajo. Propuesta que marca importancia por la trascendencia del problema en el ámbito nacional e internacional.

Para el efecto, el proyecto se sustentará en todo fundamento teórico-científico y legal existente para conceptuar la realidad social, jurídica y económica que presenta el problema propuesto. Análisis que permitirá establecer y evaluar la normativa legal frente a la realidad que se percibe en las cárceles.

Los resultados alcanzados con la investigación no sólo esperan cumplir con los objetivos propuestos para este trabajo, que es la Repatriación de los internos colombianos a su país de origen, sino que debe ser es un motivo de reflexión para los organismos encargados de la administración de justicia, de los Ministerios de Relaciones Exteriores, del Estado mismo, y del Sistema Penitenciario, principal y fundamentalmente que sea la Repatriación, una alternativa válida para reducir el hacinamiento en las cárceles con sus consiguientes problemas.

La Repatriación, o Traslado de Personas Condenadas, es en este sentido una institución por medio de la cual se articula una solución a la crisis penitenciaria ecuatoriana, pues va a permitir que la sobrepoblación existente en las cárceles

del país, con la presencia de internos colombianos, se reduzca notablemente para elevar el nivel de vida de los internos ecuatorianos con perspectivas a cumplir la visión del Sistema Penitenciario que es la reinserción a la sociedad,

Es necesario entonces que se busque la forma de aplicar la Legislación Internacional en materia penal de Repatriación de presos, especialmente con Colombia ya que la legislación nacional ecuatoriana se adecua a los instrumentos internacionales vigentes, teniendo en cuenta que Ecuador ha firmado Acuerdos Binacionales desde 1994 al respecto, acotando que para la aplicación de la Legislación Internacional se debe tener presente las condiciones que permitan al Estado receptor preservar la dignidad de las personas repatriadas y garantizar el cumplimiento de las condiciones exigidas para su repatriación, siendo además la Repatriación a mi criterio una figura jurídica dentro de la política criminal internacional que acarrea consecuencias penitenciarias, penales y procesales

## CAPITULO I

### GENERALIDADES SOBRE EL DERECHO PENAL EN EL ECUADOR

#### 1.1. EVOLUCIÓN DEL DERECHO PENAL EN LA HISTORIA HUMANA

Para adentrarnos en esta investigación se ha utilizado el documento Proyecto “Hacia la Seguridad” Informe de Diagnóstico del Sector Penal, del Consultor Milton Román Abarca.

El autor Alfonso Reyes<sup>1</sup> al referirse a la evolución del derecho penal señala que el mismo es el resultante de una larga y penosa evolución de los sentimientos, creencias, costumbres, instituciones y leyes de la sociedad frente al fenómeno del delito.

Con este antecedente, el citado autor distingue tres etapas en la evolución del derecho penal tal como se lo concibe en la actualidad, y que son:

**a) Etapa oscurantista:** En esta larga etapa de la historia de la humanidad no existió propiamente un derecho penal, sino un conjunto de prohibiciones sobre hechos que se consideraban lesivos al individuo, al grupo social o la divinidad, ante los cuales se reaccionaba con violencia, etapa en la que generalmente se confundía los conceptos de delito y de pecado, a cuyo efecto el infractor debía expiar su falta mediante un castigo cruento que se encontraba a cargo de una autoridad (política, militar o religiosa). De esta etapa Reyes Echandía rescata cuerpos normativos como el Código de Hammurabi (2.250a.C.), el Código de

---

<sup>1</sup> Alfonso Reyes, Derecho Penal, Editorial Temis, Bogotá-2002, pp.12-22

Manú, y las leyes de Moisés, como intentos legislativos a partir de los cuales el delito empezó a adquirir tímidamente categoría institucional.

**Etapas de Humanización del Derecho Penal:** En esta etapa, el mencionado autor, Alfonso Reyes se sitúa en los avances notables observados en la sociedad durante el siglo XVIII, época impactada por el iluminismo, en la cual la justicia penal salió de los linderos metafísicos para tornarse humana, y en la que se concreta estructuras jurídicas en la materia, se modera la crueldad en el castigo y se comienza a reconocer garantías a favor del reo, época de la que es importante destacar los aportes de John Howard con su análisis sobre las condiciones de la población carcelaria, y de César Beccaria quien en su obra “De los delitos y de las penas”, traza los principios por los que plantea que el derecho a castigar emana del pacto social; que es mejor prevenir los delitos que castigarlos; que solo las leyes pueden establecer delitos y penas; que se debe repudiar la tortura como instrumento procesal; y que la pena debe impedir que el reo cometa nuevos delitos y evitar que los demás miembros de la sociedad imiten su conducta, principios que son recogidos por los grandes artífices de la Revolución Francesa, especialmente en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, lineamientos que fueron seguidos por los denominados autores prácticos del derecho penal, que empezaron a construir sistemas teóricos que reemplazaron los desordenados preceptos Feudales, autores entre los que se puede destacar a Jeremías Bentham y Anselmo de Feuerbach.

**Etapas de las Escuelas Penales:** En esta etapa Reyes Echandía destaca que a partir de las ideas liberales desarrolladas durante los siglos XVIII y XIX, con relación a los conceptos básicos de delito y pena, se fueron estructurando corrientes doctrinarias que dieron origen a verdaderas escuelas jurídico-penales, entre las que se destacan la Clásica y la Positiva, ambas de origen italiano, cuyos principios y representantes son:

**Escuela Clásica:** Esta escuela recoge sistemáticamente la mejor tradición de Iluminismo y plantea como principios que el delito nace de una ley del Estado; que la responsabilidad penal se sustenta en la voluntad de obrar del

delincuente; y que la pena se basa en la necesidad que tiene la sociedad de ejercer la tutela de los derechos ciudadanos de un modo coactivo. Esta escuela, cuyo aporte principal es haber realizado un estudio sistemático del delito como entidad jurídica, tiene como máximo representante a Francisco Carrara; y,

**Escuela Positiva:** Esta escuela nace como una posición doctrinaria contraria a la Escuela Clásica, en cuanto objeta el individualismo abstracto de ésta, frente a la necesidad de defender eficazmente el cuerpo social frente a la acción de la delincuencia, a cuyo efecto plantea como principios la figura protagónica del delincuente en la justicia penal; la concepción del delito como un fenómeno natural y humano, sustentado en factores individuales (psíquicos), físicos (ambientales) y sociales; la responsabilidad basada en la actividad psicofísica del delincuente; y, la pena como medida de defensa social de carácter preventivo. Los representantes de esta escuela son César Lombroso con su teoría sobre el delincuente nato; Enrico Ferri con su estudio de los factores sociales del delito y tipos delincuenciales, y Rafael Garófalo con su sustento jurídico sobre las teorías de Lombroso y Ferri.

Por último Reyes Echandía concluye que a partir de las escuelas clásica y positiva se desarrollaron otras escuelas, entre ellas la denominada:

**Tercera Escuela,** sustentada por Emanuele Carnevale y cuyos principios propugnan la autonomía del derecho penal; el estudio jurídico, antropológico y sociológico del delito; la imputabilidad sustentada en la voluntad y los motivos que la sustentan; y, el derecho a castigar sustentado en la defensa social.

### **La Escuela de la Política Criminal**

Encabezada por Franz Von Liszt y que se sustenta en un método jurídico para indagar el contenido del derecho penal; la fenomenología social del delito ocasionado por factores endógenos y exógenos, y una pena retributiva con la finalidad de proteger los intereses comunes.

### **La Escuela Finalista**

Sostenida por el alemán Hans Wezel que establece que la acción es el elemento básico del delito, ubicándose dentro de ella el dolo, al que se entiende como la voluntad que se manifiesta en un resultado, con lo cual se desplaza este elemento del ámbito de la culpabilidad al de la tipicidad.

### **Escuela Científico-Social**

Sustentada por Hassemer y Jakobs, la que se opone al principio de la culpabilidad y propone sustituirlo por el principio de la proporcionalidad que abandonaría el culpabilismo, con el fin de lograr una prevención general del delito.

## **1.2.- Antecedentes del Derecho Penal Ecuatoriano (Época Republicana)**

El autor Ernesto Albán<sup>2</sup> al referirse a la evolución del derecho penal en el Ecuador, considera los períodos fundamentales en que se divide la historia en nuestro país, así tenemos: el aborigen, colonial y republicano.

### **Período Aborigen:**

Esta etapa se caracteriza por la falta de fuentes documentales para determinar las normas penales que regían entre los pueblos que habitaban el Ecuador, normas que según Albán Gómez eran consuetudinarias ya que se transmitían verbalmente. Añade el autor que antes de la invasión incásica cada tribu tenía sus normas particulares, por lo que con el incario se unifican esas normas, de las que se puede destacar su carácter eminentemente público y su matiz religioso. Por otra parte en el incario se define una gradación de las infracciones según su gravedad, entre las que predominan las que afectan al inca, la religión y el Estado, pasando luego a los delitos contra las personas, los sexuales y contra la propiedad colectiva. En general en el incario la delincuencia es escasa, pero la que se producía era severamente reprimida con la pena de muerte y otras sanciones de carácter corporal.

---

<sup>2</sup> Albán Ernesto, Manual de Derecho Penal, Régimen Penal – Corporación. ediciones legales, Quito-1992, pp.-38-41



### **Período Colonial:**

Con la conquista española se introdujo en las colonias el sistema legal hispánico de fuerte raigambre romano y con elementos del derecho canónico, leyes penales que se caracterizaban especialmente por la severidad de las sanciones a través de la pena de muerte y otros castigos corporales. En este período es importante destacar la expedición de las Leyes de Indias de 1680, normativa que pretendía tutelar la población indígena americana, pero que lamentablemente se quedó en letra muerta.

### **Período Republicano:**

Sobre este período, el autor Ernesto Albán Gómez, señala que la independencia y los comienzos de la República no implicaron la aparición automática de un nuevo sistema legal, por lo que continuaron rigiendo las leyes españolas hasta que se dictaron otras leyes que las reemplacen, lo que en el campo penal recién aconteció en 1837 cuando se aprobó el primer Código Penal ecuatoriano.

En efecto, precisa el autor, que a partir del citado año y durante el período republicano se han expedido en el país cuatro códigos penales, cuerpos legales sobre los que se puede destacar los siguientes aspectos:

El Código Penal de **1837** fue promulgado durante la presidencia de Vicente Rocafuerte, por lo que se inspiró en las ideas liberales de dicho mandatario y al parecer del código español de 1822, normativa en la que se empieza a institucionalizar los principios fundamentales de la Escuela Clásica, esto es, legalidad de delitos y penas, culpabilidad psicológica, entre otros temas, manteniéndose eso sí algunas de las viejas tradiciones penales;

El Código Penal de **1872** fue expedido durante la segunda presidencia de Gabriel García Moreno y se inspiró en el Código Penal de Bélgica de 1867, el que a su vez tenía como modelo el Código francés de 1810. Este Código tiene

alguna evolución con relación al de 1837 en cuanto a los conceptos esenciales derivados de la Escuela Clásica;

El Código Penal de **1906** promulgado durante la segunda presidencia de Eloy Alfaro, cuerpo normativo que en su estructura básica es igual al anterior, pero que introduce dos importantes reformas acordes a la orientación liberal imperante en el país y que son la supresión de la pena de muerte y de los delitos contra la religión; y,

Código Penal de **1938** expedido durante la dictadura del General Alberto Enríquez, que mantiene la estructura básica del código anterior derivada de la Escuela Clásica, con algunos toques modernizadores inspirados en el Código Penal italiano de 1930 y en el argentino de 1922, tales como la relación de causalidad, la imputabilidad, entre otros aspectos, Código que se encuentra vigente en el país, debiéndose destacar que desde su expedición se le han incorporado algunas codificaciones, la primera en 1953, la segunda en 1960 y la tercera en 1971, cuya numeración es la que se cita actualmente en trámites judiciales y sentencias.

Entre las principales Reformas introducidas al Código Penal de **1938** se puede destacar las siguientes:

La tipificación del delito de terrorismo de 19 de diciembre de 1975, mediante reforma al Art.160;

La tipificación del delito de enriquecimiento ilícito de 29 de agosto de 1985, mediante la inclusión de tres artículos innumerados agregados luego del Art.296;

cuando los reos hubieran permanecido sin sentencia detenidos por igual o mayor tiempo a la pena máxima a la que tendrían que ser condenados, serán en inmediata libertad) de 24 de diciembre de 1997; La derogatoria del Art.27 (causa de excusa cuando se sorprenda en acto carnal ilegítimo a hija, nieta o hermana) de 21 de julio de 1998;

### **1.3.- EL DERECHO PENAL EN LA ACTUALIDAD**

El autor Jorge Hubner<sup>3</sup> define al Derecho Penal como la rama del Derecho Público que configura las infracciones y determina su penalidad, de conformidad a normas legales sustantivas y de procedimiento previamente establecidas.

A partir de esta concepción queda claro que el legislador, al elaborar el Derecho Penal, en aplicación al principio “nullum crimen, nulla poena sine lege”, debe establecer mediante ley previa, tipos delictivos denominados genéricamente infracciones con sus correspondientes sanciones, sobre hechos que considere reprochables, antijurídicos y punibles, por afectar la plena realización de los bienes jurídicos garantizados a lo largo del ordenamiento jurídico o porque esos hechos rompen con la armonía propia de la convivencia social.

Este principio de legalidad que sin duda constituye el hito fundamental de la existencia del Derecho Penal, se encuentra estipulado en el Art.24, numeral 1 de la Constitución, norma que no solo se refiere a la tipificación legal de las infracciones penales sino también a las de orden administrativo y de aquellas que no se encasillan en uno u otro grupo, esto sin dejar de mencionar la obligación legislativa de hacer constar en ley, las normas de procedimiento que permitan el juzgamiento de las infracciones establecidas, mediante la fijación de las atribuciones de los jueces competentes y las actuaciones procesales pertinentes, por tanto, es evidente que constituye tema conexo a la formulación del Derecho Penal, la normativa que regula el proceso penal, esto sin dejar mencionar aquella que fija las reglas para la ejecución de la condena.

---

<sup>3</sup> Jorge Hubner, introducción al derecho, Editorial Jurídica de Chile, Santiago – 1976, pag. 313

Una vez establecidas mediante ley la infracción y la pena, constituye objetivo del Derecho Penal la protección y seguridad jurídica de la organización social, objetivo que el autor Eugenio Zaffaroni<sup>4</sup> fija en los siguientes términos:

“En el Estado Constitucional de Derecho, el objetivo del Derecho Penal debe ser la seguridad jurídica, amenazada por el ejercicio ilimitado del poder punitivo. Seguridad Jurídica es la de los bienes jurídicos de todos los habitantes; son bienes jurídicos de los habitantes los que posibilitan al ser humano su realización como persona, o sea, su existencia como coexistencia, el espacio de libertad social en que puede elegirse y realizar su propia elección. El Derecho Penal debe construir un sistema que permita a las agencias jurídicas un ejercicio racional de su poder para contener el del poder punitivo, que tiende estructuralmente a un ejercicio ilimitado y arrasador de todo espacio social. Este objetivo, que configura la decisión política previa a la construcción del sistema, debe regir la elaboración completa del mismo, y su eficacia contenedora dependerá del cumplimiento de varios requisitos metodológicos”.

Añade Zaffaroni que el Derecho Penal debe ser entendido como un instrumento que permita el perfeccionamiento del Estado Constitucional de Derecho, para lo cual debe sustentarse en el principio de compatibilidad legal, esto es, bajo un irrestricto respeto a la jerarquía jurídica –vale decir 1º la Constitución, 2º los convenios internacionales, 3º la ley-, con lo cual se configuraría en un apéndice indispensable del Derecho Constitucional y en un medio para fortalecer una administración de justicia constitucional.

En la eterna e incesante lucha de la sociedad en pro de la perfección jurídica y el imperio de la ley, que se inicia en los ya lejanos tiempos primitivos de la venganza privada en su forma absoluta y de la venganza pública reglamentada como paliativo al exceso de la primera, y que deviene ininterrumpida hasta los días que decurren, preconizadores del respeto a la dignidad humana, el Derecho Penal o como quiera que se le denomine por las tendencias científicas ha preocupado apasionantemente a tratadistas y legisladores, juristas y magistrados, catedráticos e investigadores, por la razón elocuente de que a la

---

<sup>4</sup> Eugenio Zaffaroni, Derecho Penal – Porte general, Editorial Ediar, Buenos Aires- 2002, pag. 92.

par que representa un poderoso instrumento jurídico para la defensa de la colectividad, incide con sus efectos, la represión, la sanción o la pena, sobre los más preciados atributos y las más íntimas afecciones del hombre: su honor y su fama, su nombre, su familia y su porvenir.

Transformada en efectiva la relación hipotética o preventiva que se establece entre el Estado y sus súbditos cuando la ley tipifica los delitos y señala las penas no como amenaza propiamente sino como advertencia y límite, se inicia de inmediato el difícil y delicado camino del proceso penal para juzgar la conducta ilícita, y el más escabroso aún de la ejecución de la sentencia condenatoria. Es cuando la trilogía integrada por el delincuente, el delito y la pena, se torna en sugestivo problema que concita la unánime preocupación de quienes participan, de una u otra manera, en la expedición de la regla jurídica, en su interpretación y aplicación, en la defensa del imputado y en la suerte del reo una vez que se pierde entre los muros, las rejas y las sombras de los establecimientos penitenciarios.

El Derecho Penal Ecuatoriano no podía dejar de lado tan complejo quehacer. Lo ha observado con atención creciente y lo ha practicado acatando las recomendaciones de la dilatada y multifacética doctrina y los sabios consejos del Derecho Comparado, siempre a medida de sus recursos y en armonía con la realidad de su ambiente.

La República del Ecuador se constituye en entidad independiente cuando los grandes postulados de la Revolución Francesa habían influido decisivamente y por años de años sobre los derechos positivos de los pueblos regidos por el sistema de derecho Occidental o Continental, luminaria que alumbra también a Hispanoamérica, avivada con la aureola del prestigio del Derecho Romano y de la Codificación Napoleónica. Al Ecuador no le afectan los regímenes empíricos de las costumbres penales y del arbitrio judicial. Sus leyes punitivas se expiden al amparo de principios relativamente humanitarios.

Esto sin embargo, ni la Escuela Clásica cuyos postulados renovadores enseñan Francisco Carrara en su magistral "Programa" y el Marqués de Beccaria al propugnar que la pena ha de ser esencialmente pública, pronta,

necesaria, proporcionada al delito, señalada por las leyes y lo menos rigurosa posible atendiendo a las circunstancias, ni la Positivista sustentada por Lombroso, Ferri y Garófalo, son recogidas por el legislador ecuatoriano en plenitud de conceptos y en oportunidad de tiempo. La legislación sustantiva penal del Ecuador, de fin del Siglo XIX, toma como modelo el Código belga de 1880, que a su vez se inspira en el francés de 1810, no puede ser considerada como fiel y completo trasunto de los principios de las escuelas penales imperantes.

Ni siquiera el Código de 1906 podría considerarse como nítida expresión de tales postulados. Con casi imperceptibles modificaciones son los mismos preceptos dogmáticos y la misma forma de tipificar el acto ilícito de los Códigos de 1872 y 1889 los que se encierran en su contexto, por mucho que el fundamento de su expedición fue el de la "inaplazable necesidad de reformar" las leyes ecuatorianas...

Un gran progreso, a pesar de ello, se opera en la punición.

Tres años antes de que comience el Siglo XX, la bárbara e ignominiosa pena de muerte es abolida como forma de castigar ciertos delitos. Es justo motivo de orgullo para el Ecuador el que mientras países que se precian de aplicar la política criminal, las medidas de seguridad y los sistemas progresivos de rehabilitación del penado, mantienen la mal llamada pena, reglamentando en forma deprimente y con lujo de detalles impresionantes y macabros la forma de ejecutarla, la Función legislativa ecuatoriana, valorando lo que significa el complejo problema de la etiología del delito como resultado de factores endógenos y exógenos que el Estado no ha podido controlar, expide un histórico y libérrimo documento concebido en términos lacónicos pero de valiosísimo contenido, en donde la Asamblea Nacional decreta:

Que La pena de reclusión mayor extraordinaria sustituye a la de muerte, quedando reformados en este sentido los artículos del Código Penal que imponían la pena de muerte, el 13 de Junio de mil ochocientos noventa y siete.

#### 1.4. EL CODIGO PENAL ECUATORIANO

El 17 de Abril de 1837, en la Presidencia de Vicente Rocafuerte, se aprobó el Primer Código Penal de la República del Ecuador, que consagraba la pena de muerte; y las penas en general, eran de tipo aflictivo y de trabajos forzados.

En dicho Código Penal, las penas de prisión se cumplían en las cárceles, que se constituían en casas y fortalezas, diciéndose sobre ellas, que "las cárceles solo están destinadas a la custodia y no para tormento y aflicción de los reos, y por consiguiente deben ser tratados, en cuanto lo permita su lastimosa situación con la mayor humanidad, especialmente cuando es un castigo a un ciudadano, antes de probarsele legalmente un delito"<sup>5</sup>

El Artículo 23 del Código Penal, expresaba que "los condenados a prisión y reclusión, serán conducidos a una casa de trabajo, y en ella, sin poder salir durante el tiempo de la condena, trabajarán constantemente en el oficio, arte u ocupación para que sea más a propósito, sin prisiones, a menos que la merezcan por mala conducta, según los reglamentos de la casa, y con precisa circunstancia de que ninguno puede estar sin ocupación efectiva, en lo que no habrá nunca rebaja, exención ni dispensa"<sup>6</sup>

En las Constituciones de 1878 y 1833 se mantenía la pena de muerte para los delitos de asesinato y parricidio, y en la Constitución de 1906, fue eliminada de manera definitiva, y cuyo ordinal primero del Art. 26, establecía que el Estado garantizaba a los ecuatorianos, la inviolabilidad de la vida y queda abolida la pena de muerte, la pena capital.

El Código Penal de 1938 opera ciertas reformas como la condena de ejecución condicional y la liberación condicional.

---

<sup>5</sup> LOPEZ VILLAVICENCIO, Germán." Legislación Laboral Penitenciaria Ecuatoriana" imprenta Don Bosco. Quito. 1990. Pág. 16.

<sup>6</sup> Código Penal de la República del Ecuador, sancionado por la Legislatura de 1837.

El Código Penal de Eloy Alfaro fue promulgado un 18 de Abril de 1906, el cual abolió en forma definitiva la pena de muerte, estableciéndose las infracciones en penas de prisión y reclusión mayor y menor, fijando la pena máxima en reclusión extraordinaria de dieciséis años.

El Código Penal, vigente, constituye la principal ley de aplicación penal en el país, y desde su última codificación, esto es el año de 1971 (Registro Oficial N° 147.de 22 de enero del año en mención) ha sufrido una serie de modificaciones, siendo en este Cuerpo legal en el que se encuentran tipificadas las infracciones, las que se clasifican en delitos y contravenciones, por lo que al haber personas que transgredan la ley y al ser detenidas son enviados luego del trámite respectivo a uno de los Centros de Rehabilitación Social.

El Código Penal se encuentra en marcada relación con el Código de Ejecución de Penas y Rehabilitación Social, y éste con el Régimen Penitenciario que es el lugar donde las personas cumplen penas privativas de libertad, debido a que se encuentra constituido como la norma que regula la conducta social y aquel que inobserva sus disposiciones será sancionado de conformidad con el delito y su tipificación.

Las normas del Código Penal se distribuyen en tres libros, según el siguiente detalle:

- a) El Libro Primero titulado de las infracciones, de las personas responsables de las infracciones y de las penas en general, comprende:
- b) El Libro Segundo titulado de los delitos en particular, comprende Los Delitos contra la Seguridad del Estado.
- c) El Libro Tercero titulado de las contravenciones, comprende La clasificación de las contravenciones.

## **LAS PENAS PECULIARES DEL DELITO**



El Art. 51 del Código Penal Ecuatoriano, vigente clasifica a las penas aplicables a las infracciones, y que son proporcionadas de acuerdo a la gravedad del delito cometido y que el sentenciado deberá cumplir en uno de los Centros de Rehabilitación Social penas que se encuentran detalladas de la siguiente manera:

1. Reclusión Mayor
2. Reclusión menor
3. Prisión de ocho días a cinco años
4. Interdicción de ciertos derechos políticos y civiles
5. Sujeción a la vigilancia de la autoridad
6. Privación del ejercicio de profesionales, artes u oficios; y,
7. Incapacidad perpetua para el desempeño de todo empleo o cargo público

#### **PENAS PECULIARES DE LA CONTRAVENCION**

1. Prisión de uno a siete días
2. Multa

#### **PENAS COMUNES A TODAS LAS INFRACCIONES**

1. Multa
2. Comiso Especial

#### **1.5. EL CODIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL**

Es el Cuerpo legal que establece el procedimiento a seguirse desde el inicio de un proceso penal hasta su juzgamiento, pasando de un sistema inquisitivo escrito, a un sistema acusatorio oral, a través de una Reforma publicada en el Registro Oficial de 13 de Enero del 2000 y que lograría la celeridad y eficacia de los procesos y trámites en especial la presentación y contradicción de las pruebas, para lo cual se tomará en cuenta a la Jurisdicción y Competencia; de acuerdo al Art. 16 del Cuerpo de Leyes enunciado sólo a los Jueces y

Tribunales Penales establecidos de acuerdo con la Constitución ejercen jurisdicción en materia penal; mientras que la Competencia nace de la Ley

La Acción Penal: Denuncia, Acusación Particular; y,

Los Sujetos Procesales: el Ministerio Público, correspondiendo al Fiscal ejercer la acción penal en los delitos de acción pública

El Ofendido, toda persona que se cree afectado por un delito cometido en su contra;

El imputado, la persona a quien el Fiscal atribuya la participación de un delito como autor, cómplice o encubridor, mientras que el acusado es la persona contra quien se ha dictado auto de llamamiento a juicio;

El Defensor Público: tendrá su sede en la capital de la República y competencia en todo el territorio del país y se encargará del patrocinio de los imputados que no tengan defensor.

La Prueba: es la que va a establecer tanto la existencia de la infracción como la responsabilidad del imputado y son: materiales, testimoniales y documentales.

Medidas cautelares, a fin de garantizar la presencia del imputado o acusado con el proceso, el pago de indemnizaciones de daños y perjuicios al ofendido y las costas procesales, el Juez ordenará las medidas cautelares de carácter personal o real; las de carácter personal son: la detención, la prisión preventiva y la detención en firme; las de carácter real: prohibición de enajenar bienes, secuestro, retención y el embargo.

Etapas del Proceso:

La Instrucción Fiscal y la Policía Judicial: el Fiscal resolverá el inicio de la instrucción fiscal si considera que existen fundamentos suficientes para imputar a una persona la participación de un hecho delictivo, y dentro de las veinte y cuatro horas siguientes a su aprehensión, sin perjuicio del Debido Proceso.

La Etapa Intermedia: que con el Dictamen del Fiscal, convoca a las partes a una Audiencia Preliminar, la que conlleva a resolución de dictar sobreseimiento Provisional del Proceso y del imputado, o Definitivo del Proceso y del imputado, o el auto de llamamiento a juicio.

El Juicio: donde se comprueba conforme a derecho la existencia material de la infracción, así como la responsabilidad del acusado, y que lleva inmersa una sentencia impuesta por los Tribunales Penales, excepto los casos de fueros que son juzgados por las Cortes de Justicia; y,

La Impugnación: el derecho a impugnar corresponde a las partes, a través de determinados Recursos.

## **1.6. EL CÓDIGO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y DE REHABILITACIÓN SOCIAL**

El Código de Ejecución de Penas y Rehabilitación Social se publicó en el Registro Oficial Nº 282, de 9 de julio de 1982, mediante el cual se regula la ejecución de las penas privativas de la libertad, y se establecen las normas a seguir dentro de los Centros de Rehabilitación Social en cuanto a la rehabilitación de los internos que mantengan sentencias firmes y ejecutoriadas, o no, así como la conformación de los Organismos Directivos que dirigen la política de rehabilitación social del país, esto es:

**El CONSEJO NACIONAL DE REHABILITACION SOCIAL (CNRS)** que es el que se encarga de la determinación de la política penitenciaria con el propósito de obtener la rehabilitación integral de los internos, y que está conformado de la siguiente manera:

El Ministro de Gobierno o su delegado, quien lo preside

Un Delegado de la Corte Suprema de Justicia, y será el Vicepresidente

El Ministro Fiscal General o su delegado

El Director de Recursos Humanos y Empleo del Ministerio del Trabajo

El Director del Instituto de Criminología de la Universidad Central

El Delegado de la Federación Nacional de Servidores Públicos de Rehabilitación Social

El Director Nacional de Rehabilitación Social, quien será el secretario ejecutivo del Consejo.

### **LA DIRECCION NACIONAL DE REHABILITACION SOCIAL (DNRS),**

La cual es dependiente del Consejo Nacional de Rehabilitación Social con personería jurídica y capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones. Tendrá su sede en la ciudad de Quito y jurisdicción nacional, constituyendo la unidad ejecutiva superior de la política penitenciaria.

### **LOS CENTROS DE REHABILITACION SOCIAL (CRS)**

Administrados por los Directores nombrados por el Consejo de Rehabilitación Social y que son los encargados de recibir a los internos que han transgredido las normas penales y en donde con el apoyo del Departamento de Diagnóstico y Evaluación y Tratamiento se hace la selección, ubicación y tratamiento de los internos con miras a su reincorporación hacia la sociedad y a la obtención de la disminución de la delincuencia.

### **CLASIFICACION DE LOS CENTROS DE REHABILITACION SOCIAL**

De seguridad máxima: en los cuales primará el aislamiento, la disciplina y la custodia, la distribución de internos no será mayor de veinte personas.

De seguridad media: en los que primará el trabajo, la educación, la distribución de los internos no será mayor de cien personas.

De seguridad mínima: primará el trabajo y la educación auto controlada, su distribución se realizará en grupos homogéneos de diez personas, en este nivel se organizarán y funcionarán las fases de Prelibertad y Libertad Controlada en cualquiera de sus formas.

El Código de Ejecución de Penas y Rehabilitación Social define al régimen penitenciario como el sistema científico aplicado a las personas que cumplen penas privativas de la libertad, tendientes a su rehabilitación integral, de tal suerte que al egresar de los centros de rehabilitación social puedan reinsertarse a la sociedad como elementos positivos;

El mencionado Cuerpo legal tiene que ver con el Sistema Penitenciario el mismo que tiene por objetivo el tratamiento y la individualización de las penas, a través del régimen progresivo: diagnóstico, pronóstico y ubicación de los internos.

El Art. 11 del Título III, al referirse al Sistema y Régimen Penitenciario señala:

El Sistema Penitenciario Nacional reconoce el principio de la individualización de las penas que consagra su derecho penal y, consecuentemente aplicará, en la ejecución de las mismas, la individualización del tratamiento.

Art. 12.- el objetivo que persigue el Sistema Penitenciario es la rehabilitación integral de los internos, proyectada hacia su reincorporación a la sociedad, y a la prevención de la reincidencia y habitualidad, con miras a obtener la disminución de la delincuencia.

## **DEL REGIMEN PENITENCIARIO, DE LA EJECUCION DE LAS PENAS Y EL TRATAMIENTO**

### **Sistema Penitenciario: Algunas Definiciones.**

Al Sistema Penitenciario se lo ha definido de diferentes formas, así tenemos que:

Eugenio Cuello Calón,<sup>7</sup> manifiesta que un Sistema Penitenciario que responda a las ideas de esta época, supone un cierto número de exigencia mínimas, que son más de carácter humano y aspiren a realizar una función reeducadora, estas exigencias se centran en:

Una clasificación de reclusos encaminada a facilitarles el tratamiento adecuado,

Un régimen de asistenta moral, religiosa, social y de educación intelectual,

Un régimen de trabajo, principalmente encaminado a la formación del recluso, como medio de subvenir a sus necesidades en vida libre,

Un régimen sanitario y alimenticio adecuado, una organización de cultura y la asistencia médica adecuada,

Un régimen disciplinario firme, pero humano.

Guillermo Cabanellas, respecto del Sistema Penitenciario señala que es: cada uno de los regímenes que se proponen metódicamente la regeneración del delincuente, durante el lapso de su condena, que cabe incluso abreviar por el buen comportamiento. La higiene en celdas o locales comunes, el cuidado personal, intelectual y moral de los presos, su estudio psicológico, el trabajo, los premios y las sanciones son otros tantos elementos que intentan individualizar al sujeto y conseguir que su restitución a la libre vida social coincida con su corrección y regeneración e incluso que éstas se anticipen al tal reintegro para evitar la reincidencia”<sup>8</sup>

Para Rogelio Moreno Rodríguez, el Sistema Penitenciario “es el método de ejecución de las penas privativas de la libertad, que se propone llevar a la práctica, los fines que se asigna a dichas penas”<sup>9</sup>

En tanto que la Enciclopedia Jurídica Omeba describe al Sistema Penitenciario como, “métodos de ejecución de las penas privativas, que se proponen llevar a la práctica, los fines que le asignan a dichas penas. El Sistema Penitenciario de

---

<sup>7</sup> Cuello Calón, Eugenio :”la Moderna Penología”, Edit. Bosch, Barcelona. 1974

<sup>8</sup> CABANELLAS GUILLERMO: “Diccionario Derecho Usual “. Tomo VII. Pag. 453. Argentina, año

<sup>9</sup> MORENO RODRIGUEZ, ROGELIO:”Vocabulario de Derecho y Ciencias Sociales

cada país está determinado por el conjunto de normas constitucionales, leyes, decretos, reglamentos, que regulan la ejecución de las penas privativas de la libertad”<sup>10</sup>

UTEHA, en su diccionario enciclopédico, define al Sistema Penitenciario como en: “cada uno de los adoptados o propuestos como método, para la ejecución de las penas privativas de la libertad”<sup>11</sup>

El Sistema Penitenciario en el Ecuador, ha tenido varias etapas: a principios del siglo XVIII en la ciudad de Quito, existían tres cárceles: La cárcel de la Real Audiencia, que fue fundada en 1573, que funcionaba en el propio edificio del Gobierno; la cárcel común para varones; y la cárcel Santa Maria para mujeres. Fabricas de tabacos y de pólvora, ubicadas en Guayaquil, y Latacunga, respectivamente, funcionaban como cárceles temporales, especialmente para mestizos e indígenas.

“La mayoría de las mujeres condenadas a prisión de por vida, eran encerradas en algunos de los conventos de monjas, en la cual, debían servir a las religiosas como criadas, con derecho sólo al alimento”<sup>12</sup>

“En plena lucha por la independencia y en los inicios de la República, se mantuvo vigente la “ley de Indias”, que fue establecida la pena de prisión como sanción penal, la multa, el fuste, la mutilación de miembros, el exilio, las galeras y la pena de muerte”<sup>13</sup>

El Art.208 de la Constitución plantea que el régimen penitenciario del país debe perseguir como fin sustancial la educación y capacitación para el trabajo de los internos, que les permita una adecuada reincorporación social, a cuyo efecto se debe contar con centros carcelarios dotados de recursos materiales e instalaciones adecuadas para atender la salud física y psíquica de los internos,

---

<sup>10</sup> Diccionario Enciclopédico Omeba. Edit. Libreros. Tomo XXV. Pág. 632. Buenos Aires. 1968.

<sup>11</sup> Diccionario Enciclopédico UTEHA. Edit. Hispano Americana. Tomo IX. Pág. 797. México. 1953.

<sup>12</sup> Vega Uquillas, Víctor: Evaluación Jurídica del Código de Ejecución de Penas y Rehabilitación Social. Tesis Doctoral, Quito. 1996.

<sup>13</sup> Vega Uquillas, Víctor: Evaluación Jurídica del Código de Ejecución de Penas y Rehabilitación Social. Tesis Doctoral, Quito. 1996.

y cuya administración se encuentre a cargo de instituciones estatales o privadas sin fines de lucro vigiladas por el Estado.

El Art. 13 del Código de Ejecución de Penas manifiesta que para el cumplimiento de los objetivos señalados en el artículo 12 se establece el régimen progresivo, que es el conjunto de acciones técnicas administrativas por medio de las cuales el interno cumple la pena que le ha sido impuesta, en uno de los centros de rehabilitación social.

El Art. 14 del mencionado cuerpo legal señala las características generales del régimen progresivo y que son:

- a.- la individualización del tratamiento
- b.- la clasificación biotipológica delincuencial
- c.- la clasificación de los Centros de Rehabilitación Social
- d.- la adecuada utilización de los recursos legales en beneficio del interno

El Art. 15 señala que el régimen especial de tratamiento que se proporcionará a los procesados se regirá por las normas que se determinen en el Reglamento General de los centros de rehabilitación social y las disposiciones del Consejo Nacional de Rehabilitación Social.

El Art. 16 y para los fines de diagnóstico, pronóstico y ubicación de los internos en los centros de rehabilitación social, se adoptará el régimen basado en el siguiente procedimiento:

- 1.- Diagnóstico:
  - a.- estudio del delito
  - b.- estudio socio-familiar y ecológico
  - c.- estudio médico y psicológico
  - d.- definición del mecanismo criminodinámico



e.- definición del índice de peligrosidad

2.- Pronóstico:

Establecimiento de las escalas de peligrosidad en base al índice de adaptación para la progresión en el sistema.

3.- Ubicación: en base a la clasificación biotipológica:

- a.- por estructura normal
- b.- por inducción: litación social
- c.- por inadaptación
- d.-por hipoevolución estructural
- e.- por sicopatía.

Dentro de cada centro la progresión se realiza por la evaluación permanente del interno en los aspectos social, biosicológico, laboral y disciplinario

El Código consta de 56 artículos con disposiciones generales y transitorias y un artículo final, según el siguiente detalle:

Título I: El ámbito de la ley (Art.1)

Título II: Los Organismos encargados de la aplicación de la Ley

Capítulo I: El Consejo Nacional de Rehabilitación Social

Capítulo II: La Dirección Nacional de Rehabilitación Social.

Título III: Del Sistema y Régimen Penitenciario

Capítulo I: Del Sistema Penitenciario.

Capítulo II: Del Régimen Penitenciario, la Ejecución de las penas y el Tratamiento

Título IV: De la Rehabilitación Social y el Tratamiento de los Internos

Capítulo I: De los Centros de Rehabilitación Social

Capítulo II: Clasificación de los Centros de Rehabilitación Social

Capítulo III: De la Ubicación Poblacional de los internos y de la Progresión en los Centros de Rehabilitación Social.

Capítulo IV: De La libertad.

Capítulo V: De la Libertad Controlada

Capítulo VI: De las Rebajas

Capítulo VII: De la Organización y Funcionamiento de los Centros de Rehabilitación Social.

Título V: Del Ingreso, Permanencia y Egreso de los Internos y Asistencia Para Liberados

Capítulo I: El ingreso.

Capítulo II: De la Permanencia y Egreso.

Capítulo III: De la Asistencia para liberados.

Título VI: Disposiciones Generales.

Disposiciones Transitorias.

ARTICULO FINAL

## **REGLAMENTO AL CÓDIGO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y DE REHABILITACIÓN SOCIAL**

El Presidente de la República, Dr. Gabriel García Moreno, mediante Decreto Ejecutivo de 27 de agosto de 1869 dispuso la construcción del Panóptico en Quito, en cuyo honor lleva su nombre, y en 1874 se inauguró con 70 reos entre políticos y criminales recogidos en todo el país.

El 25 de Mayo de 1884, el Presidente de la República, José María Caamaño, expidió el primer Reglamento Carcelario. Desde dicha época ya se consideraba que el delincuente debería ser reintegrado a la sociedad, ya se hablaba de una rehabilitación social y una reinserción del delincuente con la sociedad.

En la segunda administración del General Leonidas Plaza Gutiérrez, mediante Decreto Ejecutivo de 21 de Mayo de 1915, publicado en el Registro Oficial número 808 de 22 de Mayo de 1915, se expide el Reglamento para la Penitenciaría Nacional, y en el que “se observará en el establecimiento un apartamiento absoluto de los reos en las celdillas durante la noche y en el trabajo en comunidad durante el día en los talleres” manteniendo así el sistema Auburniano fundamentado en el silencio, la disciplina y el trabajo.

Asimismo, siendo Presidente el Dr. Isidro Ayora, y conocedor de que la cárcel municipal no tenía una normativa interna y que eran los alguaciles los que ejercían de policías de la cárcel, el 4 de marzo de 1925, dicta el reglamento de la cárcel municipal, lo que dio lugar a la creación de cárceles en las capitales de provincia al mando de los municipios.

En 1959 se realiza una nueva compilación de leyes penales y se establecen los patronatos de cárceles y trabajos reglamentarios.

El Reglamento al Código de Ejecución de Penas y Rehabilitación Social, actualmente publicado en el Registro Oficial Nr0. 379 del 30 de Julio del 2001, con la necesidad de aplicar a las personas que cumplen penas privativas de la libertad, sistemas científicos tendientes a su rehabilitación integral, de

modo que una vez que egresen de los centros de rehabilitación social, puedan reincorporarse a la sociedad como elementos positivos de ella, para lo cual se encuentra publicado en el Registro Oficial N° 379, de 30 de julio del 2001, consta de 45 artículos y una disposición transitoria, según el siguiente detalle:

Capítulo I: De Los organismos y funcionarios a quienes compete su aplicación

Capítulo II: De La Dirección Nacional de Rehabilitación Social

Capítulo III: Del Sistema Penitenciario

Capítulo IV: Clasificación de los Centros de Detención, Directores, Personal de Custodia y Vigilancia y de los Departamentos

Capítulo V: El ingreso, Permanencia, Progresión, Rebajas, Prelibertad y del Egreso y de la Asistencia para Liberados.

## **CAPITULO II**

### **2.1.-LOS ANTECEDENTES SOBRE REPATRIACION O TRASLADO DE PERSONAS CONDENADAS EN EL DERECHO INTERNACIONAL. REFERENCIAS UTILES DEL DERECHO HUMANITARIO.**

La importancia de la presente Tesis radica en el análisis de la investigación que he realizado, y para adentrarme al tema, materia de mi investigación en el que abarco a uno de los sectores más vulnerables como son los presos de las treinta y tres cárceles que existen en el país, y que buscan a través de Instrumentos Internacionales suscritos aprobados y ratificados por el Gobierno

ecuatoriano, ser escuchados, con la única finalidad de obtener una oportunidad de vida, en el marco de los Derechos Humanos que todo individuo de la especie humana lo tiene; este Instrumento en el Derecho Internacional es el Convenio Bilateral que mantiene los Gobiernos de Ecuador y Colombia, y tiene una institución que se denomina la “ la Repatriación o Traslado de Personas Condenadas” hacia sus países de origen con la finalidad de terminar de cumplir la pena, y lograr de esta manera un acercamiento con sus familiares; para ello, es necesario hacer conocer ciertos antecedentes que a través de la historia de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario se han utilizado, los mismos que han generado jurisprudencia y que han servido de base para la instauración de normas internacionales en donde los prisioneros de guerra eran tratados sin piedad ni consideración, hasta que organismos como la Cruz Roja Internacional, Media Luna Internacional, Derechos Humanos entre otros, establezcan que los prisioneros de guerra debían ser tratados como seres humanos, respetando su condición, concediéndoles además ciertos privilegios como la Repatriación hacia sus países.

Los Prisioneros de guerra en Derecho internacional, es el término utilizado para designar a los miembros de las fuerzas armadas de una nación enemiga que son capturados, así como a los no combatientes que se rinden tras su captura en una contienda.

Entre los griegos era corriente aniquilar por completo a la población masculina adulta de un Estado conquistado. Los antiguos bretones mataban a sus prisioneros con técnicas crueles. Más de 30.000 cristianos fueron ejecutados por los turcos otomanos durante la guerra de Candía.

En Europa occidental, en cambio, la institución de la caballería en la edad media introdujo en los conflictos bélicos la práctica de la generosidad con el enemigo abatido, lo que llevó al establecimiento de la redención del cautiverio a través del pago de un rescate.

En los tiempos modernos, las Conferencias de La Haya, la Convención de Ginebra de 1906 y la más detallada de 1929 promulgaron normas internacionales sobre el respeto humanitario hacia los prisioneros, que, según se acordó, en modo alguno podrían ser tratados como criminales, aunque sí utilizados en trabajos no militares. El prisionero tiene derecho a una comida adecuada, ropa y alojamiento, así como a enviar cartas y paquetes. Un miembro de las fuerzas armadas debe proporcionar a sus captores el nombre y la graduación, pero no puede ser obligado a dar ninguna otra clase de información al enemigo.

Las Convenciones de Ginebra de 1906 y 1929 fueron transgredidas de forma total por los regímenes totalitarios de algunos países contendientes en la II Guerra Mundial. A su término, una nueva Convención de Ginebra fue pactada en agosto de 1949, y a ella se adhirieron la mayoría de los países de la comunidad internacional, aunque no se puede afirmar que la hayan observado siempre con rigor. Así, es destacable el uso continuo de las técnicas de lavado de cerebro y torturas psicológicas a los prisioneros por parte de Corea del Norte en la guerra de Corea. Al comienzo de la contienda, los beligerantes habían prometido acatar los principios de la Convención de 1949, pero las fuerzas comunistas coreanas cometieron un gran número de violaciones de los mismos. Por su parte, los coreanos del Norte atribuyeron las mismas y mayores atrocidades a sus enemigos del Sur, y con gran intensidad, a los principales aliados de éstos, los soldados estadounidenses. Una situación análoga fue la que se produjo con motivo de la guerra de Vietnam (1954-1975), contra Francia, y Estados Unidos; de nuevo confrontando el Norte contra el Sur. Muchos prisioneros sufrieron los efectos de los malos tratos: la comida era insuficiente e inadecuada, y lo mismo cabe decir de la ropa, el refugio o la asistencia médica. Durante estas dos contiendas, el problema de la repatriación de los prisioneros fue muy discutido, ya que numerosos prisioneros comunistas decían no querer volver a sus lugares de origen. Por ello, las Naciones Unidas establecieron el principio de la repatriación voluntaria, a tenor del cual el espíritu de la Convención se transgrediría si el prisionero volvía a su tierra en contra de su voluntad. El principio se incorporó por fin al acuerdo de armisticio el 26 de julio de 1953, después de un año de 'punto muerto', e

incluyó la garantía de que los beligerantes podrían emprender conversaciones con los prisioneros que se opusieran a la repatriación.<sup>14</sup>

Antes del siglo XX, las normas consuetudinarias eran más sustanciales que los tratados internacionales aplicables a los detenidos, cuyos contenidos eran relativamente escuetos al exigir un trato humano para los prisioneros de guerra, los Convenios de La Haya de 1899 y 1907 contienen una prohibición implícita de la tortura. Después de las experiencias de la Primera Guerra Mundial, el Convenio de Ginebra relativo al trato de los prisioneros de guerra de 1929 define con suma precisión el estatuto de los prisioneros y sus condiciones de vida, y, sobre todo, incorpora la protección contra actos de violencia, crueldad, insultos y presiones. Este Convenio también establece los fundamentos de la Agencia Central de Informaciones (que después se convirtió en la Agencia Central de Búsquedas) del Comité Internacional de la Cruz Roja, (CICR) encargada, en particular, de centralizar los datos sobre los prisioneros de guerra y restablecer el contacto entre éstos y sus familiares.

Los Convenios de Ginebra de 1949 marcan un hito, ya que extienden el ámbito de aplicación, hasta entonces limitado a los conflictos armados de carácter internacional, a los conflictos armados no internacionales, y establecen las condiciones de detención y el trato debido a los detenidos.

Impulsado por el movimiento de los derechos humanos, el trato de las personas detenidas se transformó en una cuestión sumamente preocupante para la comunidad internacional. A partir del decenio de 1960, el sistema de los derechos humanos y el marco de protección que proporciona a los detenidos se fortalecieron con la adopción del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966), la Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes (1984) y la Convención sobre los Derechos del Niño (1989). En el marco de las Naciones Unidas también se adoptaron textos no vinculantes que establecen normas internacionales reconocidas Asimismo, las asociaciones profesionales se dotaron de códigos de conducta como los

---

<sup>14</sup> Microsoft Encarta 2006. © 1993-2005 Microsoft Corporation).

Principios de Ética Médica pertinentes al papel que desempeña el personal de la salud, en particular los médicos, en la protección de los presos y arrestados, contra la tortura y cualquier otro trato o castigo cruel, inhumano o degradante. También se adoptaron tratados regionales, como la Convención europea para la protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales (1950), la Convención Americana sobre Derechos Humanos (1969), la Carta Africana sobre los Derechos Humanos y de los Pueblos (1981), la Convención interamericana para prevenir y sancionar la tortura (1985), y el Convenio europeo para la prevención de la tortura y de las penas o tratos inhumanos o degradantes (1987).

En paralelo con esta evolución, se crearon organismos, mecanismos, instituciones y organizaciones que velan también por la suerte de los detenidos y cuyos cometidos también incluyen las visitas a los lugares de detención.

Si bien la liberación de los prisioneros de guerra de los Aliados (Francia, Reino Unido y sus aliados) se efectuó rápidamente al término de la guerra, su repatriación se estipuló en los acuerdos de armisticio, la de los prisioneros procedentes de los antiguos Imperios centrales (Alemania, Austria-Hungría y Otomano especialmente) llevó mucho más tiempo en resolverse. Los aliados decidieron que, de conformidad con la Convención de La Haya de 1907, dichos prisioneros iban a ser liberados solamente después de la concertación de la paz establecida en los tratados de Versalles, Saint-Germain-en-Laye, Neuilly y Sevres (reemplazado por el tratado de Lausana), firmados con los diferentes Imperios centrales.

En 1919, el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) pidió, en repetidas ocasiones, al Consejo Supremo Interaliado la repatriación de los prisioneros de guerra de los Imperios centrales, en poder de los aliados o en Rusia.

El 23 de marzo de 1920, el Consejo Supremo autorizó la repatriación de los prisioneros de guerra detenidos en Siberia. El 11 de abril del mismo año, la Sociedad de las Naciones encargó al doctor Nansen que organizara, en colaboración con el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) que se ocupó



de las modalidades prácticas, la repatriación de todos los prisioneros. Así pues, en total, más de 425.000 personas fueron repatriadas bajo los auspicios del CICR.

Inmediatamente después de la guerra, la Cruz Roja prestó también socorro a las víctimas de las revoluciones que estallaron en Rusia y Hungría. En ambos países, la revolución planteó un nuevo problema al CICR y a las Sociedades Nacionales interesadas, que se vieron enfrentados, por primera vez en su historia, con una guerra civil.

En Rusia, la Cruz Roja de Rusia, que existía desde 1867, pasó a llamarse, por decreto gubernamental del 6 de enero de 1918, Cruz Roja de los Soviets, que el CICR reconoció en 1921.

Desde 1914, había un delegado del CICR residente en Rusia, Edouard Frick, que trabajaba en estrecha colaboración con la Sociedad Nacional. En 1918, a pesar de los acontecimientos, se encargó al delegado del CICR que prosiguiera sus actividades. Así pues, agrupó, por propia iniciativa, a las Cruces Rojas neutrales que habían permanecido en Petrogrado. Cuando Frick regresó a Ginebra en 1918, realizó varias actividades, particularmente en favor de las personas detenidas por motivos políticos. Sin embargo, el CICR obtuvo la autorización para volver a Rusia solamente en 1921 a fin de emprender las grandes operaciones de repatriación de los prisioneros de los Imperios centrales detenidos en Siberia.

En marzo de 1919, estalló la revolución en Hungría. El delegado del CICR, Rodolphe Haccius visitó, el 28 de abril de 1918, una prisión situada cerca de Budapest, donde había detenidos políticos. Era la primera vez que el CICR efectuaba visitas de esa índole, que salía de su ámbito de acción habitual. Haccius consiguió que se liberara a los enfermos y las personas mayores de 60 años. Ulteriormente, gracias a sus gestiones, la delegación del CICR en Budapest logró la liberación de 280 detenidos políticos extranjeros. En colaboración con la Cruz Roja Húngara, prestó también ayuda a la población

civil.

La Primera Guerra Mundial exigió que el movimiento de la Cruz Roja y, sobre todo el CICR, desplegara ingentes esfuerzos. Entre las importantes actividades realizadas por el CICR de 1914 a 1918, algunas tuvieron un considerable desarrollo o importantes repercusiones durante y después de la guerra. Es particularmente el caso de la Agencia Internacional de Prisioneros de Guerra, así como de las gestiones emprendidas contra la guerra química. (CICR)

## **2.2. SIMILITUDES Y DIFERENCIAS ENTRE PRISIONEROS DE GUERRA Y PRISIONEROS COMUNES**

### **SIMILITUDES:**

Tanto los prisioneros de guerra como los presos comunes son presos por una autoridad detenedora.

Los prisioneros de guerra y los presos comunes han sido tratados en forma inhumana y sobreviven en condiciones infrahumanas de hacinamiento.

A los prisioneros de guerra y a los presos comunes desde siempre les han sido conculcados en sus derechos humanos.

Los prisioneros de guerra y los presos comunes en todo el mundo no tienen derecho a un buen trato, ni legal peor humanitario.

### **DIFERENCIAS**

Para realizar las siguientes diferencias entre los prisioneros de guerra y los presos comunes, se ha tomado en cuenta al Convenio de Ginebra relativo al trato debido a los prisioneros de guerra, teniendo así que:

a.- “La Potencia detenedora debe tener en cuenta al dar el traslado de los prisioneros de guerra tras su llegada al campamento, los intereses propios de los prisioneros, con miras a no agravar las dificultades de su repatriación”.

Los presos extranjeros que habitan en cárceles ecuatorianas, aún no pueden ser trasladados hasta su país de origen, pese a haber Convenios sobre Repatriación, entre algunos estados, y en el caso de estudio, con Colombia, mucho menos se tomará en cuenta sus intereses.

b.- “El Traslado de los prisioneros de guerra se efectuará siempre con humanidad y en condiciones que no deberán ser menos favorables que las de las tropas de la potencia detenedora en sus desplazamientos. Siempre habrán de tenerse en cuenta las condiciones climáticas, a las que estén acostumbrados los prisioneros de guerra y, en ningún caso serán perjudiciales para su salud”.

Vemos entonces que los prisioneros de guerra si tienen derecho a ser trasladados o repatriados, no así los presos comunes extranjeros, que habitan en cárceles ecuatorianas hasta su lugar de origen a fin de continuar el cumplimiento de la pena impuesta en el otro estado, pese a existir el Convenio sobre Repatriación entre Ecuador y Colombia.

c.- “La Potencia detenedora proporcionará a los prisioneros de guerra, durante el traslado, agua potable y alimentos suficientes para mantenerlos en buen estado de salud, así como la ropa, el alojamiento y la asistencia médica que necesiten, tomará las oportunas precauciones, especialmente en caso de viaje por vía marítima o aérea, a fin de garantizar su seguridad durante el traslado y hará, antes de la salida, la lista completa de los prisioneros trasladados”.

El Reglamento Operativo (o de ejecución) para la aplicación del Convenio sobre repatriación de presos entre Ecuador y Colombia, señala que si el detenido pide la repatriación por razones humanitarias, deberá acompañar las pruebas que demuestren dichas razones de humanidad. (Las que serán siempre asuntos de enfermedades terminales).

d.- “Los gastos que originen los traslados correrán por cuenta de la Potencia detenedora”.

En el Reglamento sobre el Procedimiento del Convenio de Esmeraldas entre Ecuador y Colombia, señala que los gastos del traslado debe asumir las autoridades de la nacionalidad del repatriado, sin perjuicio que dichos gastos sean asumidos por el propio preso, si los tiene; lo que está obligando a mi modo de ver es que si el condenado quiere ser traslado a su país de origen para terminar de cumplir la pena impuesta, debe asumir los gastos que demandan el mismo, lo que daría pie a incrementar la corrupción de ciertos miembros de seguridad.

e.- “Las Partes en conflicto tendrán la obligación de repatriar sin consideración del número ni de la graduación y después de haberlos puesto en condiciones de ser trasladados, a los prisioneros de guerra gravemente enfermos o heridos”.

Los presos comunes extranjeros, deberán cumplir con una serie de requisitos para poder acogerse al traslado hasta su país de origen, requisitos que son de una y otra Parte.

Las Partes adoptan criterios para establecer orden de preferencia. Siendo uno de ellos que el detenido debe haber cumplido el 50 % de la pena.

### **2.3. ASPECTOS RELACIONADOS CON LOS DERECHOS HUMANOS ANTECEDENTES SOBRE LOS DERECHOS DEL HOMBRE**

Tres fueron los hechos históricos básicos, tanto para los derechos del hombre así como más tarde, para los derechos humanos:

1.- La Carta Magna y otros instrumentos. La Carta Magna del rey Juan sin Tierra de Inglaterra, obtenida el 15 de junio de 1215, reconoció la libertad de las personas y de los bienes respecto del rey, y el consentimiento de la

comunidad para crear impuestos. Posteriormente la Petición de Derechos de 1626, estableció la necesidad del voto del parlamento para exigir cualquier contribución y la prohibición de arrestar a los ciudadanos si la orden no se fundaba en ley anterior. En 1679 se aprobó la Ley de Hábeas Corpus, que consagró la inviolabilidad de la persona, a menos que no hubiese orden judicial fundada en ley del país como consecuencia de faltas cometidas a juicio y defensa, según la ley.

2.- En la Declaración de la Independencia de los Estados Unidos, 1776, en uno de los párrafos del manifiesto se señaló: “tenemos como verdades evidentes por sí mismas, que todos los hombres han sido creados iguales; que han sido dotados por el Creador de ciertos derechos inalienables; que entre estos se hallan la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad; que para asegurar estos derechos se han establecido los gobiernos entre los hombres, los cuales derivan sus poderes justo del consentimiento de los gobernados; que siempre que una forma de gobierno llega a ser destructora de estos fines, es un derecho del pueblo alterarlo o abolirla, e instruir un nuevo gobierno, basándose sobre los principios y organizando sus poderes en la forma que crea más aptos para hacer probablemente su felicidad”

3.- La Revolución Francesa de 1789 y los derechos del hombre y del ciudadano. Asegurada la independencia de los Estados Unidos, el general María José La Fayette, que había colaborado directamente con los americanos en su lucha contra los ingleses, se había identificado con los derechos fundamentales de los ciudadanos proclamados por los promotores de la revolución norteamericana, y al estallar la Revolución Francesa, regresó a su patria, llevando como Mensaje del Nuevo Mundo las normas jurídico-políticas que sirvieron de base a la independencia norteamericana, y muy especialmente el conjunto de principios que contiene el “Bill of Rights” de la Constitución de los Estados Unidos de 1787.

## **CARTA DE LAS NACIONES UNIDAS**

“La Organización de Naciones Unidas, constituida al terminar la segunda guerra mundial, sintió preocupación por los derechos humanos desde su comienzo, en la Carta adoptada en 1945, los Estados Miembros se comprometieron a trabajar para lograr el respeto universal a los derechos humanos, hace referencia al desarrollo y estímulo del respeto los derechos humanos y las libertades fundamentales de todo, sin hacer distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión, tres años después estos derechos se plasmaron en la Declaración Universal de los Derechos Humanos”, adoptada sin votos en contra y proclamada por la Asamblea General el 10 de diciembre de 1948. La adopción de la Declaración Universal fue un acontecimiento de gran importancia, porque reconocieron que todas las personas tienen derechos fundamentales, y que éstos tienen vigencia universal, por ello se deduce que todos los gobiernos deben proteger los derechos de las personas bajo su jurisdicción, y que una persona cuyos derechos han sido violados puede recurrir contra el gobierno responsable”<sup>15</sup>

“El mismo día en que se aprobó la Declaración Universal, la Asamblea General pidió a la comisión de Derechos Humanos que preparase un proyecto de pacto relativo a los derechos humanos. En 1950 la Asamblea General declaró que el goce de las libertades cívicas y políticas y el de los derechos económicos, sociales y culturales están vinculados entre sí y se condicionan mutuamente. La Asamblea decidió incluir en Pactos los derechos humanos y los derechos económicos, sociales y culturales, además el reconocimiento explícito de la igualdad de hombres y mujeres, el uno se refiere al Pacto internacional de los Derechos Civiles y Políticos, que reitera el derecho a la vida, la libertad y la seguridad de las personas y prohíbe especialmente la privación arbitraria de la vida. Este es un tratado que obliga a los estados que se convierten en parte de él, a respetar y garantizar los derechos; y, el Pacto Internacional de los derechos económicos, sociales y culturales”<sup>16</sup>

## **COMISION DE DERECHOS HUMANOS (ONU)**

---

<sup>15</sup> Tesis Doctoral: “La Internacionalización de la Justicia y los Derechos Humanos” Dra. Consuelo Silva

<sup>16</sup> Tesis Doctoral “La Internacionalización de la Justicia y los Derechos Humanos. Dra. Consuelo Silva

Es una de las comisiones orgánicas del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, establecida a principios de 1946 al amparo del artículo 1 de la mencionada Carta que contempla entre los propósitos de la ONU, el de realizar la cooperación internacional en el desarrollo y estímulo de los derechos Humanos y a las libertades fundamentales de todos, sin hacer distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión. La Comisión inició sus tareas en enero de 1947, bajo la presidencia de la señora Eleanor D. Roosevelt.

Las labores iniciales de la Comisión se encaminaron a la elaboración de una Declaración Universal de Derechos Universales y, después a la redacción de dos Pactos: sobre Derechos Civiles y Políticos, el uno; y sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales el otro.

“La Declaración Universal de Derechos del Hombre, redactada en los años 1947 y 1948, fue aprobada por la Asamblea General el 10 de diciembre de 1948. Su texto consta de un preámbulo y treinta artículos, en los cuales figuran los derechos y libertades fundamentales del hombre. La Asamblea proclamó la Declaración Universal como un “ideal común por el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse” y exhortó a la observancia de sus enunciados; por otra parte se instituyó a partir de 1950 el 10 de diciembre de cada año como Día de los Derechos Humanos en la comunidad internacional”<sup>17</sup>

## **LA DECLARACION UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS**

Corresponde realizar un análisis de ciertos artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, para relacionarlos con el tema de esta investigación, pero para ello, parto desde algunos conceptos o definiciones que sobre el tema se han dado a conocer, así tenemos que para el Dr. Julio Prado Vallejo expresa en la obra “no intervención y Derechos Humanos” de Marco Antonio Guzmán, que “los derechos Humanos no son producto de una ley ni originarios de un sistema jurídico ni otorgados por ningún gobierno. Ellos

---

<sup>17</sup> Miguel Antonio Vasco, Diccionario de Derecho Internacional

valen por sí mismos y nacen de la naturaleza del hombre. Lo que hace un sistema jurídico es reconocerlos, garantizarlos, promoverlos. La característica más destacada es su universalidad. Rigen en cualquier condición en la que un individuo se encuentre. Y la personalidad jurídica de todo ser humano los torna inalienables, imprescriptibles e irrenunciables. Por un lado la igualdad jurídica del hombre establece la universalidad de los derechos humanos, y por otro, un ordenamiento jurídico da fe de su existencia, promueve su vigencia, los garantiza en cuanto a su ejercicio o goce, tutelando su respeto, pero los derechos humanos son en sí anteriores a toda ley positiva”.

El Dr. Berman O. Barragán M. en su Tesis “el Desarrollo de los Derechos Humanos Frente a la Soberanía de los Estados. Análisis del “Plan de Derechos Humanos para el Ecuador” señala que la Declaración Universal de los Derechos Humanos “es el reconocimiento pleno de que el bienestar del hombre es el centro, es la razón de su misma existencia. Es el despertar a una nueva perspectiva de lo que es la vida humana, es un entendimiento de que no importa su expresión corporal de raza, sexo o condición social y política para merecer respeto, distinción, afecto, trato justo y equitativo. Basta ser parte de la especie humana para tener todas las consideraciones que tal calidad le da.

El Doctor Marco Antonio Guzmán C., en su libro “No intervención y Derechos Humanos”, nos dice que “el hombre reclama un derecho porque lo requiere para alcanzar un fin, para satisfacer una necesidad. No cabe pensar siquiera en una declaración de derechos vacía, que no haya nacido de una previa consideración de fines correspondientes, y que no tenga como último objetivo el cumplimiento de éstos; esa posibilidad debe estar condicionada únicamente por leyes ajenas a la voluntad de los hombres, físicas, biológicas, económicas, a las que el individuo haya de someterse necesariamente. Y las Declaraciones de Derechos Humanos no hacen, en el fondo, otra cosa, como lo advierte Sebastián Soler, que reflejar eses orden inexorable, pues, en definitiva, se enderezan a crear condiciones que equilibre, neutralice, si cabe el término, las mencionadas leyes, para hacer factibles la existencia y el bienestar humanos”.



La Declaración Universal de Derechos Humanos, resolución adoptada por unanimidad en diciembre de 1948 por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), está compuesta por 30 artículos, siendo su objetivo promover y potenciar el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales. Dicha declaración proclama los derechos personales, civiles, políticos, económicos, sociales y culturales del hombre, los cuales sólo se ven limitados por el reconocimiento de los derechos y libertades de los demás, así como por los requisitos de moralidad, orden público y bienestar general. La Declaración fue concebida como parte primera de un proyecto de ley internacional sobre los derechos del hombre. La Comisión de los Derechos Humanos de la ONU dirigió sus esfuerzos hacia la incorporación de los principios más fundamentales de la Declaración en varios acuerdos internacionales.

En 1955 la Asamblea General autorizó dos pactos de Derechos Humanos, uno relativo a los derechos civiles y políticos y el otro a los derechos económicos, sociales y culturales. Ambos pactos entraron en vigor en enero de 1966, tras una larga lucha para lograr que fueran ratificados.

El Art. 16 de la Constitución Política de la República del Ecuador señala que “el más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los derechos humanos que garantiza la Constitución”, por ello, al ser la vida y la integridad de las personas el bien supremo del Estado, es deber ineludible fortalecer y armonizar la legislación para una efectiva protección de dichos derechos expuestos.

La Declaración Universal de Derechos Humanos entre sus Considerandos dice:

Que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana;

Que el desconocimiento y el menosprecio de los Derechos Humanos han originado actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la Humanidad, y

que se ha proclamado, como la aspiración más elevada del hombre, el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencias;

Que es esencial que los Derechos Humanos sean protegidos por un régimen de Derecho, a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión;

Que los Estados Miembros se han comprometido a asegurar, en cooperación con la Organización de las Naciones Unidas, el respeto universal y efectivo a los Derechos y Libertades Fundamentales del hombre, y que una concepción común de estos Derechos y Libertades es de la mayor importancia para el pleno cumplimiento de dicho compromiso,

**“Artículo 1.** Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros”

Este artículo señala que los seres humanos desde el momento mismo de la separación del cordón umbilical, somos libres, y que nacemos con dignidad e inmediatamente adoptamos una identidad, la misma que es protegida por el derecho y las leyes, además que existe el derecho a tener una libre conciencia que individualiza la personalidad de cada ser, independientemente de su grado de cultura o lengua; pero aplicado este hermoso artículo a los detenidos de la Cárcel dos, claramente se puede observar que todo es una utopía. Pero, será que los seres humanos presos son libres e iguales? Pues NO, el hacinamiento en que viven los presos nacionales y extranjeros, aunado a una justicia lenta y sin respeto ni observancia a los preceptos consagrados en la presente Declaración Universal de Derechos Humanos, profesados a través de la Carta de Naciones Unidas, hace que estos pobres seres pierdan automáticamente su identidad, no teniendo derecho para desarrollar sus capacidades ni destrezas; no hay igualdad ante la ley, ni ante la sociedad, pues al cometer un delito son cubiertos de un total estigma que les marca para siempre.

La sociedad debe saber que el ser humano desde que nace, tiene un regalo de oro que es la libertad, así como que nace con valores y virtudes, pese a estar encerrados en una cárcel, tiene derechos y no se puede conculcarlos, ya que para hacerlos cumplir, hacen su aparecimiento las normas legales

**“Artículo 2. – 1.** Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición.

2. Además, no se hará distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o internacional del país o territorio de cuya jurisdicción dependa una persona, tanto si se trata de un país independiente como de un territorio bajo administración fiduciaria, no autónoma o sometida a cualquier otra limitación de soberanía”

**“Artículo 3.** Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona”

Todos tenemos derecho a la vida y sólo el Ser Supremo es el único quien tiene derecho a quitarla y a juzgarla, sin embargo se puede observar que la Función Judicial es la primera en violar este artículo, pues al represar las causas penales, se sobredimensiona el hacinamiento en las cárceles, lo que ha terminado en tragedia al interior ya que los internos desesperados por no ver resueltas sus causas o tener sentencias desproporcionadas, caen en depresiones y riñas, que conllevan a quitarse la vida, pues buscan su libertad a costa de todo.

**“Artículo 4.** Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre; la esclavitud y la trata de esclavos están prohibidas en todas sus formas”

La esclavitud fue abolida hace miles de años, allí estuvo la Etapa de la Comunidad Primitiva, posteriormente, la Etapa del esclavismo, en donde el amo y señor se enriquecía a costa de la venta de un esclavo para que le sirva en medio de una degradación total que vulneró todo derecho del ser humano.

Parecería que la esclavitud aún tiene vigencia pues hay muchos internos en las cárceles del país que son esclavos de una justicia lenta, y corrupta que conlleva la subyugación total denigrando al ser humano en toda su integridad.

**“Artículo 5.** Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes”

La esclavitud acabó en la historia dando paso a un nuevo modo de producción, que era el Feudalismo, y posteriormente el capitalismo, dejando atrás los maltratos físicos e inhumanos, pero, hoy en día en los albores del siglo 21, no deja de ser cierto que sigue existiendo una nueva forma de esclavitud o servidumbre para el ser humano, no sólo con la explotación de la fuerza física y mental para el trabajo, sino con la violencia generalizada, cuanto más de aquellos seres infelices que por una mala distribución de la riqueza, (en la que la brecha entre pobres y ricos cada día es mayor) han caído en manos de la justicia por el cometimiento de algún delito, y que purgan penas en cárceles de todo el mundo; aquí son sometidos a torturas, penas y tratos crueles o degradantes, dejando de lado el verdadero sentido de los Derechos Humanos, y que se proclama en su Declaración, violentando así todo derecho estipulado en convenios internacionales o la misma Carta de las Naciones Unidas que proclama la Paz; por otra parte al referirme al tema de mi investigación, cómo no se va a ejercer tortura y trato cruel a los detenidos extranjeros que quieren reencontrarse con su familia haciendo posible la repatriación a su país de origen, si los encargados de administrar justicia no se apiadan de atender sus requerimientos, sino más bien se les pone obstáculos como el cobro de multas a más de la pago de la condena, aún sabiendo que ni los detenidos nacionales tienen para sobrevivir cuanto más un extranjero que ni visitas tiene, o cuenta con la poca ayuda de su Consulado; de igual manera es tortura el retardo en el despacho de Consultas y Recursos y demorar la ejecutoria en su sentencia, arrancando así desde su interior toda esperanza de acercamiento familiar y hasta resocializador en la sociedad, pues se acrecienta el odio y rencor hacia los demás.

También hay que referirse a el maltrato de quienes ostentando uniforme hacen abuso del mismo, pues en sus investigaciones por saber “la verdad” al momento de la detención, torturan y llevan a sus víctimas al borde de la demencia, o la muerte, y pese a las constantes denuncias ante la ONU y demás organismos, pocos por no decir ninguno ha sido resuelto

**“Artículo 6.** Todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al reconocimiento de su personalidad jurídica”

El Código Civil considera persona “a todo los individuos de la especie humana” y señala además que éstas se dividen en naturales o jurídicas, esta última, ficticia, siendo capaz de ejercer derechos y contraer obligaciones, así como a ser representada judicialmente; la verdadera realidad aquí es que esta persona ficticia es la única que tiene derechos, mientras que una persona común que se encuentra en prisión no tiene acceso a este derecho pues se vulnera en todas sus partes el reconocimiento ante la ley, y por el contrario es víctima de todo estigma.

**“Artículo 7.** Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta Declaración y contra toda provocación a tal discriminación”

Ya se encuentra hecho el análisis en el artículo anterior, pero vale la pena señalar que si todos somos iguales ante la ley, a que se debe que a un triste delincuente se le incremente las penas a pagar en una prisión, mientras que a un “señor de la sociedad y muchas veces hasta mandatario” no pueda ser enjuiciado en igualdad de condiciones, no solo por el abuso de poder sino por el cometimiento de un delito, en el que hasta se le facilita su huída, dejando en la impunidad sus actos.

Desafortunadamente este derecho es el más vulnerado puesto que el peor delito es ser pobre y cuantos quisieran recuperar la fe en la justicia Considero que este enunciado al menos en este país, ha quedado en letra muerta.

**“Artículo 8.** Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución o por la ley”.

El que tiene dinero para defenderse tiene derecho a comparecer ante los tribunales, pues puede contratar su defensa y lograr que la justicia “ brille con luz propia”, sin embargo el pobre que no posee recursos, comparece, si, pero a ser juzgado con todo el rigor de la ley, sin importar poco o nada que se violen sus derechos.

Además, cuántos recursos han solicitado los reclusos (apelación, nulidad, casación, revisión, etc, a fin de agilizar sus trámites, pero estos duermen el sueño de los justos, determinándose que ésta es la causa principal de hacinamiento en las cárceles del país.

**“Artículo 9.** Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, ni preso, ni desterrado”

Ya he hablado que la Libertad es el regalo de oro del ser humano, y si por alguna razón se transgreden las normas penales, éste, y para asegurar su presencia dentro de las etapas del proceso penal, debe ser detenido, pero bajo la orden de una autoridad competente y si en 24 horas no existe fórmula de juicio debe ser puesto en inmediata libertad; sin embargo todos sabemos que muchas veces se detienen a las personas sin fórmula de juicio por más de 24 horas, y mediante arbitrios que utiliza nuestra Policía Nacional, por presumir su responsabilidad en el ilícito investigado, convirtiéndose en juez y parte antes de que pueda hacer uso de su defensa.

Aquí radica el principal descalabro de la justicia penal, puesto que a pretexto de en contarse a una persona en “delito flagrante” se detiene arbitrariamente desvirtuando todo principio de presunción de inocencia, garantizados dentro del debido proceso.

**“Artículo 10.** Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial,

para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal”

Es cierto que los reos van hasta los Tribunales Penales para ser condenados o absueltos públicamente, según sea el caso, pero lamentablemente, el tráfico de influencias políticas o económicas hacen que la justicia no brille sino que se opaque parcializándola de tal manera que se dictan sentencias abruptas y desproporcionadas no acordes con la realidad penal del procesado.

**“Artículo 11. – 1.** Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa.

2. Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho nacional e internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito”

Este principio ha sido recogido por la legislación ecuatoriana, y nuestra Constitución en su Art. 23 numeral 7, señala que toda persona tiene derecho a que se presuma su inocencia, mientras no pruebe lo contrario, pero esto no es así, aquí, primero se le acusa de culpable y será el detenido quien demuestre su inocencia, a través de la Prueba, valorada en el juicio, cuando la carga de la Prueba debe corresponder al Ministerio público, o al estado, para demostrar fehacientemente que ha sido lastimado el bien tutelado o Bien Jurídico y que el acusado es el culpable de todo cuanto se le imputa.

Para la autora de la Tesis “Hacia una Cultura de Respeto y Promoción de los Derechos Humanos en el Ecuador”, Dra. Alicia Coloma Romero, “el altísimo nivel de politización de la justicia ecuatoriana, acarrea una cadena sistemática de violación de Derechos Humanos, a los que no se los respeta porque se hace caso omiso a la ley, al derecho y a la justicia, es así que a través de los diferentes medios la sociedad exclama en grito fervoroso la despolitización de la Justicia. Es en este sentido que se han expresado sendos manifiestos, pero

los responsables de reorganizar a esta importante función cierran los oídos y la vista a la desastrosa realidad”.

“El Colegio de Abogados de Pichincha demanda de los estratos de la administración de justicia una actitud de respeto a la institucionalidad y requiere del Consejo Nacional de la Judicatura eficacia en el cumplimiento de sus obligaciones y liderazgo para combatir severamente a la corrupción.

Se reclama que en las Cortes de Justicia, Tribunales y Juzgados haya una mayor voluntad para el despacho de las causas, despojándose de posturas referentes a consignas políticas.

Este Colegio señala que pese a las decantadas proclamas para desterrar la influencia dentro de la Función Judicial, poco se ha logrado y que su nefasta presencia se nota claramente, inclusive, más que en el propio Congreso Nacional.

Precisa además que, en estas circunstancias, sería grave y perjudicial que un organismo de tanta significación como el Consejo Nacional de la Judicatura caiga en una prematura etapa de crisis, porque desde su creación se fincó la fe y la esperanza en la misión que debía cumplir”<sup>18</sup>

**“Artículo 12.** Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques”

**“Artículo 13. – 1.** Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado.

2. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país”

---

<sup>18</sup> Edgar Hidalgo Albuja, Presidente del Colegio de Abogados de Pichincha. Ultimas Noticias. Opinión, 1 septiembre 1999.)



De acuerdo con mi criterio, los ecuatorianos si tienen el derecho para circular libremente dentro del país, pero en caso de ausentarse y para ingresar al país deben demostrar su nacionalidad con su respectivo pasaporte, cédula de identidad, partida de nacimiento, salvo el caso de haber prohibición de salir del país y que esté ordenada por juez competente, de acuerdo a la ley, o por haber obtenido la naturalización en otro país en la que se deberá observar las reglas establecidas para los extranjeros.

A este artículo no se acogen los reclusos ecuatorianos.

**“Artículo 14. – 1.** En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo, y a disfrutar de él, en cualquier país.

2. Este derecho no podrá ser invocado contra una acción judicial realmente originada por delitos comunes o por actos opuestos a los propósitos y principios de las Naciones Unidas”

El Asilo político, hace referencia a todo individuo que ingresa al estado receptor con el ánimo de permanecer y establecerse indefinidamente en él, por razones de persecución política o religiosa, y se lo hace a través de la vía diplomática o a la falta del representante diplomático, de gobierno a gobierno; este caso no ocurre con los reclusos pues para ellos existe la figura de la extradición o la deportación; la primera cuando el individuo ha cometido un delito en territorio ecuatoriano y existe privación de libertad del sindicado; y el segundo se trata de reclusos extranjeros, que una vez que han cumplido su condena son puestos a órdenes de la Intendencia General de Policía de la respectiva provincia, por el Director del Centro carcelario, para que a través del juzgamiento respectivo sean devueltos a su país de origen, por haber infringido las leyes ecuatorianas.

**“Artículo 15. – 1.** Toda persona tiene derecho a una nacionalidad.

2. A nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho a cambiar de nacionalidad”

La nacionalidad está intrínsecamente ligada al terruño en que nacen sus habitantes, sin embargo de acuerdo a la ley de extranjería, ésta se la puede obtener por nacimiento o por naturalización o pueden mantener la doble nacionalidad, perdiéndola en los casos expresamente señalados en la ley.

Cabe hacer una acotación respecto de los reclusos ecuatorianos, los cuales pierden los derechos de ciudadanía, una vez que ha sido dictada la sentencia condenatoria, por el cometimiento de un delito, interdicción que durará mientras no cumpla la totalidad de la condena.

**“Artículo 16.** – 1. Los hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil, tienen derecho, sin restricción alguna por motivos de raza, nacionalidad o religión, a casarse y fundar una familia, y disfrutarán de iguales derechos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del matrimonio.

2. Sólo mediante libre y pleno consentimiento de los futuros esposos podrá contraerse el matrimonio.

3. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado”

En nuestra legislación, la mujer y el hombre tienen reconocimiento jurídico a partir de los dieciocho años de edad, empero los menores adultos que si pueden contraer matrimonio siempre que haya la autorización de los padres o de quien ejerza la patria potestad.

El artículo en mención señala que la familia es el elemento fundamental de la sociedad, pero mucho se ve dentro de las cárceles ecuatorianas que con el apresamiento de uno de los cónyuges o padres, nacionales o extranjeros, como este elemento tan natural se pierde por completo pues esa familia se desintegra completamente dejando sumidos a los hijos en el mundo de la oscuridad y en donde el círculo se hace cada vez más vicioso.

**“Artículo 17.** – 1. Toda persona tiene derecho a la propiedad, individual y colectivamente.

## 2. Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad”

En los actuales momentos en los que la democracia sucumbe, no hay libertad para vivir, los ricos serán más ricos viviendo en la opulencia mientras que los pobres no tienen derecho a una propiedad, mucho menos a vivir en un ambiente sano y equilibrado, por ello son fáciles presas de traficantes de tierra.

**“Artículo 18.** Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia”

Nuestra Constitución acata la libertad de culto, y las personas privadas de su libertad tienen el derecho a que se respete y se garantice dicha libertad de conciencia y religión, por ello es que se han diversificado una cantidad de religiones todas las cuales al interior de las cárceles dan su aporte espiritual logrando cambios asombrosos en algunos de ellos.

La libertad de pensamiento en cambio es aquella que permite buscar y recibir información de toda índole, sin embargo en los detenidos poco o nada pueden expresar su sentir pues al parecer carecen de este derecho, en el momento de asistir a la audiencia de juzgamiento muy pocos tribunales permiten que el acusado exprese los motivos de su detención y su derecho a plantear cuestionamientos sobre los hechos y su detención a veces arbitraria, todo es expresado por su abogado defensor al cual tampoco le permite expresar todo el sentimiento del acusado sino sólo remitirse a las pruebas de descargo.

**“Artículo 19.** Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”

Esta libertad de opinión en nuestro país se encuentra coartada especialmente por los medios de comunicación, ya que exponen solo las cosas negativas de

las cárceles pero no hay propuestas para que las Funciones del Estado se preocupen por cumplir con la ley, desatando furias y rencores al interior de los centros carcelarios, desembocando muchas veces en tragedia.

**“Artículo 20.** – 1. Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas.

2. Nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación”

**“Artículo 21.** – 1. Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de representantes libremente escogidos.

2. Toda persona tiene el derecho de acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones públicas de su país.

3. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público; esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente, por sufragio universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto”

**“Artículo 22.** Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la Seguridad Social, y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad”

En materia penitenciaria, por cada Centro se cuenta con uno o dos profesionales médicos, el mismo que solo puede otorgar un diagnóstico y brindar cierto medicamento para paliar el dolor, debiendo el reo o sus familiares cubrir con las mismas, puesto que no se cuenta con un rubro presupuestario para medicinas básicas de los detenidos incrementando así el nivel de enfermedades, que van desde enfermedades de vías respiratorias hasta infecto contagiosas como la tuberculosis, venéreas, y hasta VIH, todo esto en medio de un hacinamiento deshumanizado.

**“Artículo 23.** – 1. Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo.

2. Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por trabajo igual.

3. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria, que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana, y que será completada, en caso necesario, por cualesquiera otros medios de protección social.

4. Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses”

**“Artículo 24.** Toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre, a una limitación razonable de la duración del trabajo y a vacaciones periódicas pagadas”

**“Artículo 25.** – 1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad.

2.- La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Todos los niños, nacidos de matrimonio o fuera de matrimonio, tienen derecho a igual protección social”

Este es un derecho que debe comprender también a la población carcelaria pues se trata de seres humanos que deben tener la oportunidad de una mejor vida, debiendo hacer notar que los detenidos con menos de un dólar diario se alimentan (070 centavos de dólar), no existen medicinas y apenas se cuenta con un policlínico para atender a más de dos mil internos solo en pichincha, debiendo ser el Estado responsable con la asignación de un presupuesto que atienda estas necesidades básicas.

**“Artículo 26.** – 1. Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada; el acceso a los estudios superiores será igual para todos, en función de los méritos respectivos.

2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales; favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos, y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz.

3. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos”

La educación es el pilar más fundamental para la rehabilitación de los internos, sin embargo apenas hay una o dos escuelas al interior de los centros en donde son los propios internos los maestros unos de otros así como los que generan sus recursos para la compra de material educativo, con el apoyo de los funcionarios del área, volviéndose el Estado en un irresponsable de la superación y cambio de estos seres que están desprotegidos de todo derecho.

**“Artículo 27.** – 1. Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten.

2. Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora”

**“Artículo 28.** Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los derechos y libertades proclamados en esta Declaración se hagan plenamente efectivos”

**“Artículo 29.** – 1. Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que sólo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad.

2. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, y de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática.
3. Estos derechos y libertades no podrán, en ningún caso, ser ejercidos en oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas”

**“Artículo 30.** – Nada en la presente Declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendentes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta Declaración”

#### **2.4. EL CONTEXTO ACTUAL: LA REPATRIACION DE PERSONAS CONDENADAS.**

Han servido de base las Repatriaciones de los Prisioneros de guerra, y su incidencia en el derecho internacional a través de la celebración de Tratados o Convenios, para tomar en el contexto actual la repatriación o traslado de personas que han infringido la ley y que han sido condenadas para que sean trasladados hasta su lugar de origen a fin de continuar cumpliendo la pena, y sean acercados un poco más a sus familiares con la finalidad de lograr su reinserción.

Se entiende por Repatriación o Traslado de personas condenadas el acto de auxilio judicial internacional por el que un Estado (Estado de condena) entrega a una persona condenada por sus jueces (penales) a otro Estado (Estado de cumplimiento) para que en este se cumpla la pena o medida de seguridad impuesta.

El fundamento de esta figura jurídica es doble. De una parte, responde a la internacionalización de la delincuencia en nuestro tiempo, a la que debe

responder también la internacionalización de la lucha contra la delincuencia: todos los Estados tienen que sentir como propia la necesidad de colaborar al buen funcionamiento de la Justicia penal de los demás Estados (al menos en el ámbito de una misma comunidad cultural y jurídica).

De otra parte, responde a la reinserción social como fin fundamental de la pena privativa de libertad, que ha sido la estrella polar durante décadas en el campo de la penología y que hoy día, aun habiendo decaído considerablemente su prestigio, todavía subsiste en textos internacionales y en ordenamientos estatales, como el artículo 25 de la Constitución española. Respondiendo a este principio rector la condena con independencia del lugar donde fue impuesta, debe de cumplirse en el Estado en el que el condenado tenga más arraigo, bien sea el Estado de la nacionalidad o aquel en el que el mismo tenga establecida su residencia.

Por el contrario, aparecen manifiestos los efectos negativos de la prisión cumplida en un país extranjero, dadas las dificultades de comunicación debidas al lenguaje, la cultura diferente, la anomia y la falta de contacto del penado con su familia o su medio ambiente.

Estas consideraciones generales no impiden sin embargo, que en los casos concretos se produzcan situaciones o motivaciones atípicas o extravagantes.

El notable aumento de la población reclusa lleva un mayor costo económico para la administración penitenciaria y provoca una superpoblación carcelaria la cual conduce con frecuencia en penosas condiciones de vida y en motines en los Centros Penitenciarios.

Durante la ejecución de las penas debe predominar la búsqueda de resocialización del delincuente, fundado en la dignidad humana, puesto que el objeto del derecho penal en un Estado no es excluir al delincuente del pacto social sino buscar su reinserción en el mismo. Por ello, es lógico que los instrumentos internacionales de derechos humanos establezcan esa función resocializadora del tratamiento penitenciario. Es perfectamente razonable



suponer que la repatriación de los presos puede favorecer su resocialización y fomenta la cooperación judicial entre los dos países.

## **25. LA LEGISLACIÓN INTERNACIONAL: LOS CONVENIOS INTERNACIONALES EN MATERIA PENAL DE REPATRIACIÓN. RELACIONES ENTRE ALGUNOS PAÍSES LATINOS.**

Las antiguas comunidades tenían acuerdos, misiones diplomáticas, extradiciones, etc.

En Grecia se reconocía una relación igualitaria en la identidad general entre sus pueblos, los pueblos ajenos eran considerados inferiores sin privilegios. Existía un derecho interno y otro para la aplicación a pueblos ajenos.

La necesidad de desarrollo facilitó y fomentó las relaciones, las guerras trajeron consigo el Derecho a la Paz, y organizaciones de arbitraje e inmunidades diplomáticas.

Roma tenía identidad y diferencia con respecto a Grecia. El punto semejante es la supremacía con respecto a los pueblos ajenos, tenía fijación definida sobre el imperio universal, pero se relacionó con los demás pueblos para su desarrollo, aceptando normas, emanados del principio de la supremacía de Roma, llegando a su conjunto de normas que en la época romana existían “jus gentim” que consideraba dos puntos fundamentales, el derecho referente a los extranjeros y el derecho natural.

En Sumer, la Baja Mesopotamia, sus ciudades se constituyeron en guerra con tendencia a la hegemonía pero mantuvieron relaciones pacíficas con señalamiento de sus respectivos derechos y obligaciones.

Egipto aporta el tratado más relevante del segundo milenio A.C, el de Paz y Alianza, en el año de 1221 entre Ramsés II de Egipto y Hattusili de los Hititas, destacando:

a.- se emplea una doble versión, una en egipcio y otra en idioma hitita.

- b.- se establecen reglas de extradición.
- c.- alianza militar para confrontar peligros internos y externos.
- d.- mantenimiento de la paz y amistad entre los dos países.
- e.- el tratado es producto de largas negociaciones.
- f.- la fijación de límites fronterizos para la conservación de la paz.

India aportó en el siglo V, A.C, una codificación denominada “leyes de manú” que contiene normas jurídicas de derecho y comercio internacional.

Los hebreos, a través de la Biblia permiten extraer los datos indispensables para fijar el grado de evolución en las instituciones de corte internacional que les regían.

En la Edad Media, los Tratados se confirmaban mediante juramento hasta el siglo XII.

El Primer ensayo para los estados europeos, es la Paz de Westfalia, en donde los estados adquieren conciencia de su personalidad, se plasma el principio de igualdad jurídica, independientemente de su credo y forma de gobierno.

En 1774 las colonias inglesas de Norteamérica se sublevan y en 1776 se constituye Estados Unidos de América, que ocasiona un conflicto internacional entre Inglaterra y Francia cuando ésta reconoce la nueva República; Inglaterra reconoce a los Estados Unidos de América, cuando aceptó someterse a las normas del Derecho Internacional.

La primera Guerra Mundial, y con el Tratado de Versalles firmado por las potencias victoriosas y Alemania en 1919, incluyó exposiciones modificatorias del Derecho Internacional, y se hicieron constar de la creación de la Sociedad o Liga de Naciones. En lugar de realizarse un reparto territorial de las colonias de las naciones vencidas se estableció un régimen de mandatos.

En la Segunda Guerra Mundial de 1937, Hitler estaba en condiciones de eliminar las restricciones que le imponía el Tratado de Versalles y obró con

medidas expansionistas, ésta segunda Guerra Mundial tuvo repercusiones como:

La Humanidad adquiere conciencia de la importancia de salvaguardar la paz. La rama del Derecho Internacional Público referida a los Derechos Humanos.

El Derecho Internacional es el conjunto de normas jurídicas que regulan las relaciones de los Estados, establece los derechos y deberes de los Estados en la comunidad internacional; determina las competencias de cada Estado y reglamenta las organizaciones e instituciones de carácter internacional.

Como hemos visto el Derecho Internacional aparece con el Estado moderno, después del Renacimiento, surge con los Estados de Europa, en el siglo XVI, en la Alta Edad Media y es posible como resumen, señalar varias etapas:

- a.- Del Renacimiento a la Paz de Westfalia
- b.- del Tratado de Westfalia hasta la Revolución Francesa
- c.- Las guerras napoleónicas terminaron con un acontecimiento internacional de gran importancia: el Congreso de Viena.
- d.- La Guerra Mundial (1914 – 1918) produjo un desaliento marcado respecto de la efectividad de este orden jurídico.
- e.- A partir de 1945 empezó a ser penetrado por circunstancias que alteraron este cuerpo legal, como muchos nuevos Estados, avances tecnológicos y el imperativo de considerar el bienestar como meta de la ideología y de la acción política. (Humberto Hugo Gómez Savín)

La eficacia del Derecho Internacional se funda en la voluntad de los estados y en la validez de los principios ético- jurídico, es producto de una comunidad de cultura e intereses.

Finalmente, hay que citar los dieciocho Tratados bilaterales ratificados por España, de los cuales la mayoría se han celebrado con países iberoamericanos, Brasil, Argentina, Paraguay, Perú, Bolivia, Ecuador, Colombia, Venezuela, Cuba, El Salvador, Costa Rica, Nicaragua, Panamá y

Méjico. Con Honduras y Guatemala hay tratados firmados pero pendientes de ratificación y con Uruguay y República Dominicana hay negociaciones en fase inicial. Chile, Costa Rica y Panamá, se han adherido al Convenio del Consejo de Europa. También hay que incluir entre los Convenios bilaterales firmados por España el celebrado con la Federación Rusa que por ahora no es Parte del Convenio del Consejo de Europa, y los realizados con países no europeos. Marruecos, Egipto, Tailandia. Hay un principio de negociación con Pakistán y con Australia

## **2.6. CONVENIOS INTERNACIONALES SUSCRITOS POR EL ECUADOR EN MATERIA PENAL**

- Acuerdo entre el Reino de España y la República del Ecuador sobre cooperación en materia de prevención del consumo y control del tráfico ilícito de estupefacientes, sustancias psicotrópicas y precursores químicos, suscrito en San Francisco de Quito el 30 de junio de 1999.
- Tratado entre el Gobierno de la República del Ecuador y el Gobierno de Australia sobre Asistencia Mutua en Asuntos Penales.
- Tratado de Cooperación Judicial en Materia Penal entre la República del Ecuador y la Confederación Suiza.
- Protocolo Adicional sobre Información en Materia de Derecho y Procedimiento Penales.
- Estatuto de Roma de la Corte penal Internacional.
- Convenio Sobre Comunicación de Antecedentes Penales y de Información Sobre Condenas Judiciales por Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas.
- Convenio entre la República del Ecuador y el Reino de España para el cumplimiento de Condenas Penales (prisioneros).
- Convenio entre el Gobierno del Ecuador y el Gobierno de los Estados Unidos mexicanos sobre Asistencia Jurídica Mutua en Materia Penal.
- Convención Interamericana sobre Asistencia Mutua en Materia Penal.
- Convenio entre la República del Ecuador y la República del Salvador para el cumplimiento de Condenas Penales.

- Acuerdo de Asistencia Jurídica Mutua en Asuntos Penales entre la República del Ecuador y la República Oriental del Uruguay.
- "Convenio de Cooperación Judicial y Asistencia Mutua en Materia Penal entre la República de Colombia y la República del Ecuador", suscrito en Santa Fe de Bogotá, D. C., el dieciocho (18) de diciembre de mil novecientos noventa y seis (1996).

## **2.7.- LOS CONVENIOS MARCO SUSCRITO POR EL ECUADOR EN MATERIA DE REPATRIACION.**

Los Convenios Marco son aquellos que sirven de matriz del cual emanan otros conexos.

La Constitución de la República en el Título VII de la Función Ejecutiva Capítulo I, del Presidente de la República en lo que se refiere a las atribuciones y Deberes señala:

Son atribuciones del Presidente de la República:

ART. 171 numeral 12

Definir la política exterior, dirigir las relaciones internacionales, celebrar y ratificar los tratados y convenios internacionales, previa aprobación del Congreso Nacional, cuando la Constitución lo exija.

El Ecuador se ha adherido a través de Decreto Presidencial a Convenios Internacionales en materia de Repatriación o Traslado sobre Personas Condenadas, con países como: España, Colombia, Salvador, República Dominicana, Perú; hay además la existencia de un Proyecto de Ley sobre Convención Interamericana para el cumplimiento de penas en el extranjero, el mismo que se basa en la cooperación internacional penal y judicial, y que reposa en el H. Congreso Nacional.

El mencionado Proyecto de Ley sobre “Convención Interamericana para el cumplimiento de penas en el extranjero”, tiene por objeto facilitar la rehabilitación social de las personas condenadas, otorgándoles a los nacionales de ambas Partes, privados de su libertad o en régimen de libertad condicional o libertad controlada, como consecuencia de una sentencia penal, la posibilidad de cumplir su condena en su medio social;

Así tenemos, que el Ecuador ha firmado Convenios Marco sobre la base de la Legislación Internacional en materia de Repatriación, los siguientes:

- El Convenio Europeo Sobre Traslado de Personas Condenadas, firmado en Estrasburgo, el 21 de marzo de 1983, el cual tiene por finalidad prestarse mutuamente la más amplia colaboración en el Traslado de personas condenadas, a través del Convenio establecido la persona podrá solicitar al Estado Parte ser trasladada a su territorio a cumplir su condena.
- Convenio Sobre Traslado de Personas Condenadas, suscrito en la ciudad de Esmeraldas, el 18 de Abril de 1990.
- Convenio Sobre Transferencia de Personas Condenadas entre la República del Ecuador y la República del Perú, suscrito el 11 de Agosto de 1999, entrado en el ordenamiento el 5 de mayo del 2000.
- Convenio Sobre Traslado de Personas condenadas suscrito entre la República del Salvador y la República del Ecuador, ( no se encuentra ratificado a la presente fecha).
- Convenio Sobre Traslado de Personas Condenadas entre la República del Ecuador y República Dominicana.

Todos estos Convenios tienen iguales definiciones:

1. "Sentencia", designará la decisión judicial definitiva en la que se impone a una persona, como pena por la comisión de un delito, la privación de la libertad

o restricción de la misma. Se entiende que una sentencia es definitiva cuando no esté pendiente recurso legal ordinario o extraordinario contra ella en el Estado remitente o que el término para interponerlo haya fenecido.

2. "Persona Condenada", designará a una persona que cumpla una condena impuesta por sentencia consentida o ejecutoriada, es decir, no sujeta a posterior impugnación.

3. "Estado receptor o de condena", designará el Estado al cual la persona condenada puede ser transferida o lo haya sido ya, con el fin de cumplir su condena.

4. "Estado remitente", designará el Estado que haya impuesto una condena y, del cual la persona condenada pueda ser transferida o lo haya sido ya.

5. "Condena", designará cualquier pena o medida privativa de la libertad por cumplirse en un establecimiento penal, centro de rehabilitación social, hospital u otra institución en el Estado remitente, que haya impuesto un órgano judicial, con una duración limitada o indeterminada, por razón de un delito.

## **2.8. INCUMPLIMIENTO DEL CONVENIO SOBRE LA REPATRIACION DE PRESOS COLOMBIANOS: CAUSAS, RAZONES.**

Para adentrarnos a este análisis, hay que tomar en cuenta que la mayoría de detenidos extranjeros (colombianos) en las cárceles de nuestro país, cumplen penas por delitos de drogas, y no es que haya incumplimiento para aplicar los Convenios de Repatriación sino que existen causas o razones que más son de índole judicial, y administrativo de ciertas instituciones, así enumero las que creo se han convertido en impedimento para acelerar el proceso de repatriación de presos condenados:

A partir del mes de marzo del 2004, los Gobiernos de Ecuador y Colombia decidieron impulsar el intercambio de presos, dando un trámite de celeridad y eficiencia, sin embargo ha habido una serie de inconvenientes en dicho trámite



de repatriación de presos a su lugar de origen y como resultado de ello ningún recluso cumple con las condiciones del convenio y por lo tanto no ha podido ser trasladado al país de Colombia, violentando así los postulados de toda norma internacional, como son los Tratados firmados y ratificados por ambos países y la estrategia de bajar el hacinamiento en las cárceles del país se ve quebrantada, así como la meta de acercamiento con sus familiares y la reinserción a la sociedad.

Entre los obstáculos que he podido encontrar en esta investigación de traslados o repatriación de presos colombianos a su país de origen, tenemos, entre otros:

#### **El Subrogado Penal del 50% y la Ejecutoria de la Sentencia Condenatoria:**

en meses atrás se efectuó una reunión de Alto Nivel con Autoridades del Gobierno Nacional, la Función Judicial y órganos de Seguridad, para tratar el tema del Subrogado Penal, contemplado en el convenio donde prevalece que para ser trasladado debe el detenido haber cumplido por lo menos el 50% de sentencia impuesta en cárceles ecuatorianas; la Comisión encargada de dicho análisis en una de sus conclusiones recomendó la revisión del convenio a fin de que el traslado de prisioneros colombianos sea únicamente con sentencia ejecutoriada, tal y como lo establecen los Convenios marcos de otras legislaciones internacionales y que hace alusión al intercambio de presos condenados.

Una vez que el Tribunal Penal en base al mérito de las Pruebas actuadas estipuladas en el Código de Procedimiento Civil y habiéndose demostrado fehacientemente la responsabilidad del imputado impone sentencia la misma que debería ser ejecutoriada inmediatamente y luego de los tres días posteriores de emitida, sin embargo y pese a que las reforma al Código de Procedimiento Penal desestiman la Consulta para ante las Cortes Superiores especialmente en delitos de Drogas, los tribunales Penales hacen obligatorio este proceso y envían los procesos ante el Superior, y dada la congestión de las Cortes, la confirmación de dicha sentencia para que cause ejecutoria se alarga o duerme el sueño de los justos hasta que haya quien se apiade de

resolver dichas Consultas, a lo que se suma que en el Ecuador no existió Corte Suprema de Justicia por casi un año, en virtud de su “reestructuración”; Este es uno de los obstáculos que se presentan para que la sentencia no se ejecute y se pueda obtener uno de los requisitos para el trámite de repatriación o traslado de presos; además de que hay casos de sentenciados que por no estar de acuerdo con la sentencia dictada por el Tribunal Penal interponen Recursos de Casación y de Revisión, por lo que las Cortes deberán primero resolver la Consulta “obligatoria” para posterior resolver las peticiones de las partes.

El art. 193 de la Constitución establece que las leyes procesales procurarán la simplificación, uniformidad, eficacia y agilidad de los trámites. El retardo en la administración de justicia, imputable al juez o magistrado, será sancionado por la ley;

“ Justicia que tarda no es justicia” es el clamor de los internos de las 33 cárceles del país, esto en cuanto al despacho de sus causas penales que involucran la sentencia en firme o ejecutoriada para acogerse a la repatriación, no se puede establecer aún una sola Sala de las Cortes de Justicia en la que el despacho oportuno y con celeridad sean dadas, lo que ha provocado sentimientos iracundos por la mayoría de los internos que buscan en empleados, funcionarios y personal de vigilancia saciar sus sentimientos con hechos que arrojan saldos de violencia( fugas, rehenes, motines, etc, y que son muestras claras del rechazo a la violación de principios y garantías del derecho internacional expresado en diferentes tratados y convenios como la Carta de la ONU, Comisión interamericana de Derecho Humanos, etc.)

Al respecto la Convención Americana sobre Derechos Humanos en su art. 4 del Capítulo II de los Derechos Civiles y Políticos, en lo referente al Derecho a la Vida señala:

Art. 4 “toda persona tiene derecho a que se respete su vida....”, claro está que este artículo hace relación a los países donde no se ha abolido la pena de muerte, pero se señala que ésta será impuesta sólo en los delitos más graves,

ni tampoco se impondrá a los menores de dieciocho años o más de setenta, así como tampoco a las mujeres embarazadas.

Art. 8. Garantías Judiciales: Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable.....”

Aquí hay que señalar que nuestra Constitución establece la presunción de inocencia hasta que se determine legalmente su culpabilidad, y que durante el proceso se deben observar las normas del debido proceso para así ejercer los derechos y garantías constitucionales.

Art. 24. Igualdad ante la Ley: “todas las personas son iguales ante la ley. En consecuencia, tienen derecho, sin discriminación, a igual protección de la ley”.

La Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, en su Preámbulo señala que “ todo acto de tortura u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes constituyen una ofensa a la dignidad humana y una negación de los principios consagrados en la Carta de la Organización de los Estados Americanos y en la Carta de las Naciones Unidas y son violatorios de los derechos humanos y libertades fundamentales proclamados en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos”.

Se conoce como Tortura a todo acto realizado intencionalmente por el cual se inflijan a una persona penas o sufrimientos físicos o mentales.

Asimismo se entenderá como Tortura la “aplicación sobre una persona de métodos tendientes a anular la personalidad de la víctima o a disminuir la capacidad física o mental, aunque no cause dolor físico o angustia psíquica”.

Art. 18 de la Constitución Ecuatoriana: “Las leyes no podrán restringir el ejercicio de los derechos y garantías constitucionales” sin embargo, mucho vemos que las leyes si restringen los derechos y garantías constitucionales, por ejemplo: la libertad como don sagrado de un individuo y que cada día se

escucha a la Comisión de Derechos Humanos sobre la detención arbitraria de personas, vulnerando el procedimiento penal; la presunción de inocencia y el debido proceso se violenta a cada instante y es conocido por todos, más aún cuando en las sentencias, de acuerdo al procedimiento penal, señala que deben ser resueltas luego de la deliberación del debate y expedirse dentro del tercer día posterior a la clausura del juicio, para ser notificada a las partes, y ésta de no haber ningún Recurso, causará ejecutoria; pero en la realidad esto no se da, pues en los delitos por drogas, se elevan en consulta las sentencias, a lo que se añade que cuando el condenado no está conforme con la sentencia impuesta, interpone el recurso de casación, siendo allí la otra parte del meollo del problema, tanto en la “Consulta” como en el Recursos de Casación, Nulidad, etc. en donde los procesos demoran tanto para resolverse y para ejecutoriarse la sentencia, restringiendo el ejercicio de los derechos de los detenidos a presentar sus solicitudes de repatriación.

Así vemos como si se restringen los derechos y garantías constitucionales de las personas, por su parte, el artículo 22 de la constitución manifiesta que el Estado será civilmente responsable en los casos de error judicial y por inadecuada administración de justicia, pero vale preguntarnos, se aplica esta disposición legal? Se conoce cuantos jueces y funcionarios judiciales han indemnizado a miles de personas que han causado daños irreparables?

Los jueces no pueden suspender ni denegar la administración de justicia por oscuridad o falta de ley, el contexto de la ley debe servir para ilustrar el sentido de cada una de sus partes, de manera que haya entre todas ellas la debida correspondencia y armonía, entonces allí sí este artículo imperará.

EL artículo 16 al 22 de nuestra Constitución Política señala que el más alto deber del Estado consiste, en respetar y hacer respetar los derechos humanos que garantiza esta Constitución, pero será realmente que se respetan los derechos Humanos en el Ecuador? Ya hemos hecho un análisis de la Declaración universal de estos Derechos y que son la práctica diaria de nuestro sistema de administración de justicia, no se trata de tenerlo escrito en el texto legal Supremo, sino de de llevarlos a la práctica, será entonces un papel

preponderante de la sociedad en su conjunto el exigir este respeto y su aplicación.

La correcta administración de justicia debe ser aplicada de manera idónea, para que no se rompa el imperio de la ley; no puede estar separada jamás de la ley, del derecho, la justicia y la sociedad motivando y credibilidad y que esta sea la justicia que tutele los derechos humanos, y el Bien Común.

En el Ecuador la justicia se encuentra secuestrada por la politización, haciéndola más injusta, con un rostro deshumano impartiendo a cada quien según lo que tiene, es decir con precio, a costa de la dignidad humana; asimismo, una consecuencia grave de las deficiencias en la administración de justicia es la situación del sistema de rehabilitación social del país. Existen numerosos y serios problemas en el interior del sistema penitenciario, los cuales en gran parte derivan, primero: de los retrasos en el sistema de justicia penal, lo que conduce a la sobrepoblación en las cárceles y, segundo: el inadecuado suministro de los recursos para suplir las necesidades básicas. Por lo tanto, requerimientos mínimos como una infraestructura adecuada, higiene, alimentación y acceso a atención médica no son siempre proporcionados, y no se cumple el compromiso de rehabilitación que proclama el sistema. El Gobierno reconoció lo anterior en sus observaciones del 19 de marzo de 1997.

#### **MULTAS A SER RECAUDADAS POR EL CONSEP A TRAVES DE LA JURISDICCION COACTIVA**

Otro de los obstáculos para que se cumpla el Convenio de Repatriación de presos condenados entre Ecuador y Colombia, pese a su ratificación, son las multas impuestas en las sentencias por delitos de drogas, y que deben ser recaudadas por el CONSEP, a través de un Juicio de Coactivas que deberá ser cancelado por los sentenciados, pero cómo pagar multas en delitos de drogas y conexos, las mismos que van desde los sesenta a ocho mil SMVG; cincuenta a cinco mil SMVG; sesenta a ocho mil; cuarenta a seis mil; treinta a cuatro mil quinientos; veinte a cuatro mil SMVG? (Todos estos valores de acuerdo a las reforma de la ley sobre Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas respecto de

la moneda nacional y que señala que debe entenderse que los montos son cuantificados o pagados en su equivalente en dólares de los Estados Unidos de América (Art. 12 L. 2000-4 R.O. S 34 de 13 de marzo del 2000). Es cierto que de acuerdo a nuestra legislación, en el Código de Procedimiento Civil se señala el trámite a seguir a fin de hacer efectivo el pago de lo que por cualquier concepto se deba al Estado, fundado en la orden de cobro y siempre que la deuda sea líquida, determinada y de plazo vencido, además describe que será el recaudador quien ordene que la deuda sea pagada o que se dimita bienes en tres días, ya que de no hacerlo se embargarán sus bienes; pero al referirnos que en las sentencias por delitos de drogas a más de llevar implícita la pena a cumplir dentro de los centros de rehabilitación, ésta también lleva inmersa una Multa estipulada por la gravedad ocasionada al Estado de elevados salarios mínimos vitales, entonces, la reflexión es cómo puede pagar un detenido una multa elevada en su costo, o que se le podría embargar para subastar y así saldar su deuda con el Estado?, Si ni siquiera los sentenciados ecuatorianos tienen para solventar sus gastos al interior de los centros de rehabilitación, mucho menos los extranjeros que poca o ninguna visita tienen, y la ayuda que sus Consulados les presta, apenas se remiten a útiles de aseo y limpieza?.

Para ilustrar con ejemplos de cuanto un interno extranjero debería de pagar por concepto de Multas al CONSEP, señalo lo que sigue:

Interno: JARAMILLO HERNANDEZ RUBEN DARIO, colombiano, sentenciado a la pena de ocho años de reclusión mayor ordinaria, por drogas, más una multa de 1.000smvg, que convertidos a dólares suman una cantidad de \$.4.000 dólares.

Interno: POSSO GUISAO WALTER, colombiano, sentenciado a la pena de ocho años de reclusión mayor ordinaria, más una multa de 1.000smvg, que convertidos a dólares suman una cantidad de \$. 4.000 dólares.

Interno: BERNAL GALVEZ HECTOR, colombiano, sentenciado a la pena de doce años de reclusión mayor ordinaria, por drogas, más una multa de 6.000smvg, que convertidos a dólares suman una cantidad de \$.24.000.

Interno: ISAZA VALENCIA MANUEL, colombiano, sentenciado a la pena de doce años, por el delito de drogas, más una multa de 6.000smvg, que convertidos a dólares suman una cantidad de \$.24.000.

Esta es la realidad de los detenidos acusados y sentenciados por el delito de drogas y toda la suma de dinero que deben pagar al Estado, desconociéndose que hasta la presente internos nacionales o extranjeros hayan pagado las referidas multas en razón de no poseer recursos; además todo esto se contrapone a lo estipulado en el Art. 23 numeral cuatro, y que en su parte pertinente dice:” Ninguna persona podrá sufrir prisión por deudas, costas, impuestos, multas ni otras obligaciones, excepto el caso de pensiones alimenticias.....”

Por su parte, el Congreso Nacional, en una medida de apoyo humanitario, el 6 de Mayo del 2004, en relación a que se han presentado dudas sobre la aplicación del artículo 208 inciso quinto de la Constitución Política de la República, expide una Ley Interpretativa al referido artículo 208, mediante Registro Oficial Nro. 345 de 31 de mayo y que sirve de base para la aplicación de las Repatriaciones de detenidos extranjeros a su lugar de origen, en la que se señala establece lo siguiente:

**“ART. 1.-** Interpretese el inciso quinto del artículo 208 de la Constitución Política, así: “ Dentro del territorio ecuatoriano la pena por delitos comunes será cumplida en los Centros de Rehabilitación Social del Estado, Sin embargo, con base en el principio de Reciprocidad internacional el Gobierno del Ecuador podrá suscribir convenios internacionales de intercambio de presos son sentencia ejecutoriada, a fin de que las personas condenadas por delitos comunes, cumplan la pena impuesta en los establecimientos carcelarios o penitenciarios de sus respectivos países de origen. Cuando hubiere víctima, agraviado u ofendido que haya reclamado la correspondiente reparación, se

requerirá su consentimiento expreso para que el condenado cumpla la pena en el establecimiento carcelario o penitenciario de su país de origen”.

En concordancia con lo establecido en la Ley interpretativa y referente al daño causado, esto es lo que corresponde al pago de multas impuestas en sentencia y que deben ser recaudadas por el CONSEP, y que de no hacerlo se negará la repatriación; al respecto, hay que invocar el artículo 23 numeral 4 de la Constitución Política y que taxativamente señala: “ninguna persona podrá sufrir prisión por deudas, costas, impuestos, ni otras obligaciones, excepto por caso de pensiones alimenticias...” por lo que a mi juicio, el rechazar o negar la solicitud de repatriación por no haber cancelado la multa impuesta en sentencia, implica que el condenado continúe purgando la condena sin poder acceder al beneficio que concede el Convenio Bilateral para que pueda terminar de pagar la pena en su país de origen; este consentimiento expreso como lo interpreta la ley debe ser otorgado por el Tribunal que dictó la sentencia, pues se debe tomar en cuenta que solamente se está cambiando de centro penitenciario como estipula el convenio;

Cabe señalar entonces, que esta ley interpretativa tiene dos propósitos: uno, velar por la plena vigencia de los derechos humanos, y otro, permitir que con base al principio de reciprocidad internacional, tanto ecuatorianos como colombianos cumplan sus penas en sus propios lugares de origen y acercarlos así a sus familias, lo que va a coadyuvar a la rehabilitación de estos presos y su reinserción.

Asimismo sobre la base de la mencionada reciprocidad internacional, el Ecuador puede suscribir con estados extranjeros convenios de intercambio de presos que mantengan sentencias debidamente ejecutoriadas para que cumplan la pena en establecimientos carcelarios de sus respectivos países de origen.

Por su parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores tiene interés con esa interpretación al artículo 208 de la Constitución, a fin de poder hacer realidad la Política Exterior a través de los Convenios con otros países.



## **REBAJAS DE PENAS: “DEL DOS POR UNO AL DIEZ POR UNO”**

El Código de Ejecución de Penas y Rehabilitación Social ha tenido algunas modificaciones en cuanto a Rebajas de Penas se refieren, así vemos que el mencionado Código de 1982, respecto del art. 33 establecía que “los internos que durante el tiempo de la condena observaren buena conducta y demostraren interés por su rehabilitación podrán obtener reducciones parciales de dicha condena **hasta por ciento veinte días anuales**, de acuerdo al Reglamento General” dados en los meses de enero y julio de cada año( en estos meses se dividía las rebajas de 60 días cada oportunidad).

El 17 de mayo de 1996, se publica en el Registro Oficial Nro. 948, la reforma al art. 33 del Código de Ejecución de Penas y Rehabilitación Social el que señala que:

“Que los internos sentenciados y aquellos sin sentencia que durante el tiempo de su condena o internamiento observaren buena conducta y demostraren interés por su rehabilitación, obtendrán reducciones automáticas de dicha condena, **por ciento ochenta días anuales contados desde su ingreso**. Con excepción de aquellos que no hayan cumplido con las normas, disposiciones y reglamentos del sistema penitenciario, cuyas faltas se harán constar en el informe de conducta, conferido por el departamento de Diagnóstico y Evaluación del Centro de Rehabilitación Social en donde se encuentren guardando prisión, de acuerdo con el Reglamento General”

El 29 de septiembre del 2001, mediante Registro Oficial Nro.422, surge una nueva Reforma al art. 33 del mencionado Cuerpo Legal en la que se señala que “los internos sentenciados y aquellos sin sentencia durante el tiempo de su condena o internamiento observaren buena conducta y demostraren interés por su rehabilitación, obtendrán reducciones automáticas de dicha condena, **por ciento ochenta días por cada quinquenio contados desde su ingreso**.”

Las rebajas del año de 1996, lograron establecer el llamado DOS POR UNO, que quiere decir que el interno que observare buena conducta desde su

ingreso se hacía merecedor a este beneficio de pagar la pena dos días por uno, por citar un ejemplo si un interno era sentenciado a la pena de ocho años, por su buena conducta se le rebaja a cuatro años de internamiento.

Sin embargo, comparto plenamente en su totalidad con el Comité de Prisioneros a nivel nacional, cuando señala que partir del mes de septiembre del 2001, y con las reformas al Código de Ejecución de Penas, “la historia de los Centros de Rehabilitación Social del Ecuador, comienza a vivir con mayor crudeza el cumplimiento de las condenas impuestas por los Tribunales Penales del país, pues es el H. Congreso Nacional quien modifica el sistema de Rebaja de penas, eliminando así todo estímulo y derecho, alejando a los internos de una verdadera rehabilitación, a consecuencia de esto las aulas que hay en los centros de rehabilitación empezaron a quedar vacías, las riñas al interior de los centros, se incrementaron, el poco trabajo que había empezó a desaparecer, y la violencia empezó a crecer, con el número de muertos anunciados en los noticieros, así como los intentos y fugas empezaron a ser el cotidiano vivir”. Situación por demás notoria, que ha convergido en un hacinamiento que bordea el 100 % de la capacidad instalada por el incremento de la población penitenciaria, según datos obtenidos del boletín estadístico 2004- 2005 DNRS)

Con fecha 23 de enero del 2006, en comunicación dirigida al señor Presidente Constitucional de la República, suscrito por la Dirección Nacional de Rehabilitación Social, la Federación Nacional de Servidores Públicos de Rehabilitación, El Comité Nacional de Prisioneros del Ecuador y Organizaciones de Derechos Humanos, en conocimiento de la resolución tomada por el Congreso Nacional en sesión desarrollada el 18 de enero del año en curso en el tratamiento a la Ley Reformatoria al Código de Ejecución de Penas y Rehabilitación Social, la misma que no contempla una reforma que permita cumplir con la misión institucional: la de “REHABILITACION SOCIAL”, expusieron lo siguiente:

“La sociedad ecuatoriana tiene como una de sus principales preocupaciones la inseguridad, por el desmedido incremento de la violencia y la delincuencia, sin embargo, el Estado ecuatoriano se ha preocupado únicamente de

incrementar la sanción, el control y la captura de quien infringe las ley, descuidando la prevención y la rehabilitación consecuencia de esta decisión, la población penitenciaria se ha incrementado significativamente, dejando de lado la misión institucional de rehabilitar al interno, a fin de que una vez que obtenga su libertad se reintegre positivamente a su familia y a la sociedad;

El 28 de septiembre del 2001, fecha de la publicación del Registro Oficial 422 de la Ley Nro. 2001-47, se reforma el Código Penal y el Código de Ejecución de Penas y Rehabilitación Social, en lo que se refiere a las rebajas de penas, previstas en el art. 33 de dicho cuerpo de leyes, cuando su art. 19 dispone: "en el art. 33 del Código de Ejecución de Penas y Rehabilitación Social, sustitúyase la frase:....hasta por ciento ochenta días anuales, por....hasta por ciento ochenta días por cada quinquenio". A saber, este derecho fue reducido drásticamente sin un sustento lógico, técnico, social, jurídico, científico, peor aún humano. El mismo que recoja el verdadero espíritu de reinserción social como instrumento motivador para la rehabilitación;

Las concepciones básicas que posibilitan las rebajas de pena, tiene que ver con la observancia de buena conducta y el interés demostrado por cada interno para su rehabilitación integral, de ahí que, a efecto de que la DNRS, no colapse, como indudablemente sucederá, por el alarmante hacinamiento que soporta, precisamente por el endurecimiento de condenas, se hace imposible dejar de mirar lo que sucede en otros países, donde los sistemas de rebajas se han convertido en el más alto estímulo y elemento fundamental en la motivación para el trabajo, el estudio, el buen comportamiento, y lógicamente con esto la rehabilitación, ante lo cual sugieren ante el Presidente de la República, y sabiendo que es indispensable reconocer de acogerse a los procesos rehabilitadores y que éste tenga parámetros de calificación técnicamente normados a fin de contar con un instrumento motivador para desarrollar y aplicar los programas laborales, educativos, culturales, deportivos, recreacionales, sociales, familiares, etc. que, en el Art. 33 del Código de Ejecución de Penas y Rehabilitación Social, se sustituya la frase...hasta por ciento ochenta días por cada quinquenio....por... del 5% hasta el 50% de la pena contados desde su ingreso, según los parámetros técnicos de calificación

sustentados en trabajo el 15 %, educación el 15%, en conducta el 15%, y en actividades extraordinarias en beneficio de la comunidad penitenciaria, el 5%”

Por su parte el Dr. Alfonso Zambrano Pasquel, Magistrado de la Corte Suprema de Justicia, al respecto de la reforma del Art. 33 del Código en mención señala: “una desacertada reforma del Art. 33 del Código de Ejecución de Penas y Rehabilitación Social del año 2001, contra cualquier propuesta de derecho penal humanitario, suprimió el beneficio de la Ley del 2 X 1, y se limitó las rebajas por buena conducta, a 180 días por quinquenio, que es equivalente a una Ley del 10 X 1, vale decir a un año de rebaja por cada diez años de cumplimiento de condena”

Asimismo, el Presidente del Comité de Prisioneros de la Cárcel dos, Rubén Darío Jaramillo Hernández, hace énfasis al decir que “Ecuador es el único país de Latinoamérica que no contempla un sistema de estímulos basado en rebajas para un proceso de Rehabilitación”

Es decir, el sentir de afectación que se dio con el impacto del incremento a las Rebajas de Pena, no es solo de la DNRS, sino que organismos de Derechos Humanos se han centrado en este tema, así como distinguidos juristas, y los propios prisioneros que como señalaba en líneas anteriores están realizando una lucha sin cuartel por la modificación del sistema de Rebaja de Pena, la derogatoria de la Detención en Firme, la prelibertad, libertad controlada, y el proceso de Repatriación a su país de origen con la finalidad de cumplir la pena y acercarse a sus familias, y por haber Acuerdos Bilaterales que respaldan su justo pedir.

Considero que el incremento de penas no es la solución para prevenir el cometimiento del delito o la criminalidad, ya que al incrementar la pena la reacción del detenido es de más violencia en la que poco o nada le importa las consecuencias, por su parte el sistema penitenciario no cuenta con la infraestructura adecuada para albergar a más prisioneros y lograr su reinserción a través de la rehabilitación, lo que ocasiona que el estado se convierta en el portavoz de mayor violencia delincuencia. Las Rebaja de pena

deben constituir el principal motivador en la rehabilitación y fuente vital para que los privados de libertad puedan convertirse en hombres de bien y puedan salir de las cárceles siendo productivos a la sociedad. Cabe recalcar que los internos se han agolpado en esta lucha sin cuartel a fin de retornar al dos por uno, a través de reformas que viabilicen el sistema de rebajas acordes a las normas internacionales de tratamiento de personas privadas de libertad.

**2.9. INEXISTENCIA DE UN ORGANISMO INTERNACIONAL APROPIADO QUE PERMITA QUE EL CONVENIO SOBRE REPATRIACION DE PRESOS ENTRE ECUADOR Y COLOMBIA SE CUMPLA? CANCELLERÍA, CORTE SUPREMA, MINISTERIO DE GOBIERNO, ORGANISMOS DE COLOMBIA, ETC.**

El Artículo I del Reglamento Operativo del Convenio de Esmeraldas señala que las Autoridades Competentes para aplicar el Reglamento sobre el Procedimiento de Personas sentenciadas y el Reglamento Operativo son:

- 1.- Por parte de la República de Colombia, el Ministro de Justicia y del Derecho.
- 2.- Por parte de la República del Ecuador, el Presidente de la Corte Suprema de Justicia.

Asimismo el Artículo II al referirse a las solicitudes de Repatriación presentadas por nacionales de uno de los dos Estados para se trasladados a su país de origen, señala que estas deberán ser formuladas por el condenado o su representante legal, por escrito, dirigidas a la Autoridad Competente del Estado Trasladante o a través de la Misión Diplomática correspondiente; es decir del enunciado se desprende que si existen entidades internacionales para que responda al pedido de Repatriación de los internos colombianos hacinados en cárceles ecuatorianas;

En un Programa televisivo de Colombia y denominado “LA NOCHE” (y que realizó una visita a las cárceles ecuatorianas, en octubre del 2005), éste en apoyo con la Senadora Alexandra Moreno Piraquive, señaló que Colombia, en 1995 firmó el Convenio de Repatriación con Ecuador, es decir más de una década, pero no se quiere aplicar dicho Convenio de Repatriación con Ecuador, porque existe hacinamiento en sus cárceles, empero, a través del debate de la Comisión Segunda del Senado se solicitó la ejecución de dicho

Convenio para trasladar a los detenidos colombianos a su país de origen y que éstos, una vez allá se acojan al beneficio de “LIBERTAD CONDICIONAL” que mantiene el Código Penal colombiano.

Para ilustrar los Organismos o entidades involucradas en este proceso tenemos:

Por Ecuador: la Corte Suprema de Justicia

Por Colombia: el Ministerio del Interior y de Justicia

Sin embargo a mi criterio, considero que este, no debe ser un trámite a nivel de Cortes de Justicia, sino que debe ser un trámite netamente administrativo que bien puede hacerse por vía Cancillería de ambos países, por el Ministerio de Gobierno ecuatoriano, el Ministerio del Interior y de Justicia; o el INPEC y la DNRS, ( a través de una Reforma al Convenio de Traslado de Personas condenadas) de esta manera se viabilizaría el trámite de Repatriación de sentenciados y no se caería en el ente burocrático de la Corte Suprema de Justicia en Ecuador así como en el Ministerio de Justicia y del Derecho en Colombia.

Cabe indicar que en entrevista obtenida con el Dr. Eufrasio Morales, Cónsul General de Colombia en Ecuador, así como la Dra. Leonor Ortiz, asesora Jurídica de dicho Consulado, éstos están en total acuerdo que se utilicen los medios más idóneos para contribuir en el traslado de personas condenadas a su país de origen, así como que se establezcan las reformas necesarias al Convenio y Reglamentos respectivos,

Por su parte, el Comité Nacional de Prisioneros, sugiere se impulse una Cumbre entre la Corte Suprema y el Ministerio del interior y de Justicia de Colombia a fin de unificar criterios, competencia y ayuda mutua con iniciativas que puedan destrabar el proceso y plantear una Reforma al Art. XI del Reglamento sobre el Procedimiento de Repatriación de Personas Condenadas entre Ecuador y Colombia, para que se pudiera omitir tanta documentación y se traslade al prisionero con tan solo la sentencia ejecutoriada, tal como lo

estipulan todos los convenios internacionales en lo referente al intercambio de prisioneros.

Asimismo se plantea que el Código de Ejecución de Penas del Ecuador otorga el beneficio de la Prelibertad y Libertad Controlada a partir del cumplimiento de las dos quintas partes de la sentencia impuesta, y según dictamen del Procurador del Estado el Director Nacional de rehabilitación Social, debe dar cumplimiento a este beneficio sin excepción, para lo cual hasta los sancionados por el delito de narcotráfico se acogen a esta gracia, sin embargo los extranjeros no lo pueden hacer por su situación de arraigo en el país, problemas laborales, vivienda y otros elementos que dificultan la toma de la decisión de las autoridades penitenciarias ecuatoriana, por lo que sugiere que se busquen los mecanismos para que los colombianos que se benefician con el proceso de prelibertad la puedan cumplir a través de la Repatriación en su país de origen, y que los jueces de ejecución de penas se comprometan a vigilar la terminación del cumplimiento de la pena.

Con esta nueva forma de trámite administrativo, se dará mayor celeridad a los mismos, y éste no deberá durar más de noventa días, tal como lo estipula el Reglamento y una vez que se haya cumplido con todos los requisitos preestablecidos por las Partes, de esta manera las acciones que se empleen contribuirán en beneficio de los internos colombianos que guardan prisión en cárceles ecuatorianas y a su vez se darían alternativas inmediatas para enfrentar los problemas de Hacinamiento. Debiendo también acogerse los demás países suscriptores de Convenios similares.

## CAPITULO III

### **3.1 EL CONVENIO SOBRE TRASLADO DE PERSONAS, VEHÍCULOS, EMBARCACIONES FLUVIALES Y MARITIMAS Y AERONAVES, SUSCRITO EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS.(CONVENIO DE ESMERALDAS) ANALISIS AL ART 86.**

El Artículo que hace alusión al mencionado Convenio de Repatriación o Convenio de Esmeraldas como así se lo conoce al interior del Centro de Rehabilitación Social de Varones de Quito Nr0. 2, y al que me referiré en esta parte de la investigación, es el que textualmente sigue:

**ARTÍCULO 86.** Las Partes convienen el reconocimiento mutuo de sentencias y la repatriación de los nacionales que hubieren sido sentenciados en la otra Parte, para que paguen la condena en la región de su domicilio. Así también acuerdan que, una vez iniciado el juicio, éste se sustancie ante los jueces nacionales del detenido, quien deberá ser puesto a órdenes de las autoridades nacionales competentes.

El Reglamento establecerá el procedimiento y fijará las excepciones a la repatriación.

Los nacionales de una Parte, que sean residentes permanentes o inmigrantes en el territorio de la otra Parte, no podrán acogerse a los beneficios de la repatriación.

Para adentrarme a su análisis hay que saber que los Gobiernos de Ecuador y Colombia suscribieron el 18 de abril de 1990 en la ciudad de Esmeraldas, el referido Convenio, así como las Partes adoptaron el Reglamento sobre el Procedimiento de Repatriación de Personas Sentenciadas, y el Reglamento Operativo sobre traslado de Personas Condenadas, suscrito el 7 de Abril de 1994 y el 29 de Julio de 1994, respectivamente en la ciudad de Quito- Ecuador.

Se creó mediante Resolución Nr0. 2245 del 18 de diciembre de 2003, el Comité de Repatriación de Presos del Ministerio de Justicia y del Interior de Colombia,



modificada por la Resolución Nr0. 1296 del 10 de agosto de 1004, el que tiene como función recomendar al Ministro de Interior y de Justicia la decisión a tomar frente a las solicitudes de repatriación que sean sometidas a su consideración por la Oficina Asesora Jurídica en cada sesión.

Ecuador y Colombia resolvieron recuperar a sus nacionales para juzgarlos con sus propios jueces y para que paguen la condena en el lugar más próximo al domicilio del sentenciado, de esta manera podrán alcanzar el acercamiento afectivo de sus familiares, y se propiciará su rehabilitación.

Al respecto el Convenio de Esmeraldas en su artículo 86, recuerda lo firmado por ambas Repúblicas en el marco del Derecho Internacional, habiéndose declarado exequible y ratificado en Santa Fe de Bogotá por ambos países el 11 de noviembre de 1992, así como su Reglamento sobre el Procedimiento de Repatriación de presos y su Reglamento Operativo.

Sin embargo este Convenio de Esmeraldas no se cumple, pese a haber la expresión de voluntades dentro del marco del Derecho Internacional, con relación a la vigencia de los Tratados.

Con el fin de optimizar la aplicación del artículo 86 del Convenio en mención, y para la aplicación de dicho Convenio se han dictado dos Reglamentos que se encuentran en plena vigencia, causando mayor burocracia, por lo que sería necesario que se unifique en un solo instrumento que establezca los procedimientos ágiles y de celeridad para tramitar las solicitudes de las personas sentenciadas y puedan estos cumplir la pena en sus países de origen con la finalidad de acercarlos al seno familiar y que de allí surja la iniciativa de reinserción social, para ello, la Comisión de Vecindad Colombo- Ecuatoriana, presentó un Proyecto de Protocolo y que reposa en el Ministerio de Relaciones Exteriores del Ecuador, para la aplicación del tantas veces nombrado Art. 86 del Convenio de Esmeraldas de 1990 referente a la Repatriación de Personas Sentenciadas, en este se señala que el Régimen penal tiene por objeto la reinserción de las personas condenadas a través de su reeducación y rehabilitación, y que para tal efecto sería provechoso dar a los nacionales

privados de su libertad en el extranjero como resultado de la comisión de un delito, las posibilidades de cumplir la condena dentro del país de su nacionalidad, sin embargo como ya lo mencioné para la aplicación de este Art. 86, se han dictado tanto el Reglamento de Procedimiento, así como el Reglamento Operativo, inflando aún más el volumen de desesperanzas de los acusados, permitiendo una burocracia lenta e ineficaz y hasta corrupta para el despacho de los trámites, por lo que comparto plenamente con este proyecto de unificar en un solo instrumento los procedimientos ágiles para tramitar las solicitudes entre los Estados Partes o de las personas sentenciadas para proceder a su repatriación.

Este Proyecto de Protocolo, señala que las penas impuestas en la República de Colombia a nacionales de la República del Ecuador, se cumplirán en la República del Ecuador; y que las penas impuestas en la República del Ecuador a colombianos se cumplirán en Colombia y las autoridades centrales para ejecutar dicho Protocolo serán por parte de Colombia, el Ministerio de Justicia y del Derecho, y por Ecuador, el Consejo de Rehabilitación Social, adscrito al Ministerio de Gobierno y que son denominadas autoridad Central competente; siendo la autoridad central competente del estado que dictó sentencia condenatoria quien solicite la repatriación por decisión propia o por pedido del sentenciado;

Dentro de los requisitos para acogerse a la repatriación, entre otros, están que el sentenciado sea nacional del estado al cual pide ser repatriado; que mantenga su hogar en el Estado al que pide su repatriación a fin de establecer vínculos que posibilite su reinserción a la sociedad con la sentencia debidamente ejecutoriada, y que haya cumplido al menos el 40% de la pena impuesta; que haya pagado en la medida de ser posible las costas judiciales y las indemnizaciones civiles por daños y perjuicios, si es que hubiere sido condenado a estas reparaciones económicas, o que garantice su pago en la medida que le sea posible, a favor del agraviado beneficiario de las mismas;

Añade que la autoridad central competente del Estado receptor será quien acepte o niegue dicho trámite y dentro de los 180 días contados desde la fecha

de recepción de la petición, el mismo que es susceptible de apelación a pedido del estado en el que se encuentre privado de la libertad el sentenciado.

Para el traslado del sentenciado, de ser aprobada su repatriación, el Estado en que se encuentre el sentenciado, lo trasladará a su costa hasta el puesto policial del Estado receptor en el Puente Internacional Rumichaca, debiendo estar presente el Ministerio Público quien acreditará sobre el estado de salud y más circunstancias que pudieren afectar los derechos fundamentales del sentenciado, y el Estado receptor tendrá las facultades de decidir el centro carcelario donde el sentenciado devengue la pena considerando su peligrosidad y la disponibilidad física del centro carcelario.

Asimismo los sentenciados repatriados al país del cual sean súbditos, tendrán derecho a que previa certificación de conducta en el centro de rehabilitación, la autoridad central competente del Ecuador, les aplique la redención de penas al tenor de lo dispuesto por la ley ecuatoriana signada con el número 118 tomándose en cuenta todo el tiempo que hubiere permanecido privado de su libertad.

A pesar de estar de acuerdo con parte del Proyecto de Protocolo para la aplicación del art. 86 en materia de repatriaciones, no comparto por ejemplo con que sea el Ministerio de Justicia y del Derecho de Colombia, quien sea parte de las autoridades competentes para ejecutar el Convenio y sus Reglamentos, y que sería acá en el Ecuador como el Ministerio de Gobierno, pues esto da oportunidad a que siempre las autoridades dependan de la coyuntura política y el reparto de puestos, en cambio si comparto que sea el Consejo de Rehabilitación Social quien sea la autoridad competente, pues de acuerdo con el Código de Ejecución de Penas, reformado, publicado en el Registro Oficial Nro. 227 de 13 de marzo del 2006, corresponde al CNRS, definir y establecer la política penitenciaria del Estado, esto va a permitir que los trámites sean ágiles y con oportuno despacho, pues le conviene al Sistema Penitenciario bajar el hacinamiento de las cárceles y propender hacia la visión del mismo que es la educación del sentenciado y su capacitación para el trabajo a fin de obtener su rehabilitación que le permita una adecuada

reincorporación social y esto se conseguiría con la repatriación de los internos colombianos a su país de origen; sin embargo de ello considero que el trámite debe ser llevado a cabo por los Ministerios de Relaciones exteriores de cada país, por tratarse a mi modo de ver de una trámite meramente administrativo en que la misiones consulares juegan un papel trascendental dentro de la cooperación internacional y de ayuda mutua.

Pienso que el convenio debe robustecer la cooperación entre Ecuador y Colombia, a fin de favorecer la resocialización de los condenados dentro del respeto de los Derechos Humanos, así como para que contribuya con la cooperación judicial y la integración latinoamericana, en esta nueva aldea que es la globalización, el objeto del Derecho Penal no debe excluir al condenado del pacto social, sino por el contrario debe buscar la reinserción en el mismo, siendo los instrumentos Internacionales una forma resocializadora dentro del sistema penitenciario.

Es necesario que se busque la forma de aplicar la Legislación Internacional en materia penal de Repatriación, esto es, la aplicación del Convenio de Esmeraldas entre Ecuador y Colombia ya que la legislación nacional se adecua a los instrumentos internacionales vigentes, teniendo en cuenta que Ecuador ha firmado Acuerdos Binacionales desde 1994 y en condiciones que permitan al Estado receptor preservar la dignidad de las personas repatriadas y garantizar el cumplimiento de las condiciones exigidas para su repatriación, acotando que para la aplicación de la Legislación Internacional de Repatriación son los Estados Partes las autoridades competentes, en este caso, en Ecuador la Corte Suprema de Justicia y en Colombia, el Ministerio de Justicia y del Derecho. Solo hay que darle un proceso de celeridad a los trámites teniendo en cuenta que la Repatriación tiene un rostro profundamente humano ante aquellos caídos en desgracia ante la Ley y por que la pobreza de todos los países no ha brindado una buena distribución de su riqueza.

### **3 .2. REGLAMENTO SOBRE EL PROCEDIMIENTO DE REPATRIACION DE PERSONAS SENTENCIADAS ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA**

## **DEL ECUADOR Y EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA (CONVENIO DE ESMERALDAS)**

El texto del citado Reglamento taxativamente señala:

Los Gobiernos de la República del Ecuador y de la República de Colombia, a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el “Convenio sobre Tránsito de Personas, Vehículos, Embarcaciones Fluviales y Marítima y Aeronaves”, suscrito en la ciudad de Esmeraldas, el 18 de Abril de 1990, en su artículo 86, establecen el procedimiento y precisan las excepciones para la repatriación de nacionales sentenciados por autoridades nacionales competentes de la otra Parte,

### **ARTICULO I. BENEFICIARIOS.**

Podrán ser Repatriados los nacionales de una Parte que hubiesen sido sentenciados por las autoridades nacionales competentes de la otra Parte.

### **ARTICULO II. EXCEPCIONES.**

No podrán acogerse a los beneficios de la repatriación:

- 1.- Los nacionales de una Parte que sean residentes permanentes o inmigrantes en el territorio de la otra Parte;
- 2.- Los sentenciados por un delito que no está tipificado en la otra Parte; y,
- 3.- Quienes tengan pendiente en el Estado trasladante otros procesos penales o el pago de indemnizaciones de responsabilidad civil.

### **ARTICULO III. AUTORIDADES COMPETENTES.**

Las partes designan como autoridades nacionales competentes para dar cumplimiento a las disposiciones de este Reglamento a la Corte Suprema de Justicia, en el Ecuador, y el Ministerio de Justicia y del Derecho en Colombia.

#### **ARTICULO IV. GARANTIAS.**

1.- Una vez concluido el proceso o cumplida la pena, el repatriado no podrá ser detenido, investigado, juzgado o condenado, por el mismo delito, en la otra Parte.

2.- Bajo ninguna circunstancia la condena impuesta por autoridades nacionales competentes de una Parte podrá ser aumentada en la otra Parte.

3.- Los beneficios otorgados al sentenciado, por autoridades nacionales competentes de una Parte, durante la privación de su libertad, serán reconocidos por la otra Parte.

#### **ARTICULO V. PETICIONARIOS.**

La solicitud de repatriación se formulará mediante escrito a la autoridad competente del Estado trasladante por:

- 1.- El interesado o su representante legal; o,
- 2.- El país de nacionalidad del sentenciado a través de su Misión Diplomática, previo consentimiento de la persona que va a ser trasladada.

#### **ARTICULO VI. LA SOLICITUD.**

La solicitud deberá contener la siguiente información básica:

- 1.- Nombres y apellidos del peticionario;
- 2.- Lugar y fecha de nacimiento;
- 3.- Numero del documento de identidad;
- 4.- La última dirección en el país de la nacionalidad;
- 5.- Nombre y dirección del Centro de Rehabilitación;
- 6.- Exposición de motivos para solicitar la repatriación; y,

7.- Declaración escrita del sentenciado o de su representante legal en la que manifieste su consentimiento para ser trasladado.

#### **ARTICULO VII. VERIFICACION.**

En caso de duda sobre la nacionalidad del peticionario la autoridad nacional competente solicitará, por la vía diplomática, el documento probatorio correspondiente.

#### **ARTICULO VIII. TRAMITE.**

1.- Las autoridades nacionales competentes conocerán y resolverán los pedidos de repatriación, caso por caso y en forma gradual.

2.- Las autoridades nacionales competentes de una Parte dispondrán de noventa días, contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud, para pronunciarse sobre el pedido de repatriación.

3.- La decisión soberana adoptada por las autoridades nacionales competentes de una Parte, de aceptar o denegar un traslado, será notificada al peticionario y a las autoridades nacionales competentes de la otra Parte.

4.- Siempre que no hubiese mediado solicitud del Estado receptor, éste podrá aceptar o denegar discrecionalmente el traslado.

#### **ARTICULO IX. ENTREGA DEL REPATRIADO.**

1.- En cuanto se dicte la providencia de repatriación, las autoridades nacionales competentes convendrán el lugar, día y hora de la entrega del sentenciado, dentro de los ocho días siguientes a la notificación.

2.- La entrega y custodia del repatriado podrá cumplirse en el Centro de Rehabilitación, en el puerto o aeropuerto más próximo o en el paso de frontera.

3.- Las autoridades nacionales competentes de una Parte, al momento de hacer la entrega del repatriado, podrán a disposición de las autoridades nacionales competentes de la otra Parte, los siguientes documentos:

- 3.1.- Copia de la sentencia y de las disposiciones legales aplicadas;
- 3.2.- Informe sobre el tiempo de la detención o de la condena, del otorgamiento de subrogados y de cualquier otra circunstancia de la detención de la condena;
- 3.3.- Informe médico, psicológico y social;
- 3.4.- Recomendaciones a tenerse en cuenta; y,
- 3.5.- Certificación del Estado trasladante en la que conste que el trasladado no tiene procesos pendientes en dicho Estado.

#### **ARTICULO X. GASTOS.**

Las autoridades nacionales competentes de la nacionalidad del repatriado asumirán los gastos del traslado, desde el momento en que sea puesto bajo su custodia, sin perjuicio de que tales gastos sean asumidos por la persona a trasladar si cuenta con los recursos para el efecto, lo cual será calificado por el Estado receptor.

#### **ARTICULO XI. CRITERIOS PARA EL TRASLADO.**

Las Partes adoptarán conjuntamente los criterios para establecer un orden de preferencias, teniendo en cuenta que uno de los criterios que prevalecen es el que las personas hayan cumplido, al menos el cincuenta por ciento de la pena, o cuando una de las Partes solicite el traslado por razones humanitarias.

#### **ARTICULO XII. INTERPRETACION.**

Ninguna de las disposiciones contenidas en este Reglamento puede ser interpretada en el sentido de que se atribuya a la persona un derecho al traslado.



Las dudas o controversias que pudieran surgir en la interpretación o ejecución del presente Reglamento serán resueltas directamente por las autoridades centrales definidas en el Artículo III del presente Reglamento.

## **OBSERVACIONES AL REGLAMENTO SOBRE EL PROCEDIMIENTO DE REPATRIACION DE PERSONAS CONDENADAS ENTRE EL GOBIERNO DEL ECUADOR Y EL GOBIERNO DE COLOMBIA**

Al respecto del análisis del presente Reglamento, el Embajador de Colombia, con fecha 4 de mayo del año en curso al informa a la Ministra de Relaciones Exteriores de Bogotá, su preocupación por la difícil situación que atraviesan sus connacionales al negárseles la repatriación, no solo por el criterio de solicitar las repatriaciones por razones de humanidad sino porque en virtud de lo previsto en el Reglamento Operativo sobre traslado de personas condenadas, el actual Presidente de la Corte Suprema de Justicia manifestó que para aprobar la repatriación debe el detenido haber cancelado la multa impuesta en sentencia por lo que acota que mantuvo una reunión de trabajo con el Presidente de la Corte Suprema de Justicia del Ecuador, solicitándole que bien podría ser que las Partes convengan en una modificación al Reglamento de Procedimiento, pues una decisión de esa naturaleza sería un obstáculo para las repatriaciones lo que causaría una frustración en los detenidos que esperan hacer efectivo ese beneficio y que reclaman las gestiones del Gobierno colombiano, por lo que en la referida reunión de trabajo, se adoptaron ciertas conclusiones que están establecidas en el Reglamento de Procedimiento de repatriación como las siguientes:

1.- Criterios para solicitar la repatriación por razones humanitarias, y que de acuerdo al mencionado Reglamento en su artículo XI establece la posibilidad de que “una de las partes solicite el traslado por razones humanitarias”, al respecto se precisó que cuando un interno solicite la repatriación por razones humanitarias, ésta debe ser avalada por el Embajador de Colombia, quien a su vez delega tal gestión a los correspondientes Cónsules, llegando a concluir que todo esté trámite lo hace aún más burocrático al trámite de repatriación, por lo se logró establecer que en la respectiva solicitud por parte del acusado ante la Corte Suprema de Justicia deberá, ésta deberá llevar la firma del Asesor Jurídico del Consulado, lo que va a permitir la agilidad del trámite pues sin

esperar que el Embajador comparezca dentro del proceso para ser oído respecto de las razones humanitarias del detenido, debiendo ser la Corte Suprema de Justicia quien califique las razones humanitarias del peticionario.

2.- Asimismo para evitar duplicidad en el trámite se hará saber al Presidente de la Corte Suprema de Justicia que sólo los Asesores Jurídicos del Consulado de Colombia podrán tramitar este expediente de repatriación para tener un criterio más institucional, y no así los Abogados particulares de los internos para evitar así se siga dilatando el mismo.

De igual manera, para el Ministerio de Relaciones Exteriores del Ecuador es una gran preocupación los problemas que han surgido y que han impedido una normal ejecución de dicho Reglamento de Procedimiento, situación que está por demás decir que perjudica a los ciudadanos de los dos países que aspiran cumplir los procesos rehabilitadores y cerca de su familiares; por ello este organismo propuso una reunión de alto nivel de funcionarios de ambas cancillerías con el fin de adoptar mecanismos ágiles que hagan posible la solución de los problemas presentados.

Por su parte, y como muestra de prioridad que el Ecuador da al tema, el entonces Ministro de Gobierno y Policía, Dr. Felipe Vega de la Cuadra, viajó hasta la ciudad de Bogotá para tratar dicho asunto con el Ministro de Justicia de Colombia y ver los mecanismos de solución para la ejecución del Convenio de Repatriación y de esta manera bajar el hacinamiento que existe en las cárceles del país y dar un mejor nivel de vida a los nacionales ecuatorianos.

La Dirección Nacional de Rehabilitación Social, está empeñada no sólo en difundir la tesis del derecho que al interno le asiste, sino que desea practicar cada una de las disposiciones recogidas en la Carta Magna del Estado, así como en los instrumentos internacionales del cual el Ecuador es signatario, por ello ve la necesidad de impulsar las repatriaciones de los internos condenados hasta la República de Colombia respaldando todas las acciones que vayan en su beneficio dando apertura no sólo a los internos de la cárcel dos, sino a todos los internos de los centros del país que puedan acogerse a este beneficio,

beneficio que permitirá alcanzar los objetivos que persigue el Sistema Penitenciario: la rehabilitación integral de los privados de libertad, la prevención del delito y evitar la reincidencia.

Los internos colombianos y que están empeñados en que los procesos de repatriación que se encuentran en la Corte Suprema de Justicia, se resuelvan favorablemente, vienen haciendo las diferentes gestiones ante las autoridades competentes de ambos países, a fin de que el mencionado Reglamento sobre el Procedimiento para repatriación sea modificado, para ello han presentado algunas alternativas y que constan en el análisis del Reglamento Operativo.

Como se puede apreciar de todo lo expuesto, las autoridades de Ecuador como de Colombia, la Dirección Nacional de Rehabilitación Social, y los propios internos colombianos, están tratando de buscar alternativas para viabilizar los procesos de repatriación que fueron suspendidos durante la reestructuración de la Corte Suprema de Justicia para poder poner en ejecución el Convenio de Esmeraldas o de Repatriación suscrito y ratificado por los dos Gobiernos en mención.

### **3.3. REGLAMENTO OPERATIVO DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO DE COLOMBIA Y LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DEL ECUADOR SOBRE TRASLADO DE PERSONAS CONDENADAS**

La República de Colombia y la República del Ecuador:

DANDO CUMPLIMIENTO a lo dispuesto en el Convenio sobre Tránsito de personas, Vehículos, Embarcaciones Fluviales y Marítimas y Aeronaves, suscrito en la ciudad de Esmeraldas, el 18 de Abril de 1990, que en su artículo 86 establece el procedimiento y precisa las excepciones para la Repatriación de nacionales sentenciados por autoridades nacionales competentes de Colombia y Ecuador.

EN DESARROLLO del Reglamento sobre procedimiento de repatriación de personas sentenciadas, suscrito el día 7 de Abril de 1994 en la ciudad de Quito, han decidido adoptar el siguiente Reglamento operativo:

#### **ARTICULO I.**

Las Autoridades Competentes para aplicar el Reglamento sobre el procedimiento de personas sentenciadas y el Reglamento Operativo son:

- 1.- Por parte de la República de Colombia, el Ministro de Justicia y del Derecho.
- 2.- Por parte de la República del Ecuador, el Presidente de la Corte Suprema de Justicia.

#### **ARTICULO II.**

Las solicitudes de Repatriación presentadas por nacionales de uno de los dos Estados para se trasladados a su país de origen, deberán ser formuladas por el condenado o su representante legal, por escrito, dirigidas a la Autoridad Competente del Estado Trasladante o a través de la Misión Diplomática correspondiente, y deberán contener, al menos, la siguiente información:

- 1.- Nombres y apellidos de la persona sentenciada.
- 2.- Lugar y fecha de nacimiento.
- 3.- Identificación.
- 4.- La última dirección en su país de origen.
- 5.- Nombre y dirección del Centro de Rehabilitación en el que está cumpliendo la pena.
- 6.- Autoridad judicial que lo hubiere sentenciado y copia del fallo definitivo con certificación o constancia de ejecutoria.
- 7.- Motivos para solicitar la Repatriación.

Si la Repatriación se pide por razones humanitarias, deberá explicar el solicitante en que consisten ellas, y se acompañarán las pruebas que demuestren la situación de manera sumaria.

8.- Si el requerimiento se hace a través de la Misión Diplomática, se adjuntará la declaración escrita del sentenciado o de su representante legal en la que se exprese su consentimiento para ser trasladado a su país de origen.

### **ARTICULO III.**

La Autoridad Competente del Estado Trasladante estudiará la información consignada en la solicitud, y en caso de faltar algún documento esencial la devolverá al interesado con el fin de que éste la complete.

Luego de revisada la petición de Repatriación y sus anexos, la Autoridad competente del Estado Trasladante podrá complementarla y la verificará con información que solicite así:

- 1.- Al respectivo juzgador, copia de la sentencia ejecutoriada.
- 2.- En el caso colombiano a las autoridades del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), para el caso ecuatoriano a las judicaturas o tribunales penales pertinentes, un informe sobre la existencia de otros procesos penales.

Si por razón de la comisión del delito, tuviere el condenado pendiente el pago de daños o perjuicios ocasionados con el hecho punible, se negará la Repatriación, a no ser que se demuestre la absoluta incapacidad de hacerlo, por motivos de pobreza.

- 3.- Al Director del Centro de Rehabilitación o de internación, un informe sobre la conducta del penado, el lapso que ha permanecido efectivamente privado de la libertad por razón del proceso en el que fue condenado, y los beneficios a los cuales ha tenido derecho el penado, hasta el momento de la solicitud, ya sea por buen comportamiento, rebajas por trabajo, estudio y enseñanza.

- 4.- Al Departamento médico del establecimiento carcelario donde permanezca el penado, un informe médico, psicológico y social de éste.

- 5.- Para el caso colombiano al Director del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) de extranjería, para el caso ecuatoriano al Director General

de Migración y Extranjería, un informe acerca de que si el penado es residente permanente o inmigrante.

6.- A la Misión Diplomática del Estado Receptor, se le entregará copia de la sentencia en la que conste la relación de hechos punibles por los que se impuso la sentencia, y se solicitará certifique si esa conducta también está tipificada como delictuosa en su Estado, así en denominación distinta.

#### **ARTICULO IV.**

Una vez esté completa la información requerida, la Autoridad Competente del Estado Trasladante dictará una resolución aceptando o denegando la solicitud de Repatriación y la comunicará al interesado.

Así mismo remitirá la resolución y la documentación anexa, a la Autoridad Competente del Estado Receptor con el fin de que ésta a su vez decida sobre su viabilidad, y si faltare algún documento solicitará su envío.

En el caso de ser favorable la decisión de las dos Autoridades Competentes, éstas procederán al traslado de la persona condenada de acuerdo con lo estipulado en el artículo IX del Reglamento del 7 de Abril de 1994.

#### **ARTICULO V.**

Para el cómputo de la pena cumplida, el Estado Receptor reconocerá los beneficios otorgados en el Estado Trasladante al nacional repatriado.

Para estos efectos, en la resolución en la que se conceda la Repatriación, la Autoridad Competente del Estado Trasladante dejará claramente relacionados los beneficios a que tenga derecho.

#### **ARTICULO VI.**

En los casos en los que se presenten situaciones especiales no previstas en el reglamento, como sería el evento de los inimputables, las autoridades podrán acordar la Repatriación para la ejecución de la medida de seguridad o para que se realicen las conversiones o adecuaciones pertinentes.

## **ARTICULO VII**

Antes de efectuarse el traslado de la persona condenada, el Estado Trasladante permitirá al Estado Receptor verificar, en todo caso, mediante sus autoridades Consulares, que la persona sentenciada haya dado su consentimiento con pleno conocimiento de las consecuencias legales del mismo.

## **ARTICULO VIII.**

Una vez aprobado el traslado del condenado, las Autoridades Competentes definirán el lugar y fecha de entrega del repatriado a las autoridades de Migración respectivas, de acuerdo con lo establecido en el artículo IX del Reglamento del 7 de Abril de 1994.

De igual manera la Autoridad Competente del Estado Receptor determinará el establecimiento carcelario al que deba ser trasladado el Repatriado cuando hubiere lugar. En todo caso, se tomarán en cuenta factores como, la gravedad del delito, la capacidad de los Centros Penitenciarios, las condiciones personales y familiares del solicitante, y las políticas y normas vigentes sobre alternatividad y subrogados penales.

El Estado Receptor informará periódicamente al Estado Trasladante sobre la ejecución de la condena de cada una de las personas que hayan sido Repatriadas.

## **ARTICULO IX.**

Este Reglamento Operativo, se perfeccionará mediante su firma y entrará en vigor diez (10) días contados a partir de la fecha de su suscripción.

Hecho en la ciudad de Quito, a los veinte y nueve (29) días del mes de Julio de mil novecientos noventa y cuatro. (1994).

POR LA CORTE SUPREMA  
DE JUSTICIA DE LA

POR EL MINISTERIO DE  
JUSTICIA Y DEL DERECHO DE

REPUBLICA DEL ECUADOR

Dr. Francisco Acosta Yépez

PRESIDENTE

LA REPUBLICA DE COLOMBIA.

Dr. Gustavo Castro Guerrero.

EMBAJADOR EXTRAORDINARIO  
Y PLENIPOTENCIARIO.

### **OBSERVACIONES AL REGLAMENTO OPERATIVO PARA LA APLICACIÓN DEL CONVENIO DE REPATRIACION DE PERSONAS CONDENADAS**

Una vez que se ha puesto de manifiesto el mencionado Reglamento Operativo para la aplicación del convenio de Repatriación, o de Esmeraldas, cabe hacer su respectivo análisis y para ello hay que destacar que:

El Gobierno Nacional, ante el colapso del sistema penitenciario, decretó la emergencia penitenciaria, el día 7 de abril del año que decurre en razón del aumento desacelerado del hacinamiento, sumado a la falta de infraestructura, falta de presupuesto, inseguridad en los procesos penales, violencia generalizada, fugas, muertes al interior de los centros, agravándose a todo ello el voraz incendio que acabó con la cárcel número dos; ante tal hecho, los internos colombianos y desesperados porque pueda ocurrir una tragedia sin límites, decidieron a través de la Asociación de colombianos detenidos en el Ecuador, hacerse eco del Convenio Bilateral de Repatriación, existente entre los dos países, esto les permitiría acercarse a sus familiares, y a su vez les iba a dar la oportunidad de reincorporarse a la sociedad como entes productivos; animados por la oportunidad que se les presentaba y que en años anteriores ya se había dado paso a las repatriaciones de extranjeros, realizan todos los trámites tendientes a alcanzar su sueño, sin embargo de ello, surge la controversia que estipula el propio Reglamento Operativo sobre traslado de personas condenadas suscrito entre los dos países el 29 de julio de 1994 y que en su artículo III inciso tercero señala: "si por razón de la comisión del delito, tuviere el condenado pendiente el pago de daños y perjuicios ocasionados por el hecho punible, se negará la repatriación, a no ser que se demuestre la



absoluta incapacidad de hacerlo, por motivos de pobreza”, pero, hay que detenernos un poco aquí, y si bien ya se ha hablado que uno de los obstáculos para lograr la repatriación es precisamente el pago de la multa, debemos saber que las multas impuestas en sentencia oscilan entre 200, 24.000, y hasta 32.000 dólares, cómo entonces un condenado puede pagar tan altas multas?, la mayoría de detenidos colombianos están vinculados al delito de drogas, y al respecto, la Ley Sobre Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, en el capítulo I habla sobre la Retención, Aprehensión e Incautación de Bienes, es decir al momento de ser detenidos se les incautan sus pertenencias (bienes, dinero, cuentas bancarias, etc.) lo que da como respuesta a la interrogante formulada que estas personas quedan en la más absoluta insolvencia pues todo pasa a manos del CONSEP

Además, como tendrían estos condenados la posibilidad de pagar daños y perjuicios conforme reza el Reglamento Operativo, si no tienen ni para sobrevivir dentro de la cárcel, y a pesar de estar tantos años de internamiento físico, no cuentan con un trabajo al interior del centro, pues apenas el estado destina un dólar para la alimentación diaria, y con todo ello no tienen la mínima posibilidad de cancelar multas tan altas, y sobreviven es por la poca ayuda de sus familiares que envían desde el exterior; asimismo hay que tomar en cuenta que el Reglamento Operativo habla de pagar Daños y Perjuicios que ocasionen el hecho punible, no se habla de pagar elevadas multas de Salarios Mínimos Vitales Generales; para el autor Guillermo Cabanellas de Torres, en su Diccionario Jurídico Elemental, los daños y perjuicios se relacionan entre sí, puesto que todo daño provoca un perjuicio y el perjuicio proviene de un daño, señalando que daño es el mal que se causa a una persona o cosa, y, perjuicio, es la pérdida de utilidad o de ganancia cierta o positiva que ha dejado de obtenerse, y para resarcirlos se tramitan en juicio verbal sumario; la multa en cambio es la pena pecuniaria que se impone por una falta delictiva, y que a decir de la presente investigación son las impuestas dentro de las sentencias en los delitos por drogas, dando lugar a que el trámite de repatriación se estanque pues no sólo cumple el sentenciado la pena impuesta sino que se le debe seguir un juicio coactivo a través del CONSEP, a fin de recaudar dicha multa

Igualmente, la Constitución Política del Ecuador, expresa en su artículo 23 numeral cuatro, que: "todas las personas nacen libres. Se prohíbe la esclavitud, la servidumbre y el tráfico de seres humanos en todas sus formas. "Ninguna persona podrá sufrir prisión por deudas, costas, impuestos, multas ni otras obligaciones,....."

Con esta imposición del pago de la multa y la imposibilidad de pagarla por las razones expuestas, el Convenio de Repatriación se torna inoperante, quedando los condenados colombianos a pagar una prisión inhumana y sin beneficios, pues aparte de la restricción para la repatriación, están las Rebajas de penas que han sido reducidas de ciento ochenta días anuales (2x1) a ciento ochenta días por quinquenio (10x1), así como la poca esperanza de acogerse al beneficio de la Prelibertad o Libertad Controlada estipulada en el Código de Ejecución de Penas y Rehabilitación Social, en razón de su situación de arraigo en el país, falta de trabajo, vivienda, etc, y que son requisitos elementales para la concesión de dicho beneficio.

Pero, para dar agilidad a este Reglamento Operativo los condenados colombianos han presentado ante el Subsecretario de Gobierno ciertas alternativas que servirían para solucionar este inconveniente dado por el Presidente de la Corte Suprema de Justicia:

1.- que se tenga como demostración de absoluta pobreza, una Información Sumaria ante el Juez de lo Civil y un informe socioeconómico del Departamento de Trabajo Social del Centro (y que ha sido mi propuesta en primera instancia luego del diálogo mantenido con dicho miembros).

2.- se considere la posibilidad de un Adendum al Reglamento Operativo de tal manera que con la información sumaria que justifica el estar insolvente, no se considere el pago de la multa al CONSEP.( de igual manera he planteado el Adendum modificadorio al Reglamento sobre el Procedimiento de repatriaciones).

3.- se plantee la posibilidad de una Ley de Gracia por parte del Presidente de la República en donde se perdone, conmute o rebaje la pena accesoria impuesta en sentencia.

Para concluir, considero que no se puede rechazar la petición de repatriación por no haber cancelado la multa impuesta en sentencia, ya que vulnera el art. 23 de la Constitución y que me he referido en otro punto similar a este, por el contrario debería buscarse las alternativas para que el Convenio de Repatriación y sus Reglamentos cumplan la función que el Derecho Internacional señala que los Tratados son norma de Conducta entre los Estados Partes, y que de acuerdo al art. 26 de la Convención de Viena Sobre el Derecho de los Tratados, Pacta Sunt Servanda, todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido por ellas de buena fe; de esa manera se estaría contribuyendo a la Política Exterior que permite consolidar la democracia, la libertad personal, la justicia social y los lazos de integración y amistad y la cooperación pacífica entre las naciones, con observancia a los principios de la Carta de las Naciones Unidas, como los de igualdad de derechos, la libre determinación de los pueblos, la no ingerencia en los asuntos internos y el respeto universal a los derechos humanos.

#### **3.4. INAPLICABILIDAD DEL CONVENIO ENTRE COLOMBIA Y ECUADOR SOBRE TRANSITO DE PERSONAS, VEHICULOS, EMBARCACIONES FLUVIALES, MARITIMASY AERONAVES, SUSCRITO EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS, EL 18 DE ABRIL DE 1990, CON LOS RECLUSOS COLOMBIANOS QUE HABITAN EN LAS CARCELES ECUATORIANAS.**

Si bien el Convenio de Esmeraldas, está vigente para los dos países lamentablemente por las razones ya expuestas en líneas anteriores como son: el retardo de la Función Judicial en el despacho de sentencias y su ejecutoria (requisito indispensable para acogerse a la repatriación) la aplicación de la inconstitucional figura de la “Detención en Firme”, la reforma al art. 33 del Código de Ejecución de Penas y Rehabilitación Social (que hace relación a las Rebajas de Pena que del 2 x 1 subieron al 10 x 1 sin un sustento lógico, técnico, social, jurídico, científico, peor humano; así como el pago de multas al

CONSEP, dentro de la jurisdicción coactivas ) no se ha podido dar cumplimiento hasta la presente fecha de dicho Convenio.

Bajo la consideración que en las cárceles se encuentran entre los detenidos un gran número de extranjeros principalmente colombianos, es necesario dar plena aplicación a los Convenios Internacionales sobre Repatriación de los sentenciados colombianos, pues la ejecución plena de este convenio y la celeridad del proceso, será una importante medida de despoblar los centros de rehabilitación del país, así como que esta medida permitirá que los nacionales de cada puedan continuar con sus sentencias en su propio país estar cerca de su familia, buscando la reinserción dentro de la sociedad.

La Repatriación es en este sentido una institución por medio de la cual se articula una solución a la crisis penitenciaria y que permite una solución en la que establece que un Estado reciba y ejecute una determinada pena impuesta por otro Estado distinto.

El tratadista Luís Moreno G, en su Obra “Integración Fronteriza” plantea que el Reglamento de 1994 (sobre Procedimiento) va en contra de la interpretación lógica y textual del artículo 86 del Convenio de Esmeraldas de 1990 por cuanto éste niega la Repatriación a los sindicados; transforma el derecho individual a ser repatriado, por la facultad potestativa de los Estados de concederla, negarla o rechazarla.

La Repatriación o el Traslado de Personas Condenadas a cumplir la pena en su país de origen, lo establece el Convenio de Esmeraldas, en su Art. 86, sin embargo ningún recluso colombiano al parecer cumple con las condiciones del convenio, (unos por la no ejecutoriedad de la condena, otros por el sistema de rebajas, del 2 x 1, al 10 x 1, la poca celeridad a los procesos penales, etc) dejando así a un lado la necesidad de considerar a la pena como medio para la reinserción del condenado a la sociedad, convirtiéndola en un castigo inhumano.

En la Corte Suprema de Justicia reposan sesenta y dos (62) carpetas con solicitudes de Repatriaciones entregadas en el año 2005 y lo que va del 2006,

esperando ser atendidas y tratadas para ser remitidas a Colombia y buscar que el comité interinstitucional que se reúne cada tres meses para tratar este tema del visto bueno y podamos regresar a nuestro país.

El Proyecto de Protocolo para la aplicación del Art. 86 del Convenio de Esmeraldas de 1990 referente a la Repatriación de Personas Sentenciadas, y del cual ya me he referido anteriormente, señala que el Régimen penal tiene por objeto la reinserción de las personas condenadas a través de su reeducación y rehabilitación, y que para tal efecto sería provechoso dar a los nacionales privados de su libertad en el extranjero como resultado de la comisión de un delito, las posibilidades de cumplir la condena dentro del país de su nacionalidad, de esta manera se estaría cumpliendo los principios recogidos en los Instrumentos Internacionales como la Carta de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de Derechos Humanos, los Pactos Internacionales de Derechos Civiles y Políticos, y otros instrumentos pertinentes en la esfera de Derechos Humanos y la Declaración y Programa de Acción de Viena, (que proclaman que nadie será sometido a tortura ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes) así como los principios básicos para el tratamiento de reclusos que señala que con excepción de las limitaciones que sean evidentemente necesarias por el hecho del encarcelamiento, todos los reclusos seguirán gozando de los derechos humanos y las libertades fundamentales consagrados en la Declaración Universal de Derechos Humanos y, cuando el Estado de que se trate sea parte, en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y su Protocolo Facultativo, así como de los demás derechos estipulados en otros instrumentos de las Naciones Unidas; así la misión del Sistema Penitenciario que es la de propender a la reinserción del delincuente a la sociedad.

"Nuestra última esperanza es UNA PRONTA REPATRIACIÓN hacia nuestro único y verdadero "SUEÑO AMERICANO"...COLOMBIA!". Así lo gritan los internos colombianos en las cárceles ecuatorianas, en especial la cárcel dos, colombianos, alejados de sus familias, sin recursos económicos que les permitan sobrellevar su prisión, sin afianzar amistades, con costumbres

distintas, son en esencia factores que no le permiten a un interno colombiano llevar una vida digna en una cárcel que sea diferente a las de su propio país.

### **3.5. EJEMPLO DE UN TRÁMITE DE REPATRIACION DE PERSONAS CONDENADAS, DESDE TERRITORIO ECUATORIANO A TERRITORIO COLOMBIANO.**

El siguiente ejemplo es un trámite de Repatriación de un condenado colombiano detenido en el CRSV de Quito, quien aplica la petición ante la Corte Suprema de Justicia del Ecuador por razones humanitarias, siguiendo todo el procedimiento hasta haber alcanzado el traslado a su país de origen. El lector deberá seguir el ítem señalado para apreciar dicho trámite.

#### **3.5.1.- SEÑOR PRESIDENTE DE LA H. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA**

**LEONIDAS ANDRES CHITIVA**, interno de nacionalidad colombiana, ante usted comparezco, expongo y solicito:

De acuerdo al Convenio suscrito entre la República del Ecuador y la República de Colombia, sobre Tránsito de Personas, Vehículos, Embarcaciones Fluviales, Marítimas y Aeronaves, en la cuarta reunión de la Comisión de Vecindad Colombo- Ecuatoriana, llevada a efecto el día 18 de abril de 1990, en su art. 86, ratificado, canjeado y publicado el texto del Convenio, mediante Registros Oficiales Nro. 660 del 10 de abril de 1991 y 83 del 9 de diciembre de 1992 respectivamente y cuya reglamentación fue firmada el día 7 de abril de 1994 en la ciudad de Quito, se establece el beneficio de Traslado de Personas Condenadas para lo cual adjunto los siguientes datos:

Nombres y Apellidos: Leonidas Andrés Chitita

Lugar y fecha de nacimiento: 12 de abril de 1970. Dagua – Valle

Número de documento de identidad: 94.419.633

Dirección en Colombia: Departamento del Cauca- Cali

Recluido: Centro de Rehabilitación Social de Varones de Quito Nro.1

Fecha de Detención

Sentenciado: por el Tribunal Penal de Imbabura a la pena de ocho años de reclusión mayor ordinaria y multa de sesenta salarios mínimos vitales generales, por el delito de drogas.

Cuento con los requerimientos para el trámite de Repatriación en las que se incluyen las rebajas de penas que por ley me corresponden, para estos casos.

Es mi deseo estar junto a mis familiares y demás seres queridos que en su totalidad se hayan establecidos en mi patria "Colombia" para que de esta manera incida en mi objetivo de rehabilitación.

Acorde a lo dispuesto en el Art. VI numeral 7 del Reglamento sobre el Procedimiento de Personas repatriadas, entre el Gobierno de la república del Ecuador y el Gobierno de la República de Colombia, y el Art. 11 numeral 8 del Reglamento Operativo, sobre el traslado de personas condenadas, MANIFIESTO MI EXPRESO CONSENTIMIENTO Y MI LIBRE INTENCION SOBERANA DE ACOGERME A ESTE BENEFICIO DE TRASLADO A MI PAIS DE ORIGEN "COLOMBIA", POR RAZONES HUMANITARIAS, PUES DE TODOS LOS EXAMENES REALIZADOS A MI PERSONA SE DETERMINA QUE SUFRO DE ASMA CRÓNICA.

La mayoría de colombianos prisioneros en el Ecuador somos cabeza de hogar con hijos menores que son privados del afecto y contacto fraternal, lo que acrecienta el consabido desarraigo social producido por el distanciamiento geográfico que impide la comunicación frecuente y su entorno, a lo que se agrega mi enfermedad que cada día va en detrimento y la distancia que nos separa y las diferencias económicas entre los dos países impiden que mis familiares se puedan desplazar y conseguirme la medicina que necesito tomar a diario y hasta los aspirante de oxigeno que inhalo, surgiendo así una marginación y discriminación por la incapacidad de hacer frente a estos gastos.

El comportamiento que he tenido en este Centro carcelario ha sido ejemplar, por lo que el hecho de regresar a mi patria, además de constituir un estímulo, asegura mi cambio de comportamiento para constituirme en un individuo útil a la sociedad.

Adjunto a la presente solicitud:

Copia de mi sentencia debidamente ejecutoriada

Certificado de informes médicos que hablan sobre mi enfermedad.

De ser necesario señalo como mi domicilio judicial el casillero Nro. 2131 perteneciente al Consulado de Colombia en Quito, además faculto a la Dra. Leonor Ortiz para que en mi nombre y representación suscriba cuanto escrito sea necesario en defensa de mis intereses y dentro del presente trámite de repatriación.

Dra. Leonor Ortiz  
MAT. 2656 CAQ  
ASESORA JURIDICA  
DEL CONSULADO DE  
COLOMBIA.

Leonidas Andrés Chitiva  
INTERNO DEL CRSVQ-1



**3.5.2.- PRESIDENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.-** Quito, 23 de noviembre del 2004.- las 15h30.- (R-48-04) VISTOS: Por encontrarme encargado de la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia, mediante oficio Nr0. 2098-SP-2004, avoco conocimiento de la presente causa. Adjúntese al expediente el oficio y documentación recibidos. El ciudadano LEONIDAS ANDRES CHITIVA, de nacionalidad colombiana, y recluso en el CRSVQ-1, al amparo del “Convenio Sobre Tránsito de Personas, Vehículos, Embarcaciones Fluviales y Marítimas y Aeronaves” celebrado entre las Repúblicas de Ecuador y Colombia, ratificado por el Ecuador, conforme resolución constante en el R.O. Nr0. 680 de 10 de abril de 1991 y publicado en el R.O. Nr0. 83 de 9 de diciembre de 1992, y conforme los Reglamentos “Operativo del Ministerio de Justicia y del Derecho de Colombia y la Corte Suprema de Justicia del Ecuador sobre Traslado de Personas Condenadas” y “ Sobre el Procedimiento de Repatriación de Personas Sentenciadas entre el Gobierno de la República del Ecuador y el Gobierno de la República de Colombia”, solicita se le conceda el beneficio al traslado a su país de origen, por razones humanitarias. Aceptada a trámite la petición y una vez que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en decreto inicial para resolver, se considera: **PRIMERO.-** Que el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, es competente para conocer y resolver esta clase de solicitudes de acuerdo a la autorización que confirió el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, en sesión ordinaria de “8 de junio de 1994” y por estar vigente el Reglamento “Sobre el Procedimiento de Repatriación de Personas Sentenciadas entre el Gobierno de la República de Ecuador y el Gobierno de la República de Colombia” lo cual se conoce de la Nota Nr0. 1810.18/DGT de “30 de enero de 1998”, enviada por el señor Director General de Tratados del Ministerio de Relaciones Exteriores del Ecuador.- **SEGUNDO.-** Que el considerando Octavo del “Convenio Sobre Tránsito de Personas, Vehículos, Embarcaciones Fluviales y Marítimas y Aeronaves”, referido anteriormente, señala, que uno de los objetivos del Convenio es facilitar la administración de justicia y humanizar el pago de sentencias de los habitantes de las zonas de

integración fronteriza.- **TERCERO.-** Que el Art. 86 del Convenio, expresa que conviene el reconocimiento mutuo de sentencias y la repatriación de los nacionales que hubieren sido sentenciados en la otra parte, para que paguen la condena en la región de su domicilio. Así también acuerdan que, una vez iniciado el juicio, éste se sustancie ante los jueces nacionales del detenido, quien deberá ser puesto a órdenes de las autoridades nacionales competentes.- **CUARTO.-** Al tratarse el traslado por razones humanitarias, el Art. XI del “Reglamento sobre el Procedimiento de Repatriación de Personas Sentenciadas entre el Gobierno de la República del Ecuador y el Gobierno de la República de Colombia”, señala, que una de las partes deberá solicitar el traslado por razones humanitarias, lo cual, se encuentra corroborado con lo consignado en el Art. II Nr0. 7 del “Reglamento Operativo del Ministerio de Justicia y del Derecho de Colombia y la Corte Suprema de Justicia del Ecuador Sobre el Traslado de Personas Condenadas”, cuando se expresa, que si la repatriación se pide por razones humanitarias, deberá explicar el solicitante en que consisten ellas, y se acompañarán las pruebas que demuestren la situación de manera sumaria.- **QUINTO.-** De la información solicitada y aportada al expediente, se observa: a) que la sentencia dictada en contra del peticionario, por el delito tipificado y sancionado en el Art. 63 de la Ley Sobre Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, a ocho años de reclusión mayor ordinaria y la multa de sesenta salarios mínimos vitales, se encuentra ejecutoriada; sentencia que fuera dictada en primera instancia por el Tribunal de lo Penal de Imbabura, que data de “14 de noviembre del “003 las 10h20” y confirmada por la Sala de la H. Corte Superior de Justicia de Ibarra, con fecha “3 de diciembre del 2003, las 09h30”; b) Que el sentenciado no se encuentra inmerso en ninguna de las excepciones previstas en el Art. II del “Reglamento Sobre el Procedimiento de Repatriación de Personas Sentenciadas entre el Gobierno de la República del Ecuador y el Gobierno de la República de Colombia”; y, c) Que, con los informes Psicológico, Social, Médico y de Conducta emitidos por los funcionarios competentes de la Dirección Nacional de Rehabilitación Social, se ha determinado que el peticionario, adolece de “Asma” (fs.3 y 75) y que a criterio de la Embajada de Colombia en el Ecuador amerita su traslado por razones humanitarias, lo cual se desprende del oficio A.S. Nr0. 106 de 30 de septiembre de 2004, suscrito por el Asesor Jurídico del

Consulado de Colombia (fs. 95). Por lo expuesto en el Art. VIII Nr0. 3 del “Reglamento Sobre el Procedimiento de Repatriación de Personas Condenadas entre el Gobierno de la República del Ecuador y el Gobierno de la República de Colombia”, **se dispone la repatriación del ciudadano de nacionalidad colombiana, LEONIDAS ANDRES CHITIVA**, con cédula de ciudadanía Nro. 94.419.633, expedida en la ciudad de Dagua- Valle, República de Colombia, debiendo remitirse copia de esta resolución al señor Ministro de Justicia y del Derecho de la república de Colombia, a través de la señora Embajadora de Colombia. Comuníquese a los señores Director del centro de Rehabilitación Social de Varones de Quito Nro. 1, al Presidente del Tribunal de lo Penal de Imbabura y al peticionario. Oportunamente se cumplirá con lo dispuesto en el Art. IX del reglamento ya referido anteriormente, en cuanto a lugar, fecha y hora de entrega del sentenciado, y por secretaría, en lo referente a los documentos que en copia deben entregarse. **HAGASE SABER.**

Firmado por el señor doctor Alfredo Contreras Villavicencio, Presidente Encargado de la Corte Suprema de Justicia, Providencia igual a su original, que notifico para los fines allí determinados.- CERTIFICO.

Dr. Fernando Ortiz Bonilla  
SECRETARIO GENERAL.

### **3.5.3.- EL MINISTERIO DEL INTERIOR Y DE JUSTICIA DE COLOMBIA**

En ejercicio de sus facultades legales, en especial las que le confiere el Decreto 200 de 2003 y,

#### **CONSIDERANDO:**

Que el gobierno de la República de Colombia y el gobierno de la República del Ecuador, suscribieron el 18 de abril de 1990 en la ciudad de Esmeraldas-

Ecuador el “Convenio Sobre Tránsito de personas, Vehículos, Embarcaciones Fluviales y Marítimas y aeronaves”.

Que de conformidad con el artículo 86 del citado Convenio, las partes adoptaron el “Reglamento sobre el Procedimiento de Repatriación de Personas Sentenciadas, y el Reglamento Operativo sobre Traslado de Personas Condenadas”, suscrito el 7 de abril de 1994 y el 29 de julio de 1994, respectivamente en la ciudad de Quito- Ecuador.

Que el artículo 3 del Reglamento sobre el Procedimiento de Repatriación de Personas Sentenciadas, y el artículo 1 numerales 1 y 2 del Reglamento Operativo sobre Traslado de Personas Condenadas, establecen como autoridades Centrales encargadas de dar cumplimiento a las disposiciones allí establecidas, al Ministerio del Interior y de Justicia por parte de la república de Colombia y a la Corte Suprema de Justicia por parte de la república del Ecuador.

Que el ciudadano colombiano ANDRES CHITIVA LEONIDAS, identificado con la cédula de ciudadanía nro. 94.419.633 de Dagua – Valle, quien fuera condenado a la pena de 8 años de prisión, actualmente recluso en el Centro de Rehabilitación Social de Varones de Quito Nro. 1, solicitó ante la Corte Suprema de Justicia de Ecuador su traslado a la República de Colombia por razones humanitarias en virtud del “Reglamento Operativo del Ministerio de Justicia y del Derecho de Colombia y la Corte Suprema de Justicia del Ecuador Sobre Traslado de Personas Condenadas”.

Que la Corte Suprema de Justicia de Ecuador, mediante Resolución de fecha 23 de noviembre del 2004, autorizó la repatriación, teniendo en cuenta que esta persona adolece de una enfermedad crónica, lo que amerita su traslado por razones humanitarias.

Que por Resolución Nro. 2245 del 18 de diciembre de 2003, se creó el Comité para el Estudio de las solicitudes de Repatriación de Presos, modificada por la Resolución Nro. 1296 del 10 de agosto de 2004, el que tiene como función

“recomendar al Ministro del Interior y de Justicia la decisión a tomar frente a las solicitudes de repatriación que sean sometidas a su consideración por la Oficina Asesora Jurídica en cada sesión”.

Que de conformidad con lo consignado en el Acta Nro. 46 de fecha 30 de noviembre de 2005, el Comité para el estudio de las solicitudes de Repatriación de Presos, recomendó el traslado del ciudadano ANDRES CHITIVA LEONIDAS, teniendo en cuenta las condiciones de aplicabilidad señaladas en el “Reglamento Operativo del Ministerio de Justicia y del Derecho de Colombia y la Corte Suprema de Justicia del Ecuador Sobre Traslado de Personas Condenadas”, por cuanto se estableció la existencia de una Sentencia Condenatoria en su contra, se acreditó el principio de la doble incriminación, se demostró que el peticionario es de nacionalidad colombiana por nacimiento, que no fueron condenados por delito político o militar y que su traslado se realiza por razones estrictamente humanitarias.

Que de acuerdo a lo anterior, el ciudadano ANDRES CHITIVA LEONIDAS, cumple con las condiciones exigidas en el artículo 3 del Reglamento Sobre el Procedimiento de Repatriación de Personas Condenadas; por consiguiente, el Ministerio del Interior y de Justicia, considerando además los criterios señalados en el artículo 1 numerales 1 y 2 del Reglamento Operativo sobre Traslado de Personas Condenadas del Reglamento en mención, procederá a conceder su respectivo traslado a territorio colombiano, a fin de que terminen la pena que les fue impuesta por el Tribunal de Imbabura de Ecuador,

Por lo expuesto,

#### **RESUELVE:**

**ARTICULO PRIMERO:** Conceder el traslado a Colombia, del señor ANDRES CHITIVA LEONIDAS, para que termine la pena que le fue impuesta por el tribunal Penal de Imbabura.

**ARTICULO SEGUNDO:** De conformidad con el artículo anterior, enviar copia auténtica al Instituto Nacional penitenciario y carcelario “INPEC”, quien coordinará con la Corte Suprema de Justicia del Ecuador el lugar de entrega del interno, sin perjuicio de las decisiones administrativas que por su competencia deba adoptar.

**ARTICULO TERCERO:** Notificar la presente decisión a los peticionarios o a su apoderado y remitirla a la Corte Suprema de Justicia del Ecuador, de conformidad con lo señalado en el artículo VII numeral 3 del Reglamento sobre el Procedimiento de Repatriación de Personas Sentenciadas”, suscrito el 7 de abril de 1994.

**ARTICULO CUARTO:** Contra la presente resolución procede el recurso de reposición que podrá interponerse dentro de los cinco días siguientes a su notificación.

**ARTICULO QUINTO:** La presente resolución rige a partir de la fecha de expedición.

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.

Dada en Bogotá, D.C, a los 21 de diciembre del 2005.

SABAS PRETELT DE LA VEGA.

#### **3.5.4.- INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO “INPEC”**

**MINISTERIO DEL INTERIOR Y DE JUSTICIA. REPUBLICA DE COLOMBIA**  
**RESOLUCION** por la cual se fija el establecimiento a condenados colombianos repatriados de Ecuador.

El Director General del Instituto Nacional penitenciario y Carcelario (INPEC) en uso de las funciones encargadas de conformidad con lo señalado en el art.

segundo del Decreto Nr0. 4204 de 18 de noviembre de 2005 proferido por el señor Presidente de la República de Colombia, **Doctor Álvaro Uribe Vélez**, y

#### **CONSIDERANDO QUE:**

Mediante Resolución 2649 de 21 de diciembre de 2005, el doctor **Sabas Pretel De la Vega**, Ministro del Interior y de Justicia concede el traslado a territorio colombiano del ciudadano colombiano: ANDRES CHITIVA LEONIDAS, para que terminen de cumplir la pena que les fue impuesta por las autoridades judiciales de la República del Ecuador.

El artículo segundo de las citadas resoluciones ordena que el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) coordinara con la Corte Suprema de Justicia de Ecuador el lugar de entrega del interno, sin perjuicio de las decisiones administrativas que por su competencia debe adoptar.

El Ministerio de Relaciones exteriores de la República de Colombia mediante oficio fax DCO Nr0. 1207 de 13 de enero de 2006, suscrito por la Doctora Nancy Benítez Páez, Directora de Asuntos Consulares y Comunidades Colombianas en el exterior, informa que "...el señor Cónsul de Colombia en Quito, ha informado que luego de haber sido comunicadas a las autoridades centrales del Ecuador la resolución Nro. 2649 de diciembre de 2005, mediante la cual el Ministerio del Interior y de Justicia, concedió el traslado a Colombia de un colombiano sentenciados en Ecuador, las autoridades ecuatorianas han previsto como fecha para hacer efectiva dichas repatriaciones, el día 23 de enero de 2006, cuando entregaran a las autoridades colombianas a los connacionales en el Puente internacional Rumichaca."

El Doctor Eufracio Morales, Cónsul General de Colombia en Quito, Ecuador, mediante oficio N°. C.049/016 de 10 de enero de 2006 solicita se fije la hora para comunicarla a las autoridades penitenciarias y de policía del Ecuador.

Por lo expuesto y de conformidad por lo señalado en el artículo 72 de la ley 65 de 1993 se hace necesario recibir al ciudadano colombiano citado

**EL DÍA VEINTE Y TRES DE ENERO DE 2006, A LAS 10: HORAS EN EL PUENTE INTERNACIONAL RUMICHACA,** y fijarles el Establecimiento penitenciario y Carcelario de Ipiales (Nariño) como lugar de reclusión hasta tanto el Ministerio del Interior y de Justicia de Colombia imparta instrucciones para su posterior traslado a la ciudad de Bogotá.

**RESUELVE:**

**ARTICULO PRIMERO.** Fijarle al ciudadano colombiano ANDRES CHITIVA LEONIDAS, el establecimiento Carcelario de Ipiales, Nariño, como establecimiento de reclusión provisional para que terminen de cumplir la pena impuesta por la República de Ecuador,

**ARTICULO SEGUNDO.** el interno será recibido por el Director del Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Ipiales, Nariño con el personal de custodia y vigilancia que el mismo asigne para el efecto, el día VEINTE Y TRES DE ENERO DE 2006, A LAS 10 HORAS EN EL PUETE INTERNACIONAL RUMICHACA (frontera colombo ecuatoriana) en TERRITORIO COLOMBIANO, con la presencia de funcionarios del DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD- **DAS**- PREVIA EXHIBICION Y CONFIRMACION DE DOCUMENTOS QUE ACREDITEN SU CALIDAD, para lo pertinente.

**ARTICULO TERCERO.** El Director del Establecimiento penitenciario y Carcelario de Ipiales, como funcionario del INPEC encargado de la misión de recibir al ciudadano colombiano mencionado, deberá verificar el estado de salud que presenta el interno repatriado, dejando constancia respectiva.

**ARTICULO CUARTO.** El Director del Establecimiento penitenciario y Carcelario de Ipiales, como funcionario del INPEC encargado de la misión de recibir al ciudadano colombiano mencionado, deberá adoptar rigurosas, extremas y máximas medidas de seguridad tanto en el recibo del ciudadano colombiano repatriado del Ecuador como en el traslado del mismo al establecimiento a su cargo.



**ARTICULO QUINTO.** El interno será trasladado por el Director del Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Ipiales, Nariño al establecimiento Penitenciario y Carcelario de Ipiales, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos primero y segundo del presente acto administrativo.

El Traslado respectivo se efectuará bajo rigurosas y extremas medidas de seguridad, tendientes a garantizar la vida e integridad del interno, así como evitar posibles fugas o rescates.

**ARTICULO SEXTO.** Comunicar vía Fax el presente acto administrativo al Despacho del señor Ministro del interior y de Justicia de Bogotá, al Despacho del Señor Presidente de la Corte Suprema de Justicia de Ecuador, al Señor Director del Sistema Penitenciario del Ecuador, al Señor Cónsul de la República de Colombia en Ecuador, al señor Cónsul de Colombia en Imbabura, al Director del Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Ipiales, al Director Regional Occidente del INPEC.

**ARTICULO SEPTIMO:** Del cumplimiento de lo ordenado en el presente acto administrativo deberá informar el Director del establecimiento Penitenciario y Carcelario de Ipiales, a la Dependencia de Asuntos Penitenciarios del INPEC, para lo de su cargo y competencia.

**COMUNIQUESE Y CUMPLASE.**

Dada en Bogotá DC, a los 20 de enero 2006

TCRNEL .FELIX ANTONIO MAYORGA DIAZ.-Director General del INPEC.

**3.5.5.- ACTA DE REPATRIACION DE PERSONAS SENTENCIAS ENTE EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR Y EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA**

“EN EL PUENTE INTERNACIONAL RUMICHACA, LIMITE FRONTERIZO ENTRE LAS CIUDADES DE TULCÁN (ECUADOR) E IPIALES (COLOMBIA) A LAS DIEZ (10) HORAS DEL DÍA VEINTE Y TRES (23) DEL MES DE ENERO DEL 2006, SE ENCONTRARON LAS SIGUIENTES AUTORIDADES: **POR PARTE DEL GOBIERNO ECUATORIANO:** EL SEÑOR DR. FERNANDO

GONZÁLEZ, ASESOR JURÍDICO DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE REHABILITACIÓN SOCIAL; EL SEÑOR DIRECTOR DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN SOCIAL DE IBARRA, Y **POR PARTE DEL GOBIERNO COLOMBIANO:** EL DOCTOR JULIO ALEXANDER RUIZ MEJIA, DIRECTOR DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE IPIALES; EL DOCTOR JULIO PUENTES VEGA, JEFE DEL PUESTO OPERATIVO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD (DAS) DE IPIALES, DE IGUAL MANERA SE DESTACA LA PRESENCIA DEL SEÑOR CÓNsul DE COLOMBIA EN TULCÁN, INGENIERO GERARDO DORADO DAVILA EN CALIDAD DE TESTIGO DEL PROCESO DE REPATRIACIÓN”.

La persona repatriada se enmarca en la resolución Nro. 2649 de 21 de diciembre 2005, emanada del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) de Colombia.

DICTAMEN MEDICO: Se recibe a paciente estable física y mentalmente, y con enfermedad de asma crónica.

En el sitio y hora indicados se firma la presente acta por las Autoridades ya enunciadas:

**POR PARTE DEL GOBIERNO ECUATORIANO:**

Dr. Fernando González  
ASESOR JURIDICO DE LA DNRS.

Director del CENTRO DE REHABILITACION SOCIAL IBARRA

JEFE PROVINCIAL DE MIGRACION DEL CARCHI.

**POR PARTE DEL GOBIERNO COLOMBIANO:**

DIRECTOR DEL INPEC – IPIALES- NARIÑO.

JEFE DEL PUESTO OPERATIVO DEL DAS DE IPIALES.

CONSUL DE COLOMBIA EN TULCAN- TESTIGO DEL PROCESO DE REPATRIACION.

MEDICO INPEC – IPIALES – NARIÑO.

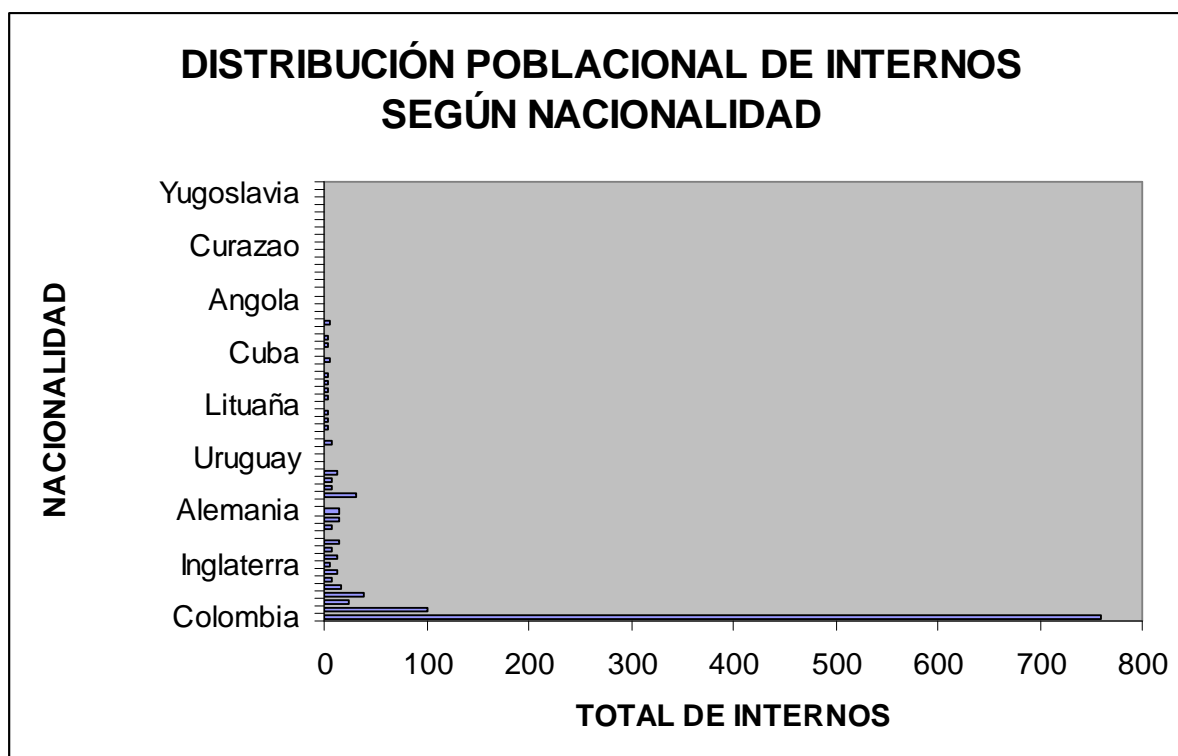
PERSONERO MUNICIPAL DE IPIALES.

DACTILOSCOPISTA DEL INPEC – IPIALES.

### **3.6.- POBLACIÓN PENITENCIARIA EXTRANJERA EN EL ECUADOR**

Los cuadros que a continuación siguen, están representando la cantidad de internos e internas extranjeros que por uno u otro delito se encuentran guardando prisión dentro de los Centros de Rehabilitación Social del país, (CRS) en especial vemos que la población penitenciaria extranjera es la colombiana, la cual se encuentra distribuida en los diferentes CRS del país, siendo un total aproximado de dos mil detenidos extranjeros de los cuales 759 son colombianos, seguidos por peruanos, americanos, africanos, italianos, holandeses, venezolanos, Chilenos, Iráníes, Brasileños, Argentinos, Alemanes, Israelitas, mexicanos, polacos, salvadoreños, Marroquíes, Suizos, Chinos, etc.

#### ***GRAFICO NR0. 1***



*Fuente: Boletín Estadístico 2004-2005 DNRS*

# POBLACIÓN PENITENCIARIA EXTRANJERA FEMENINA EN EL ECUADOR

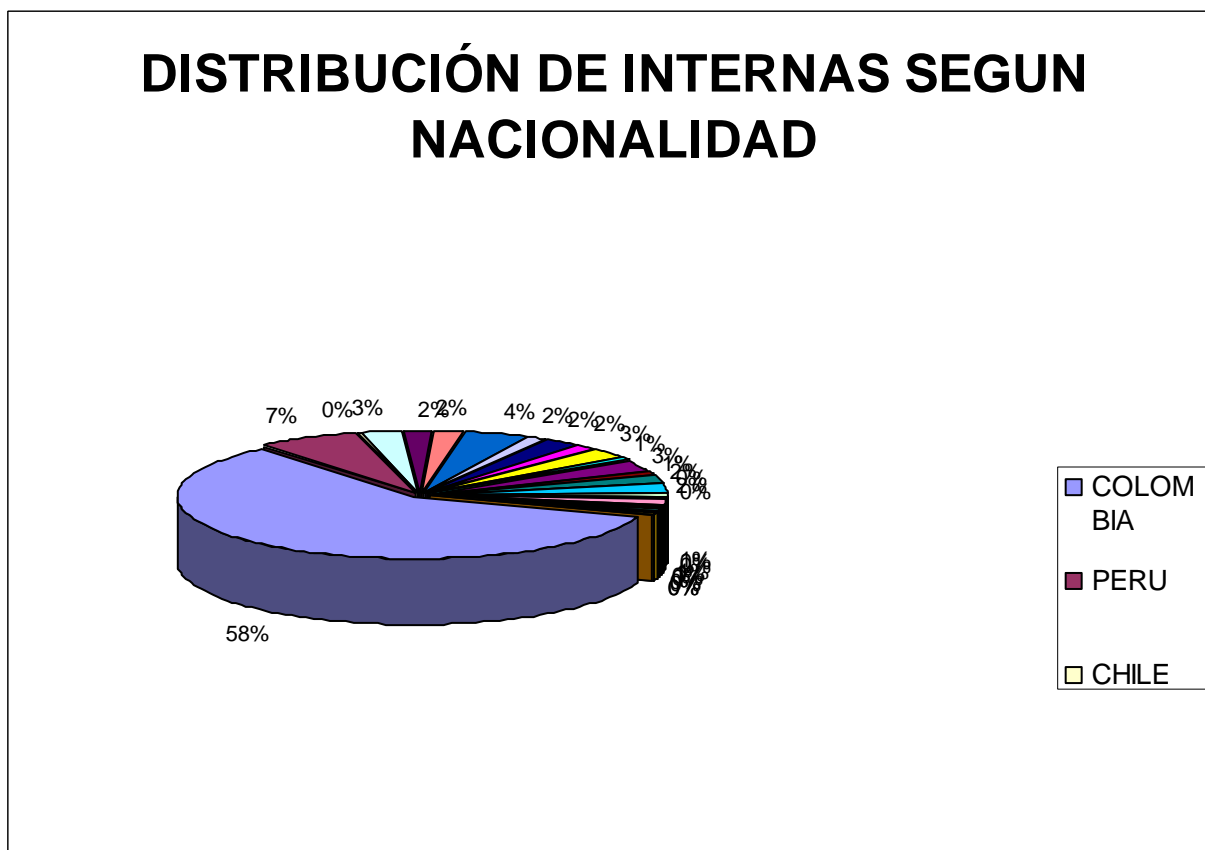
## GRAFICO N° 2

Fuente: Boletín Estadístico 2004-2005 DNRS

CENTROS DE REHABILITACIÓN	COLOMBIA	PERU	CHILE	AFRICA	BRASIL	REP. DOMI	ESPAÑA	GUATEMA	MEXICO	VENEZUEL	ALEMANIA	BIÑGARIA	EE.UU	ARGENTIN	ITALIA	INGLATER	ASIA	AUSTRIA	CANADA	HONDURA	CHECOSLO	HOLANDA	TURQUIA	TAILANDI	FILIPINAS	BOLIVIA	FRANCIA	GRECIA	BELGICA	TOTAL
TULCAN	34																													35
IBARRA	9	1																												10
QUITO V#1																														
QUITO V#2																														
QUITO V#3																														
QUITO V#4																														
C.D.P. QUITO																														
FEMENINO QUIT	73	3		5	3	4	5	1	5	1	4	1	4	2	6	1	5		2											125
LATACUNGA	3				1		1				1																			6
AMBATO	2																													2
RIOBAMBA	5																	1												6
ALAUSI																														
GUARANDA																														
CAÑAR																														
AZOGUEZ																														
CUENCA VARON																														
CUENCA MUJER	2	1																												3
JIPIJAPA																														
MACAS	1																													1
PORTOVIEJ MUJ	3	1		1				1																						6
EL RODEO																														
BAHIA																														
QUEVEDO	4																													4
VINCES																														
BABAHOYO																														
MACHALA		6																												6
ZARUMA																														
GUAYAQUI VAR																														
GUAYAQUI MUJ	11	5	1	1	2	1	5	3	1	2	2	1	2			1					1	1	3	2	1	1	1	1	1	51
TENA																														
ESMERA VARON																														
ESMERA MUJER	2									1																				3
LOJA		1																												1
C.D.P. MANABI																														
C.D.P. GUAYAS																														
TOTAL	149																													259

### **GRAFICO N° 3**

#### **POBLACIÓN PENITENCIARIA EXTRANJERA FEMENINA EN EL ECUADOR**



En porcentaje, el 58% de colombianas, en el grupo de extranjeras es quien más ocupa las cárceles del Ecuador, mientras que le siguen las peruanas con un porcentaje del 7%.

Fuente: Boletín Estadístico 2004-2005 Dnrs.

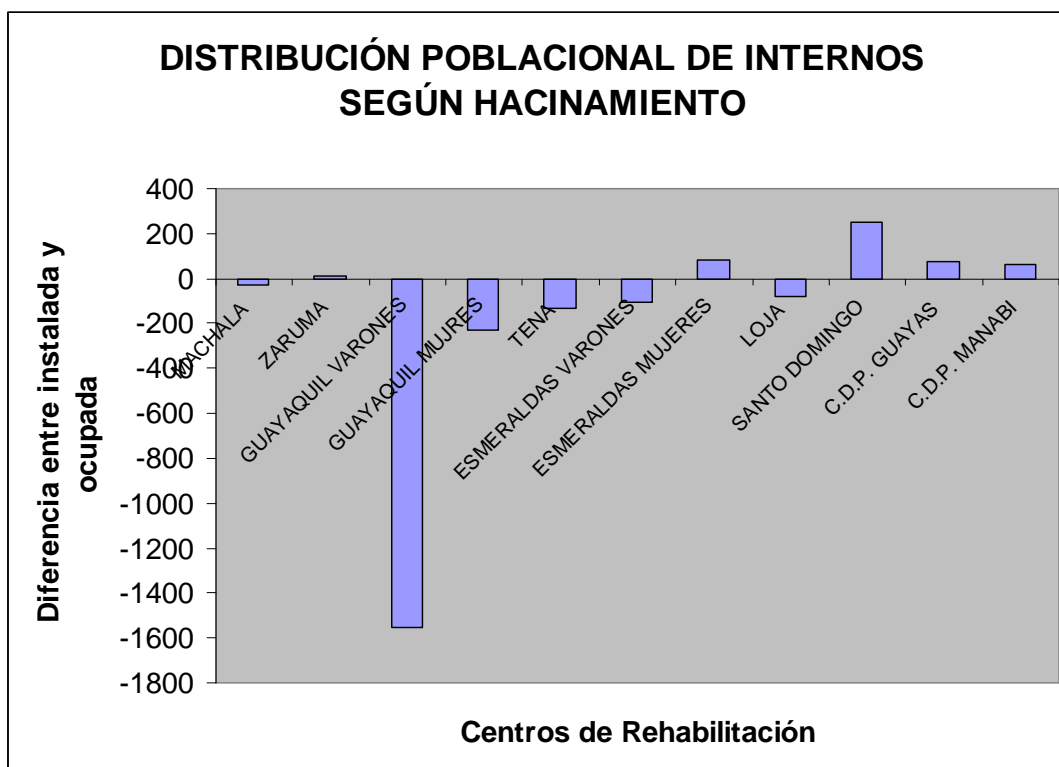
**CUADRO Nº 1****DISTRIBUCIÓN POBLACIONAL DE INTERNOS SEGÚN LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA (LO QUE CONLLEVA AL HACINAMIENTO)**

<b>Centros de Rehabilitación</b>	<b>Capacidad Instalada para número de internos</b>	<b>Nº de internos promedio</b>	<b>Diferencia entre instalada y ocupada</b>
<b>TULCAN</b>	100	329	-229
<b>IBARRA</b>	120	372	-252
<b>QUITO V. # 1</b>	708	967	-259
<b>QUITO V. # 2</b>	345	795	-450
<b>QUITO V. # 3</b>	64	464	-252
<b>QUITO V. # 4</b>	16	68	-52
<b>C.D.P. QUITO</b>	92	318	-226
<b>FEMENINO QUITO</b>	384	434	-50
<b>LATACUNGA</b>	100	180	-80
<b>AMBATO</b>	200	242	-42
<b>RIOBAMBA</b>	108	212	-104
<b>ALAUSI</b>	25	25	0
<b>GUARANDA</b>	70	78	-8
<b>CAÑAR</b>	40	59	-19
<b>AZOGUEZ</b>	90	53	37
<b>CUENCA VARONES</b>	186	255	-69
<b>CUENCA MUJERES</b>	50	61	-11
<b>BAHIA DE CARAQUEZ</b>	126	68	58
<b>JIPIJAPA</b>	52	84	-32
<b>MACAS</b>	96	99	-252
<b>PORTOVIEJO MUJERE</b>	40	28	12
<b>EL RODEO</b>	600	471	-252

<b>QUEVEDO</b>	159	288	-129
<b>VINCES</b>	34	52	-18
<b>BABAHOYO</b>	60	176	-116
<b>MACHALA</b>	232	259	-27
<b>ZARUMA</b>	25	16	9
<b>GUAYAQUIL VARONE</b>	2000	3554	-1554
<b>GUAYAQUIL MUJERE</b>	85	315	-230
<b>TENA</b>	30	160	-130
<b>ESMERALDAS VARONES</b>	180	285	-105
<b>ESMERAÑD MUJERES</b>	96	17	79
<b>LOJA</b>	200	278	-78
<b>STO.DOMINGO</b>	320	69	251
<b>C.D.P. GUAYAS</b>	350	277	73
<b>C.D.P. MANABI</b>	80	19	61
<b>TOTAL:</b>	<b>7463</b>	<b>11427</b>	<b>-3964</b>



**GRAFICO Nº 4**



Todos los Centros de Rehabilitación en el Ecuador, tienen la capacidad de instalación para un determinado número de internos, pero existe una gran demanda de internos nacionales como extranjeros que no ha permitido que se respete esta capacidad ya que sobrepasa el número de internos promedio, como podemos ver en este gráfico de barras, ya que en la cárcel de Guayaquil de varones existe una diferencia entre instalada y ocupada con -1554 internos de diferencia , y le sigue la cárcel de varones # 2 de Quito con la diferencia de -450 internos (antes del incendio lo que implica que creció mucho más el hacinamiento por cuanto fueron distribuidos en diferentes centros del país; mientras que la cárcel de Sto. Domingo una de las más actuales aun le queda espacio para 251 instalados; así como la cárcel de Esmeraldas de mujeres y el C.D.P. de Manabí.

Fuente: Boletín Estadístico 2004-2005. Dnrs

### **3.7. ESTUDIO DE LA POBLACION PENITENCIARIA COLOMBIANA EN EL CENTRO DE REHABILITACION SOCIAL VARONES DE QUITO NÚMERO DOS. ENCUESTAS, GRAFICOS QUE DETERMINAN EL HACINAMIENTO, REPATRIACION, ENTRE OTROS.**

“La población penitenciaria en el último período registra una tendencia ha incrementarse, lo que puede agravarse aun más, dados los altos niveles de desempleo, analfabetismo, desorganización familiar como consecuencia de la migración, pobreza y falta de oportunidades de la población ecuatoriana, razón por la cual pese a los esfuerzos institucionales, existe hacinamiento en los Centros de Rehabilitación Social, pues la falta de recursos y la capacidad instalada insuficiente, dificultan los objetivos del Sistema Penitenciario y la gestión de la Entidad porque impiden cumplir con los procesos de rehabilitación integral de los internos que se sustentan en el trabajo, educación y actividades recreativas” (Ing. Dolores Torres)

Luego del incendio de la cárcel número dos, el Sistema Penitenciario se ha vuelto gris, pues el ingente presupuesto entregado por el ejecutivo y organismos competentes no cambia el panorama desgarrador que vive el Sistema Penitenciario.

La crisis económica y política que atraviesa el país hermano de Colombia, como consecuencia del Plan Colombia, se refleja en elevados índices de pobreza, subempleo, desempleo y marginalidad social, lo que ha conllevado a que el mayor afluente de ciudadanos colombianos que migran a este país sean los referentes a los límites fronterizos tales como los Municipios (cantones) de la Hormiga, San Miguel, Puerto Asis, Mocoa y que pertenecen al Departamento (Provincia) del Putumayo, siendo este desplazamiento producto de factores como la economía y violencia de grupos denominados narcoterroristas, a lo que se suman las denominadas Autodefensas colombianas (AUC) con el supuesto de acabar con la guerrilla; la gran migración de estos ciudadanos colombianos ha repercutido en el entorno social ecuatoriano pues la mayoría de estos caen fácilmente en manos del hampa organizada, y en su condición

de “mula” transportar droga, utilizando el Puente Internacional en procura de evadir controles, que pese a que nuestro país ha sido declarado como tránsito para la droga no deja de ser cierto que se decomisan grandes cantidades de droga, por aire, tierra y mar, todo esto, junto a un elevado gasto público que no contempla la inversión social especialmente en educación y salud, constituyen causas directas del crecimiento delincuenciales generador de la inseguridad ciudadana, por parte de colombianos que emigran a nuestro país.

Sin embargo de ello, los colombianos al encontrarse detenidos en los establecimientos carcelarios del país, y en especial en la cárcel número dos, adoptan una actitud tranquila y pacífica y hasta muchas veces de arrepentimiento por el cometimiento del delito y al preguntárseles el porque lo hicieron, responden con una mirada de pudor que las causas son la pobreza y falta de empleo en su Patria, y al saber que Ecuador cuenta con una moneda dura como es el dólar, vienen en busca de trabajo como comerciantes informales, por lo que al huir de su país por las causas anotadas, se enfrentan con sujetos sin moral que les ofrecen “trabajo” a cambio de llevar la mercancía y lo aceptan por darles un poco de seguridad y tranquilidad a sus familias.

Asimismo se ha podido determinar a lo largo de esta investigación así como con mi papel de funcionaria de dicho establecimiento, que la población colombiana al interior del Centro, son gente solidaria, trabajadora y de empuje, pues mantienen un nivel cultural medio, el cual se ha reflejado en las encuestas realizadas, medio que les permite adaptarse fácilmente a las situaciones propias de una prisión, dejando atrás el estigma de que son gente violenta que generan problemas al interior de las cárceles, por lo que ahora lideran el comercio que reactivan la economía del centro así como están presentes en las Directivas del Comité de Internos, impulsando desde luego el trámite de Repatriación en beneficio de sus connacionales.

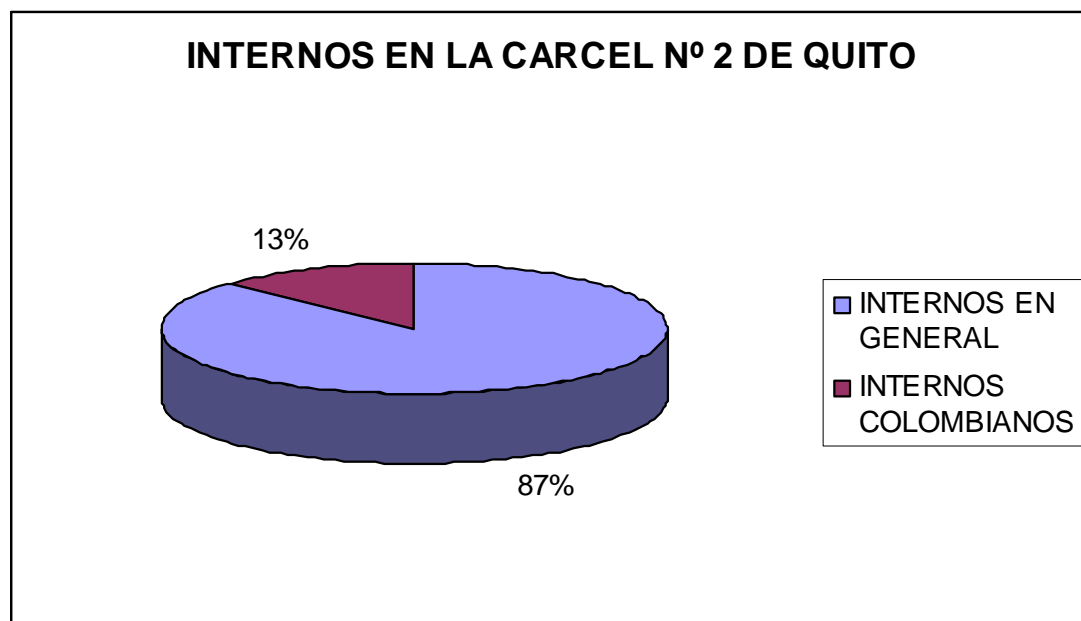
## ENCUESTAS APLICADAS. ANÁLISIS PARA DETERMINAR HACINAMIENTO Y OTROS

Se aplicó encuestas a veinte y siete internos colombianos que guardan prisión en la cárcel número dos de Quito, los mismos que coinciden en que hay un hacinamiento incrementado luego de la tragedia del incendio de la cárcel número dos, hacinamiento que ha creado más inseguridad dentro de las cárceles, siendo sus resultados son como siguen en los siguientes gráficos:

### GRAFICO Nº 5

#### INTERNOS EN LA CÁRCEL Nº 2 DE QUITO

INTERNOS EN GENERAL	207
INTERNOS COLOMBIANOS	30



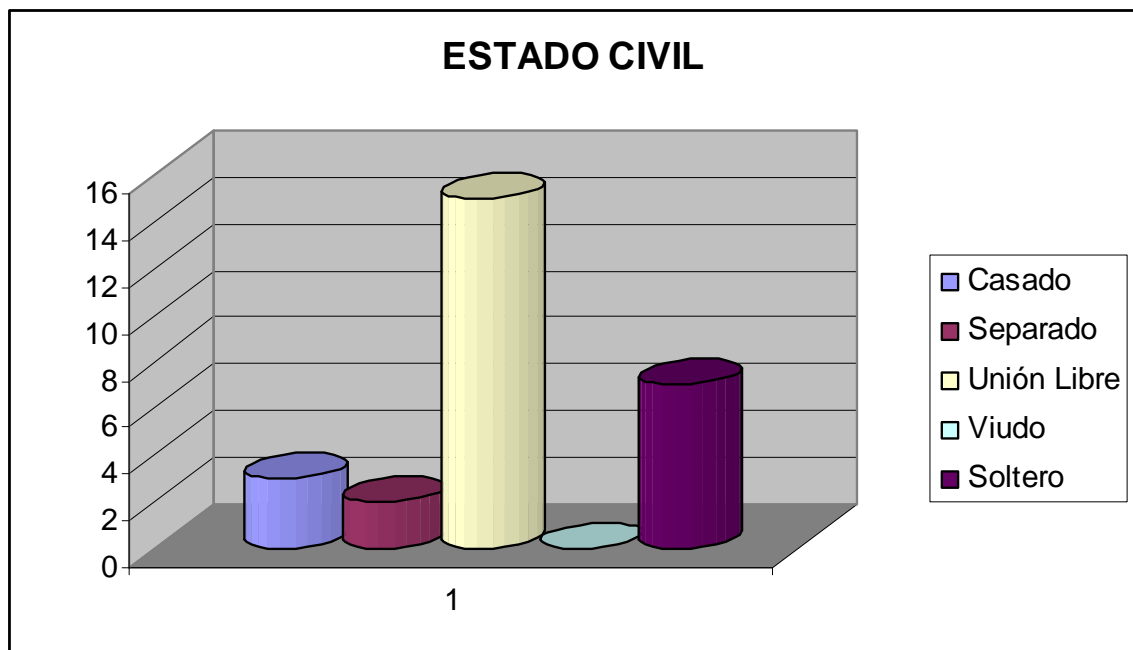
En la cárcel Nº 2 de Quito existe un 13% de internos colombianos lo que ha logrado incrementar el hacinamiento en este Centro de Rehabilitación.

Fuente: Centro de Rehabilitación Social Varones de Quito # 2

Elaborado por la autora de la presente investigación.

**GRAFICO Nº 6**  
**ESTADO CIVIL**

Casado	3
Separado	2
Unión Libre	15
Viudo	0
Soltero	7

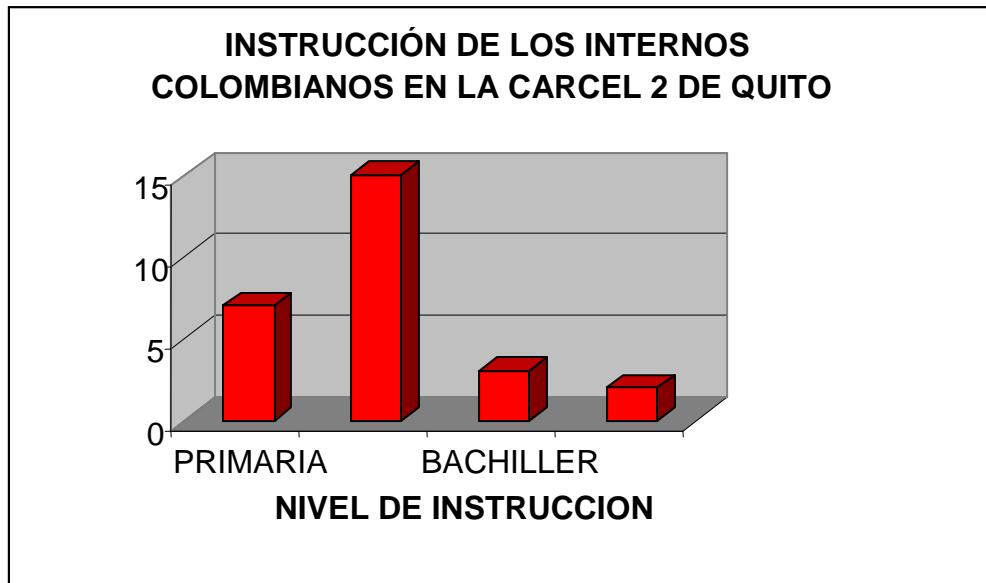


Realizada la encuesta y al preguntárseles sobre su estado civil y según esta gráfica podemos interpretar que en más del 50% de los internos colombianos tienen una unión libre; permitiendo ver así que solo pocos tienen un estado civil legal.

Elaborado por la autora de la presente investigación

**GRAFICO N° 7**  
**INSTRUCCIÓN**

PRIMARIA	7
BACHILLER	15
UNIVERSIDAD	3
OTROS	2



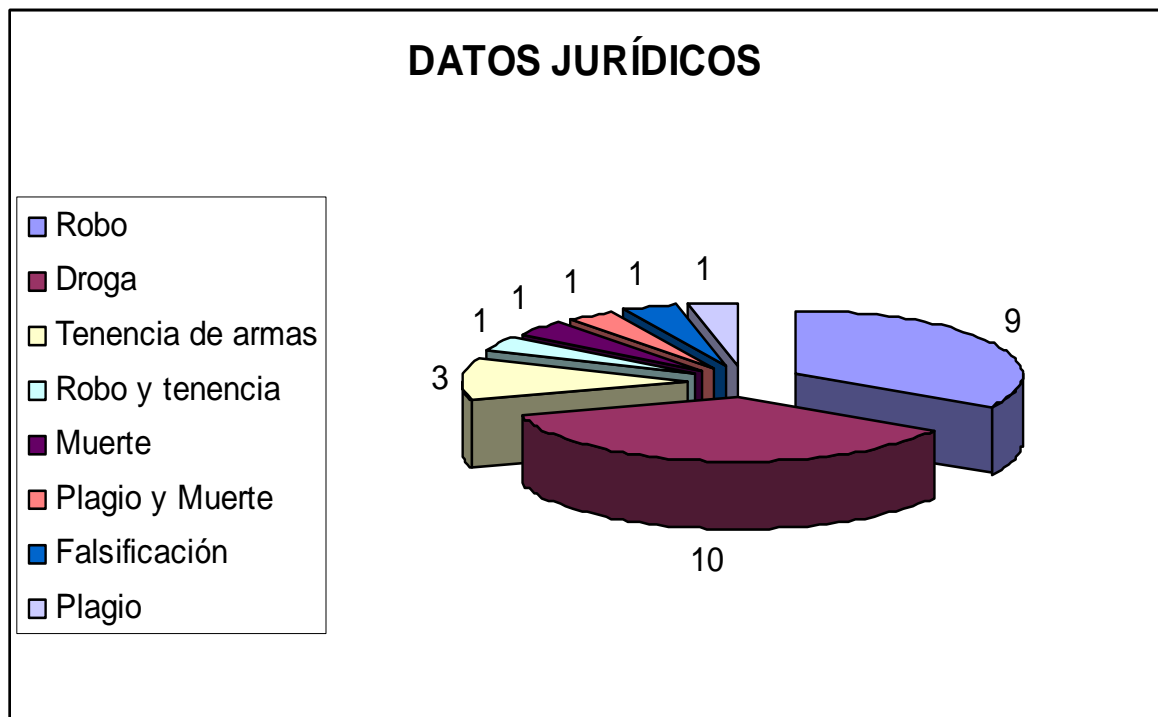
Como podemos darnos cuenta a los colombianos les gusta estudiar, pese a que están detenidos por diferentes razones y debido a los conflictos internos que tiene su país, a lo mejor no tuvieron la oportunidad de desenvolverse como profesionales en su patria, y vienen a cometer sus delitos en nuestra patria por la razones ya expuestas anteriormente.

Elaborado por la autora de la presente investigación

## GRAFICO N° 8

### DATOS JURÍDICOS: CAUSAS PENALES

Asalto y robo	Tenencia de Armas	Robo y Tenencia	Muerte	Plagio y muerte	Falsificación	Plagio	Droga
9	3	1	1	1	1	1	10

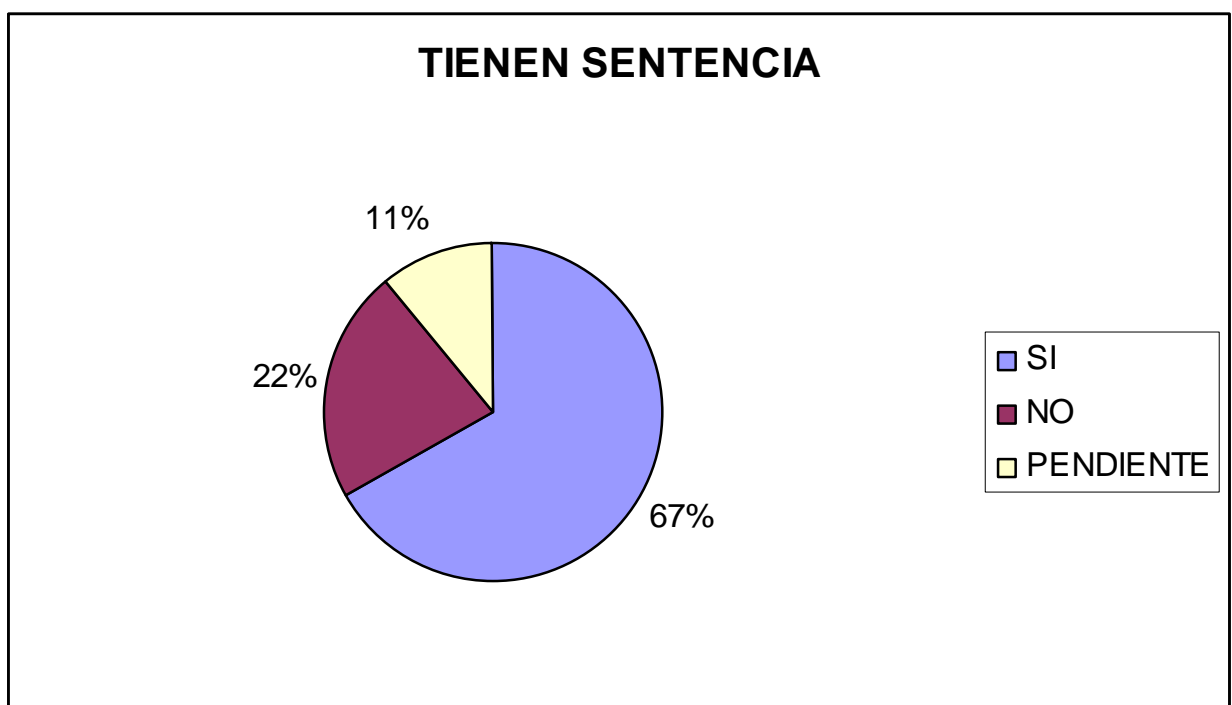


La mayor parte de este pastel está representado por el delito de drogas, con lo que se demuestra que la gran mayoría de colombianos que vienen a nuestro país se dedican al tráfico de drogas, mientras que en segundo lugar le sigue el delito de asalto y robo; y en un tercer lugar la tenencia ilegal de armas.

Elaborado por la autora de la presente investigación

**GRAFICO N° 9**  
**SENTENCIADOS**

SI	18
NO	6
PENDIENTE	3



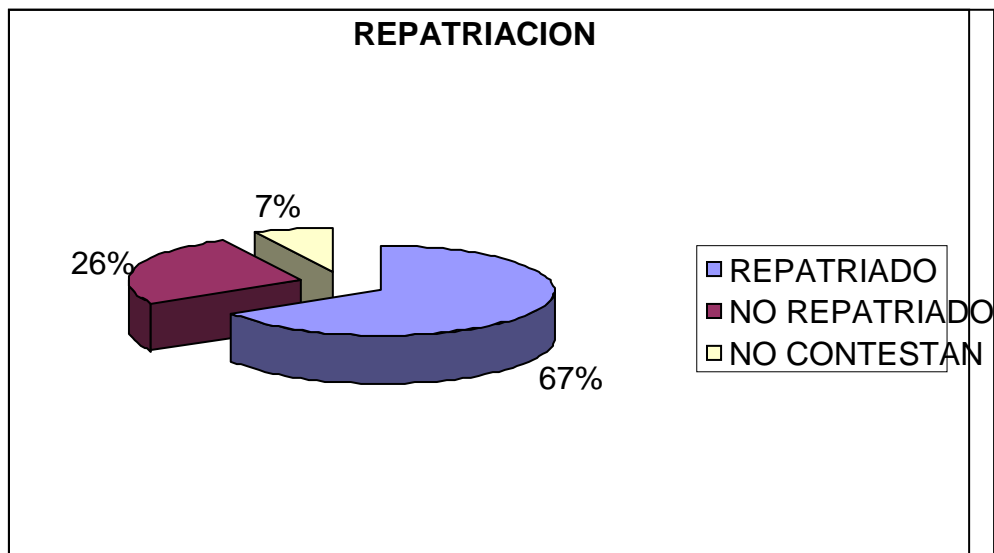
En este caso en la cárcel N° 2 de Quito Varones, un 67% de internos colombianos si han sido sentenciados; un 22% aun no tienen sentencia y un 11% de casos están en etapa de instrucción fiscal, sin embargo de estar sentenciados la mayoría, no tienen aún una sentencia en firme, lo que hace que este sea uno de los obstáculos para la aplicación correcta del Convenio de Repatriación, pues el interno no puede hacerlo mientras su sentencia haya causado ejecutoria

Elaborado por la autora de la presente investigación



**GRAFICO Nº 10**  
**LA REPATRIACIÓN**

DESEA SER REPATRIADO	NO DESEA SER REPATRIADO	SE ABSTIENEN DE CONTESTAR
18	7	2



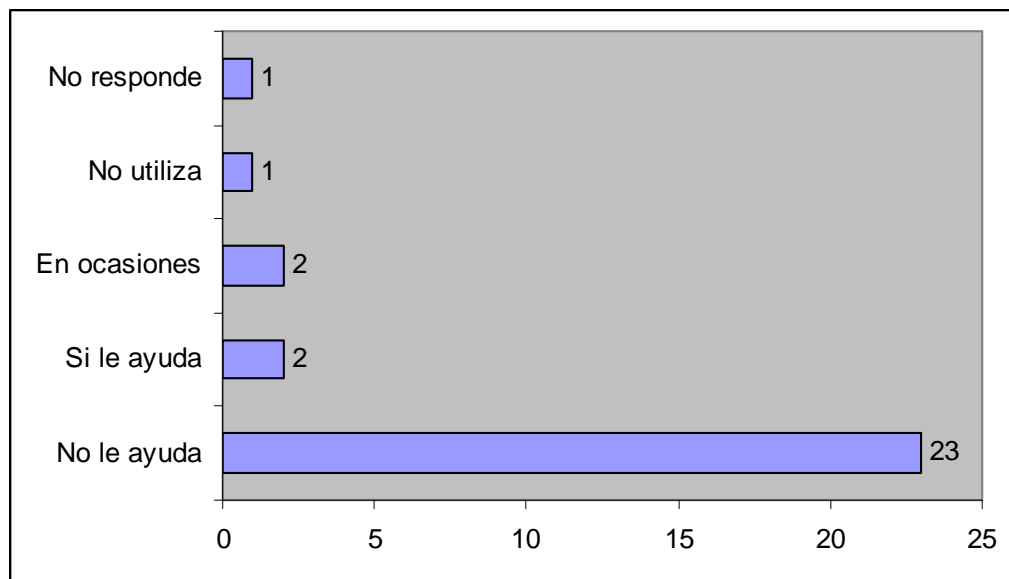
Un 67 % de los detenidos desea ser repatriado y terminar de cumplir la sentencia impuesta en Colombia; mientras que un 26% no opina lo mismo por razones de escepticismo, sumándose a ello el 7% que no contesta por razones similares.

Elaborado por la autora de la presente investigación

## GRAFICO N° 11

### EL CONSULADO DE COLOMBIA

No le ayuda	23
Si le ayuda	2
En ocasiones	2
No utiliza	1
No responde	1



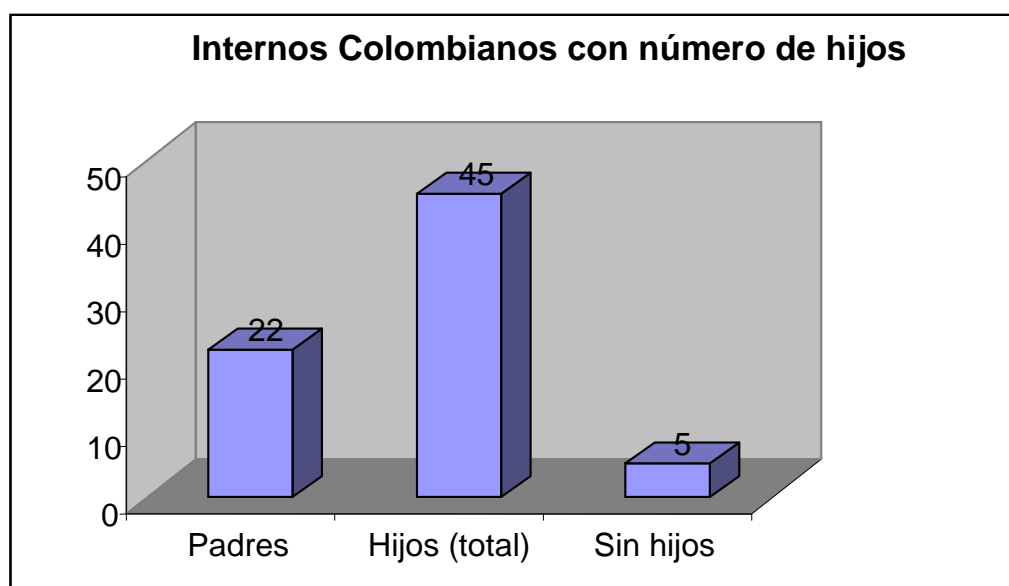
Son pocos los internos colombianos que gozan de la ayuda de su consulado así vemos que apenas 2 internos de los 27 encuestados que se encuentran reclusos en el Centro de Rehabilitación # 2 reciben esa ayuda que más que todo es respecto de vituallas; pero en casi toda su totalidad no tienen la ayuda de su gobierno.

Elaborado por la autora de la presente investigación

## GRAFICO N° 12

### COLOMBIANOS INTERNOS QUE TIENEN HIJOS

Padres	22
Hijos (total)	45
No tienen hijos	5



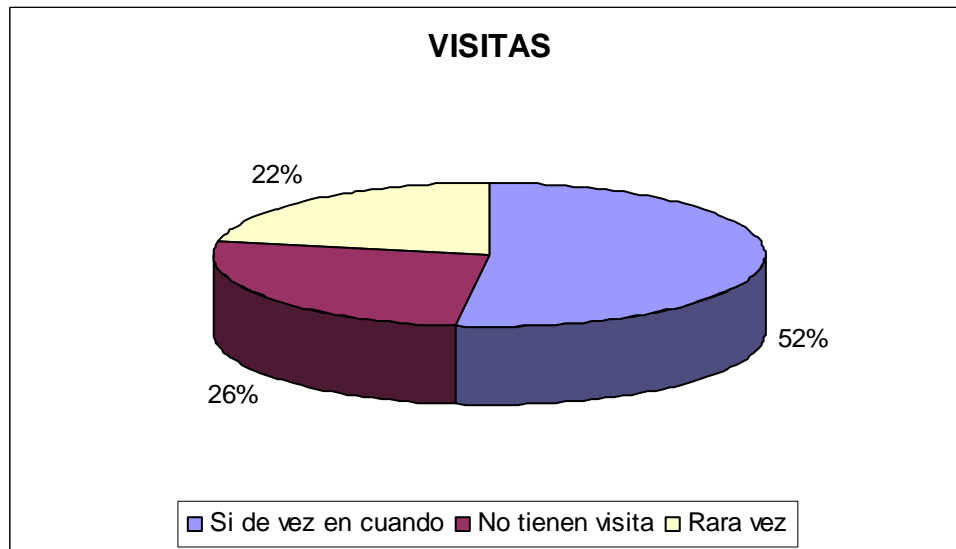
En su gran mayoría de los encuestados, 22 son padres que sumando tienen un total de 45 hijos, que habitan en su país en hogares desorganizados, existiendo la posibilidad de que ellos vayan por el mismo camino, ya que a lado de un hogar separado, sin la presencia del padre es la pérdida de guía que genera como cabeza y autoridad; por ello es que los internos colombianos buscan estar al lado de sus familias e hijos principalmente apoyándose en el Convenio de Repatriación.

Elaborado por la autora de la presente investigación

## GRAFICO N° 13

### VISITAS:

Si de vez en cuando	14
No tienen visita	7
Rara vez	6



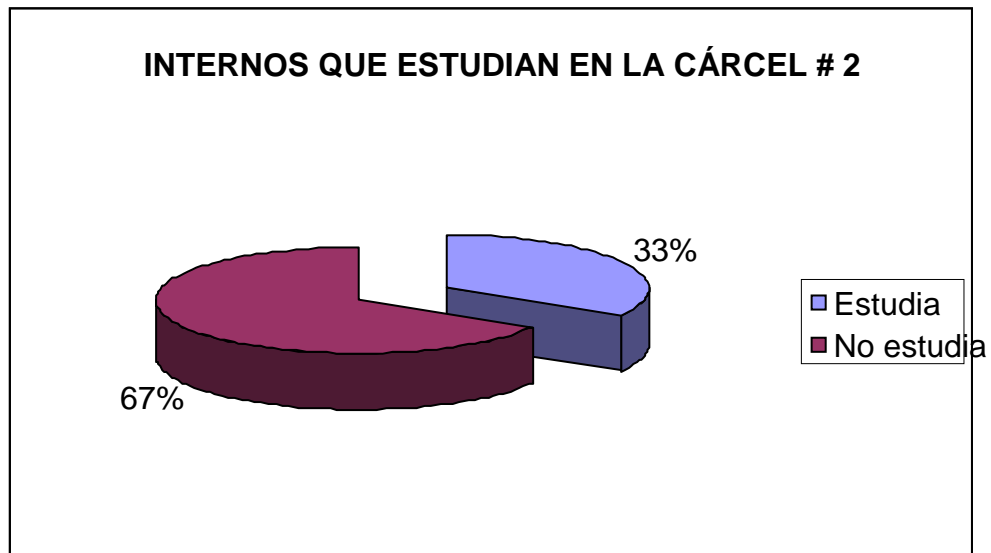
El 52% de los internos colombianos de la cárcel 2 de Quito, si tienen visita pero de vez en cuando lo que da a entender que en razón de estar demasiado lejos y no contar con los recursos necesarios, sus familiares no puedan viajar con frecuencia a visitar al mismo; un 26 % no tiene visita en lo absoluto ; mientras que un 22% rara vez por tener amigos o familiares residentes en el Ecuador.

Elaborado por la autora de la presente investigación

## GRAFICO N° 14

### ESTUDIAN EN LA CÁRCEL

Estudia	9
No estudia	18



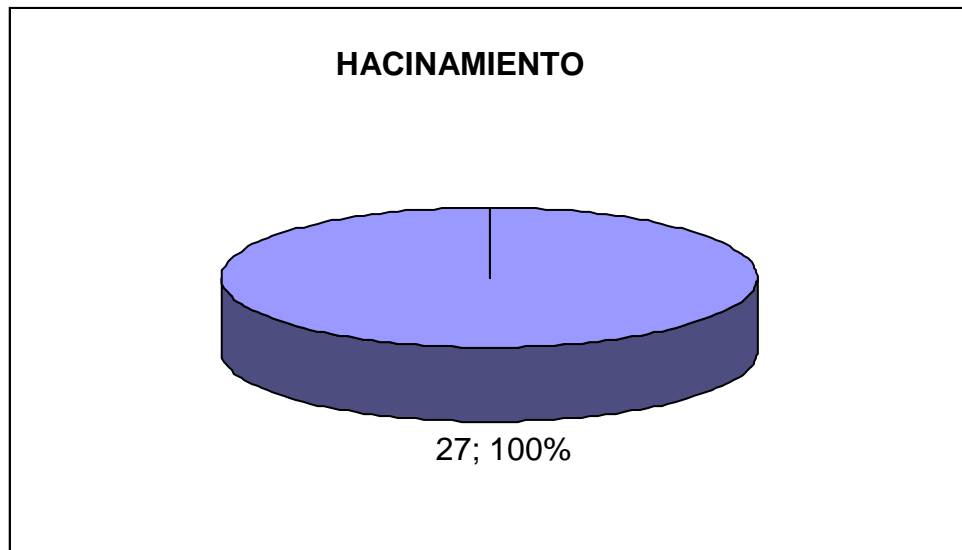
Una tercera parte de ellos si se interesa por el estudio, pese a que estén dentro de la cárcel; mientras que un 67% no lo hace, según sus declaraciones debido a la búsqueda de recursos para sostenerse.

Elaborado por la autora de la presente investigación

## GRAFICO N° 15

### HAY HACINAMIENTO EN EL CENTRO

Hay hacinamiento en el centro	27
-------------------------------	----



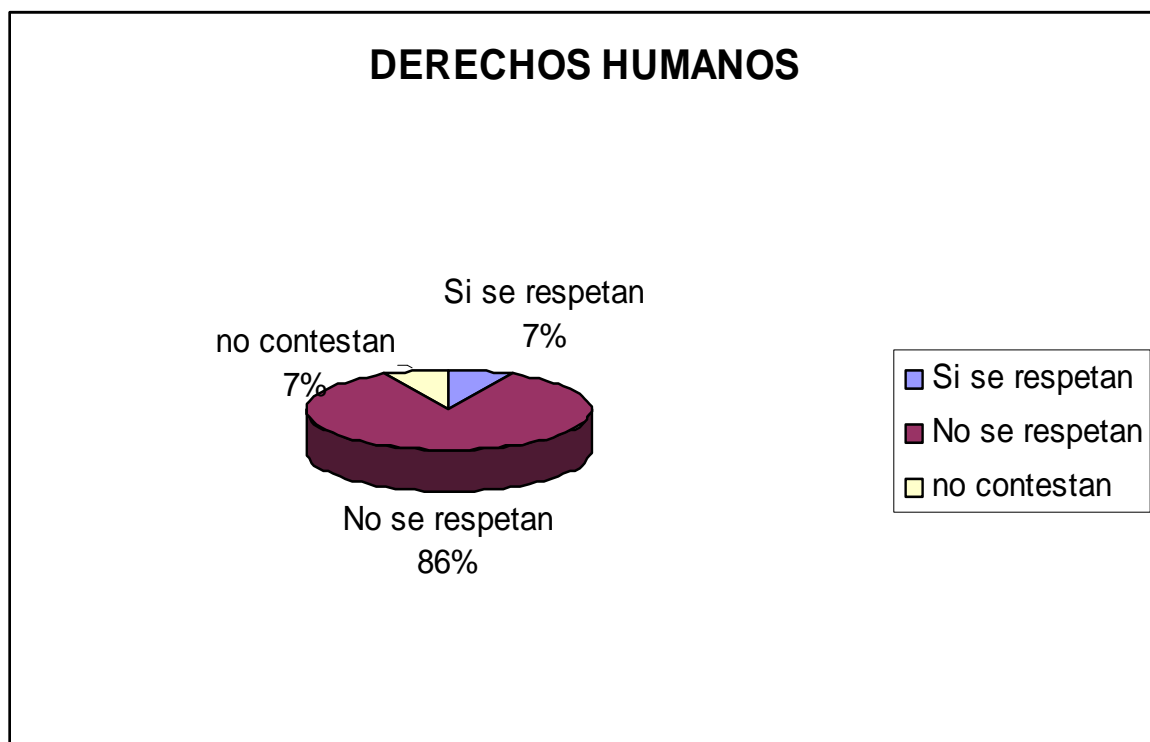
Está claro que el 100% de los internos están de acuerdo en que si existe el hacinamiento en este centro carcelario, así como en los demás centros del país, las razones: falta de presupuesto para adecuar un centro con buena infraestructura y con la debida capacidad de instalación, a lo que se suma el incendio de la cárcel dos en abril de este año, por lo que los detenidos pasaron a ocupar el pabellón “Hogar San Pablo” del ex Penal García Moreno.

Elaborado por la autora de la presente investigación

## GRAFICO N° 16

### DERECHOS HUMANOS

Si se respetan	2
No se respetan	23
No contestan	2



Apenas un 7% reconoce que sí se respetan sus derechos; en realidad un 86% es el que siente que no se respetan sus derechos.

Elaborado por la autora de la presente investigación

## **CAPITULO IV**

### **PROPUESTA DE REFORMAS AL REGLAMENTO DE PROCEDIMIENTO Y OPERATIVO DEL CONVENIO DE REPATRIACION DE PERSONAS SENTENCIADAS ENTRE EL GOBIERNO DEL ECUADOR Y EL GOBIERNO DE COLOMBIA**

Luego de haber hecho todo el análisis tanto del Convenio como de los Reglamentos sobre Procedimiento y de Operatividad para la Repatriación de Personas condenadas, me permito sugerir la siguiente Propuesta de Proyecto que va encaminada al sentir del Sistema Penitenciario, el mismo que con su visión trata de cumplir el objetivo para el cual fue creado: “lograr la reinserción del condenado a la sociedad y convertirlo en un ente productivo y socializador” La siguiente Propuesta deberá ser elaborada por la Asesoría Jurídica de la Dirección Nacional de Rehabilitación Social, y que será presentada ante el Consejo Nacional de Rehabilitación Social, el mismo que al gozar de autonomía administrativa y financiera la hará llegar hasta el Ministerio de Relaciones Exteriores a fin de que sin más trámites que el expreso consentimiento de los Estados Partes se ponga en vigencia inmediatamente, el texto del Proyecto dirá:

### **PROYECTO DE ADENDUM MODIFICATORIO AL REGLAMENTO SOBRE EL PROCEDIMIENTO DE REPATRIACION DE PERSONAS SENTENCIADAS ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR Y EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA.**

**PRIMERO.- ANTECEDENTES.-** En la ciudad de Quito, a los siete días del mes de abril de 1994, los Gobiernos de la Republica del Ecuador y la Republica de Colombia han celebrado y suscrito el Reglamento sobre el Procedimiento de Repatriación de Personas Sentenciadas, el mismo que se desprende del Convenio sobre Transito de Personas, Vehículos, Embarcaciones Fluviales y Marítimas y Aeronaves, suscrito en la ciudad de Esmeraldas, el 18 de abril de 1990.



**SEGUNDO.- COMPARECIENTES.-** En la ciudad de Quito comparecen a celebrar y suscribir el presente Adendum Modificatorio al Reglamento Sobre el Procedimiento de Repatriación de Personas Sentenciadas, por una parte el señor Dr. Francisco Carrión, en su calidad de Ministro de Relaciones Exteriores del Ecuador; y por otra parte, la señora Doctora Araujo, en su calidad de Ministra de Relaciones Exteriores de la República de Colombia.

**TERCERA.- REFORMAS AL REGLAMENTO SOBRE PROCEDIMIENTO DE REPATRIACION DE PERSONAS SENTENCIADAS.**

Por medio del presente Acuerdo modificatorio, las siguientes disposiciones de dicho Reglamento dirán lo que sigue:

**ARTÍCULO I.- AUTORIDADES COMPETENTES.-** las partes designan como autoridades nacionales competentes para dar cumplimiento a las disposiciones de este Reglamento, al Ministerio de Relaciones Exteriores del Gobierno de la Republica del Ecuador y al Ministerio de Relaciones Exteriores de la Republica de Colombia

**ARTÍCULO II.- REQUISITOS PARA EL TRÁMITE DE REPATRIACION.-** Al término de los seis meses de estar en el cumplimiento de la pena se hará el trámite de repatriación, este deberá contener los siguientes requisitos:

**1.-** La solicitud ante la Dirección Jurídica del Ministerio de Relaciones Exteriores deberá contener obligatoriamente:

- a.- Nombres y Apellidos completos del solicitante
- b.- Lugar y fecha de nacimiento
- c.- Número del documento de identidad
- d.- última dirección en su país de origen
- e.- Nombre y dirección del centro en donde cumple la pena
- f.- Tribunal Penal que dictó la sentencia.

**2.-** Copia certificada de la sentencia ejecutoriada

3.- Constancia de haber cumplido el **40%** de la pena impuesta

4.- Exposición de motivos para solicitar la repatriación

5.- Declaración expresa del solicitante, sobre su consentimiento para ser trasladado.

Si la solicitud se realiza bajo el criterio de razones humanitarias, explicar y adjuntar las razones para ello, junto con los documentos que sustente la solicitud.

**ARTÍCULO III.- CRITERIOS PARA EL TRASLADO.-** las Partes para adoptar el criterio de traslado de personas sentenciadas toman en cuenta las razones humanitarias expuestas en la petición de repatriación, o que el sentenciado haya cumplido al menos el 40 por ciento de la pena impuesta.

**ARTICULO IV. REPATRIACION PARA EL GOCE DE LA FASE DE PRELIBERTAD.-** Los sentenciados colombianos que guardan prisión en las cárceles ecuatorianas, de conformidad con el Código de Ejecución de Penas y Rehabilitación Social, podrán acogerse al beneficio de la fase de la Prelibertad, previo al cumplimiento de los requisitos establecidos en dicho Cuerpo Legal, para una vez aprobados poder cumplir dicha fase en su país de origen a través de la figura de libertad condicional que mantiene el Código Penal colombiano.

**ARTICULO V. REQUISITOS PARA EL BENEFICIO DE LA PRELIBERTAD.-** Para acogerse al Trámite de la Prelibertad, los internos de origen colombiano, deberán cumplir los siguientes requisitos:

1.- solicitud al Director Nacional de Rehabilitación social

2.- Haber cumplido las dos quintas partes de la sentencia impuesta debidamente ejecutoriada

3.- No tener intento de Fugas

4.- conducta excelente

## 5.- demás requisitos

Por su parte el Departamento de Diagnóstico y Evaluación de la DNRS, cumplirá:

1.- Que todo el legajo de antecedentes penales de la Función judicial que se anexa al trámite de prelibertad, se simplifique por uno solo del Consejo Nacional de la Judicatura, así como de INTERPOL, en la que certifique que el condenado no tiene juicios penales en su contra.

2.- La eliminación del Contrato de Trabajo, por no tener fuentes para el mismo y en razón de cumplir la fase de prelibertad en su país de origen.

Las Partes se ratifican en el contenido de este Adendum modificatorio al Reglamento Sobre Procedimiento de Repatriación de Personas Condenadas, suscrito entre el Gobierno de la República del Ecuador y el Gobierno de la República de Colombia, el mismo que para constancia firman en la ciudad de Quito a los quince días (15) del mes de Agosto del 2006.

**MINISTRO DE RELACIONES  
EXTERIORES DE LA REPUBLICA  
DE ECUADOR**

**MINISTRO DE RELACIONES  
EXTERIORES DE LA REPUBLICA  
DE COLOMBIA.**

De igual manera la Propuesta del Adendum Modificatorio será para el Reglamento Operativo para la Repatriación de personas condenadas entre la República de Ecuador y la República de Colombia, la cual en su parte pertinente, dirá lo que sigue:

**ARTÍCULO I.-** las Partes designan como autoridades nacionales competentes para dar cumplimiento a las disposiciones de este Reglamento, al Ministerio de Relaciones Exteriores del Gobierno de la Republica del Ecuador y al Ministerio de Relaciones Exteriores de la Republica de Colombia

**ARTICULO III.-** en razón de que el condenado no puede pagar la multa impuesta en sentencia al CONSEP por no poseer los medios económicos, se justificará los mismos a través de una Información Sumaria ante el Juez de lo Civil en el que los testigos responderán que conoce y es verdad que el condenado no posee los medios necesarios para pagar dicha multa; a esta información se acompañara el informe del Departamento Jurídico del Centro o el informe socioeconómico del Departamento de Trabajo Social, para enviar como Prueba Plena hasta las dependencias del CONSEP dentro del juicio de Jurisdicción coactiva, el mismo que al tenor de lo expuesto resolverá lo que en derecho le asiste.

Las Partes se ratifican en el contenido de este Adendum Modificatorio al Reglamento Operativo Sobre Repatriación de Personas Condenadas, suscrito entre el Gobierno de la República del Ecuador y el Gobierno de la República de Colombia, el mismo que para constancia firman en la ciudad de Quito a los quince (15) días del mes de Agosto del 2006.

**MINISTRO DE RELACIONES  
EXTERIORES DE LA REPUBLICA  
DE ECUADOR**

**MINISTRO DE RELACIONES  
EXTERIORES DE LA REPUBLICA  
DE COLOMBIA**

## **CAPITULO V**

### **CONCLUSIONES:**

Al finalizar el presente trabajo de investigación me permito hacer las siguientes conclusiones:

1.- Que de conformidad con la Constitución Política del Estado, el Ecuador en sus relaciones con la comunidad internacional proclama la paz; la cooperación como sistema de convivencia y la igualdad jurídica de los Estados; declara que el Derecho Internacional es norma de conducta de los Estados en sus relaciones recíprocas, propugna la integración, de manera especial la andina y la latinoamericana;

Dentro de este marco que se ha reseñado, se podría concluir que las relaciones diplomáticas con Colombia y Ecuador, como países vecinos, han sido tradicionalmente cordiales e intensas, no han estado exentas de dificultades y confrontaciones en el siglo XIX, pero estas, se consolidan a partir de 1830, luego de la formación de Repúblicas independientes, tras disolverse la Gran Colombia, haciendo que los profundos lazos históricos, geográficos y culturales, así como los intereses comunes guiados por los principios de amistad y cooperación que nos unen hayan hecho posible la construcción de vínculos sólidos de cooperación recíproca y mutuo entendimiento.

2.- Que En el contexto enunciado y al referirme al tema de mi investigación como es la Población Penitenciaria en el Ecuador y Legislación Internacional de Repatriación de Personas Colombianas, poniendo como caso de estudio al Centro de Rehabilitación Social de Varones de Quito número dos, por ser funcionaria del mismo, debo señalar que los Convenios Internacionales Sobre Traslado de Personas Condenadas, consideran que dicha cooperación debe servir a los intereses de buena administración de justicia y de rehabilitación

social de las personas condenadas, y que estos objetivos exigen que los extranjeros privados de su libertad como consecuencia de haber cometido un delito, tengan la posibilidad de cumplir su condena en su medio social de origen y que la mejor manera de lograr este objetivo es trasladándolos a sus propios países, concediéndoles todas las facilidades que el caso amerite, este es el mecanismo que va a permitir fortalecer y facilitar la cooperación jurídica internacional, dentro de Convenios, Acuerdos o Tratados que son parte del Derecho Internacional, pues reconociendo que la asistencia entre las Partes para el cumplimiento de sentencias penales condenatorias es aspecto importante dentro de la política de cooperación bilateral y que la reinserción es una de las finalidades de la ejecución de condenas.

3.- Que la Dra. María Isabel González Cano, profesora de Derecho Procesal de la Universidad de Sevilla- España, al referirse a la cooperación jurídica internacional en materia penal, señala que: “esta es un elemento esencial de la política exterior del Estado, a ello se une la necesidad de arbitrar mecanismos ágiles y eficaces en orden a potenciar una ejecución de la privación de libertad, reinsertadora y verdaderamente rehabilitadora. Estos son realmente los dos referentes decisivos en orden al análisis de diversas instituciones referentes a la ejecución y cumplimiento por reos extranjeros de penas y medidas de seguridad privativas de libertad”.

“El traslado de personas condenadas es, en este sentido, un instituto por medio de cual se articula una solución jurídica que permite que un Estado reciba y ejecute una determinada pena impuesta por otro Estado distinto; y que presenta implicaciones en tres ámbitos jurídicos distintos: el internacional, el procesal y el penitenciario”

Agrega que: “el fundamento, la razón de ser y la operatividad práctica de esta institución de cooperación jurídica internacional, puede analizarse partiendo de su diferenciación en relación con otras figuras referidas igualmente a la ejecución de penas y medidas de seguridad privativas de libertad que inciden en aspectos distintos”.

Al respecto de esta conclusión, mi opinión es que en la legislación penal ecuatoriana se han incorporado figuras jurídicas contrarias a las normas constitucionales como la llamada detención en firme, el incremento de las penas para ciertas conductas delictivas y la casi desaparición de las rebajas de penas, que han generado el aumento de la población penitenciaria, nacional como extranjera, el recrudecimiento del hacinamiento y por ende las crisis al interior de las cárceles. Debiendo recordar que el fundamento de la prisión preventiva es el aseguramiento de la comparecencia a juicio del acusado, la indemnización de daños y perjuicios y las costas procesales así como el cumplimiento de la pena. (Arts. 159, 167 CPP).

4.- Que la pena como consecuencia de un delito, no debería ser un mecanismo retaliatorio que pretenda vindicar el daño causado a la sociedad, a partir del sufrimiento del condenado. Se debe recordar que la prisión nació como medio para asegurar la comparecencia a juicio de los imputados, por tanto la pena debe ser la solución al delito, entendido como connatural a la compleja dinámica social, que se vislumbra en los desaciertos del manejo político, económico y social del estado. El delito como consecuencia, debe mirarse como un paradigma en que el estado debe asumir la responsabilidad y el compromiso de la reincorporación social de aquellos que han quebrantado la ley.

5.- Que al seguir analizando el Convenio de Repatriación entre Ecuador y Colombia a fin de que los condenados cumplan el resto de la pena en su país de origen, y el hecho de negárseles la repatriación por no contar con recursos para pagar una multa al CONSEP, acrecienta el sufrimiento cerrando la ilusión de estar al lado de su familia y por ende de su entorno social, asimismo violenta todo enunciado constitucional que en el Art. 23 numeral 4 que señala “ninguna persona podrá sufrir prisión por deudas, costas, impuestos, multas, ni otras obligaciones, excepto por el caso de pensiones alimenticias.”

6.- Que de igual manera el Reglamento Operativo del Convenio sobre traslado de personas condenadas, suscrito entre las repúblicas de Ecuador y Colombia dice: “ si por alguna razón de la comisión del delito, tuviere el condenado

pendiente el pago de daños o perjuicios ocasionados por el hecho punible, se negara la repatriación, a no ser que demuestre la absoluta incapacidad de hacerlo por motivos de pobreza”, esta debería ser la razón del convenio o de los requisitos, el demostrar que el condenado es carente de todo recurso económico, ya que por la naturaleza del delito, y que debemos acordarnos que la mayoría de los detenidos colombianos están por el delito de drogas, así como que la mayoría de los detenidos colombianos, están vinculados al capítulo 1 de la Retención, Aprehensión e Incautación de Bienes estipulado en la Ley Sobre Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, es decir, todo lo retiene el CONSEP, por lo que, si al interior de los centros no hay fuentes de trabajo, no existe la posibilidad de percibir ningún ingreso, por consiguiente estos internos colombianos, no tienen para pagar una multa tan elevada al CONSEP, convirtiéndose ésta en inhumana, coartando toda posibilidad e ilusión de terminar de purgar una condena en su país de origen y cerca a sus familiares para emprender una reaserción voluntaria al seno de la sociedad.

7.- Que de la venta de bienes muebles y de valores depositados, el Art. 105 numeral cuatro de la Ley Sobre Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, define su distribución a las siguientes instituciones: 50% a la policía nacional, 15% al CONSEP, 15% a otros institutos, y un 20% para la Dirección Nacional de Rehabilitación Social y que éste será destinado para la rehabilitación de los internos, por lo que la propia Constitución en su Art. 208 al referirse al Sistema Penitenciario señala que el sistema penal y su internamiento tendrá como finalidad la educación del sentenciado y su capacitación para el trabajo, a fin de obtener su rehabilitación que le permita una adecuada reincorporación social. Los centros de detención contarán con los recursos materiales y las instalaciones adecuadas para atender la salud física y psíquica de los internos, sin embargo este porcentaje no ha llegado aún a manos de la Dirección Nacional de Rehabilitación Social para cumplir en parte con su finalidad.

8.- Que con el endurecimiento de penas y las escasas rebajas que se les otorga en razón de la reforma del Código de Ejecución de penas, que del dos por uno se transformó al diez por uno, las personas que pretenden acogerse al



beneficio de repatriación sea por razones humanitarias o sea por el cumplimiento del 50 % por ciento de la pena impuesta, ven trunca esa esperanza al momento de presentar su solicitud.

10.- Que el Artículo 4 numeral 3 de la Constitución Política declara que en sus relaciones internacionales, que es deber primordial del Estado asegurar la vigencia de los derechos humanos, velar por la seguridad nacional, y que el derecho internacional es norma de conducta de los estados en sus relaciones recíprocas, siendo el irrestricto respeto a los derechos humanos uno de los pilares fundamentales de los estados, así como el mecanismo para asegurar la protección al ciudadano y la igualdad de todos los seres humanos tal como lo señala el inciso uno del artículo 208 de la constitución.

11.- Por lo que es imprescindible, por tanto, que el Estado ecuatoriano sobre la base de la reciprocidad suscriba con gobiernos extranjeros, convenios internacionales respecto del intercambio de prisioneros, a fin de que estas personas puedan cumplir la condena en establecimientos carcelarios de sus respectivos países de origen. La posibilidad que tiene un condenado colombiano que ha delinquido en país que no es el suyo, de ser trasladado a su respectiva nación de origen, es una medida humanitaria y bondadosa que debe ser apoyada sin reparo alguno por todas las autoridades de ambos países, por tener una alta dosis de conveniencia y oportunidad; la función resocializadora de la pena sólo se logra cuando el delincuente cuenta con un entorno natural y social que no le sea hostil, además debe existir el deseo común de garantizar la protección de los Derechos Humanos de los condenados y el respeto a su dignidad reconociendo que la reinserción es una de las finalidades de la ejecución de la pena, y, si para cumplir esta función es necesario impulsar el Traslado de Personas condenadas a sus países de origen, lo seguiré difundiendo pues considero que las motivaciones que tuvieron los gobiernos de Colombia y Ecuador para suscribir el convenio bilateral sobre Repatriaciones, encuentran en ello plena justificación.

## **RECOMENDACIONES:**

1.- La Seguridad es responsabilidad del Estado y éste debe asumir al Sistema Penitenciario como política de estado tomando conciencia del verdadero problema que es el hacinamiento y las condiciones infrahumanas en las que se desenvuelven no solo los internos sino los funcionarios y guías penitenciarios de los treinta y cuatro centros de rehabilitación en especial el de la cárcel número dos, para lo cual debe generarse políticas de reinserción a fin de que los reclusos sean reinsertados a la sociedad sin ser víctimas de estigmatismos de la comunidad, ya que el deber de la sociedad no termina con la liberación del recluso, sino que se debe disponer, de organismos gubernamentales o privados a fin de prestar al recluso puesto en libertad una ayuda postpenitenciaria eficaz y efectiva que sirva para disminuir los prejuicios hacia él y le permitan readaptarse a la sociedad.

2.- El Presidente de la República, Dr. Alfredo Palacio González, en abril del año en curso, sostuvo que los Centros Penitenciarios que integran el Sistema Nacional de Rehabilitación Social, en los últimos días afrontan graves problemas derivados de las condiciones de precariedad de las edificaciones, insuficiente equipamiento, falta de mantenimiento de los sistemas de infraestructura sanitaria y eléctrica; y de hacinamiento de los reclusos, agravados con el flagelo y destrucción sufrido por la cárcel dos, y el colapso de las condiciones de habitabilidad, seguridad y de servicios básicos de los centros, penitenciarios del país y como consecuencia de ello, los internos de algunos centros han provocado hechos de violencia, creando el caos y que ante la realidad dramática que se vive en las cárceles, es obligación del Gobierno Nacional tomar las acciones y medidas emergentes que permitan remediar la situación en forma expedita y prevenir hechos de mayor gravedad, por lo que Decreta en estado de emergencia a los centros penitenciarios del país, para lo cual a través del Consejo Nacional de Rehabilitación Social, autoriza al Director Nacional de Rehabilitación en su condición de Representante Legal, realice las contrataciones e inversiones por un monto de \$ 8.000.000.00 (OCHO MILLONES DE DOLARES) para enfrentar dicha emergencia, sin embargo

hasta la presente fecha se conoce que dicho dinero haya llegado a manos de la institución, pese a haber presentado todo tipo de justificativos ante el Ministerio de Economía y Finanzas, por lo sería importante cristalizar dicha entrega de recursos para cubrir las necesidades básicas de los centros, en especial del flagelado Centro Dos.

3.- El incendio de la cárcel dos en Abril del presente año, ha detonado la pólvora para el colapso penitenciario, provocando ya no solo el hacinamiento de los reclusos que han sido trasladados a diferentes centros carcelarios del país, sino que el hacinamiento lo enfrentamos también los funcionarios, empleados y trabajadores del sistema penitenciario, pues si bien la Cárcel dos dentro del Orgánico Funcional existe, no tenemos un lugar para trabajar, sino que hemos sido trasladados tanto funcionarios como internos, indolentemente al “ pabellón hogar San Pablo del ex penal García Moreno” en donde desempeñamos nuestras funciones compartiendo un escritorio entre cuatro y cinco funcionarios en casi todas las áreas administrativas y sin poder dar cabida a todos los reclusos que requieren de nuestra ayuda, por lo que el Estado ecuatoriano siendo de responsabilidad, exclusiva la estabilidad laboral así como el proporcionar los medios adecuados para realizar el trabajo, debería a través del Municipio del Distrito de Quito disponer la inmediata refacción del inmueble a fin de volver a tomar posesión del mismo y continuar con las actividades inherentes.

4.- Si bien se ha declarado la autonomía administrativa y financiera del Sistema Penitenciario, sin embargo la falta de un Reglamento de aplicación no hace que la aspiración de mejor trato para funcionarios, empleados, trabajadores y para estos seres caídos en desgracia sea asumida en forma total por lo que el Consejo Nacional de Rehabilitación Social debería tratar el tema del Reglamento de Aplicación de manera urgente, de esta manera estaría facultado para proponer reformas no solo en beneficio de los funcionarios, sino del propio reo a fin de hacer prevalecer sus derechos y lograr la visión resocializadora para el mismo.

5.- La administración de justicia de igual manera es responsabilidad del Estado, y esta se debe aplicar de manera vertical a cada quien según lo que en derecho corresponda y sin rostro, sin embargo es público y notorio la parcialización y corrupción de la justicia, pues no se aplican las leyes bajo el irrestricto sentido del derecho siendo causa grave para el hacinamiento de las cárceles el retardo con que se despachan los trámites de los detenidos; por lo que el Consejo Nacional de la Judicatura, así como la Excma. Corte Suprema de Justicia deberá revisar los fallos jurisprudenciales a fin de evitar las herejías jurídicas donde los que pagan son los infortunados reclusos que no pueden en razón de sus recursos hacer brillar la tan llamada justicia y su derecho.

6.- El bajo presupuesto destinado por el Estado al Sistema Penitenciario, debilita la capacidad de funcionar correctamente, esto ha llevado a una situación sin límites que afecta al Centro carcelario número dos, pues los detenidos viven en condiciones duras e inhumanas, en lugares inadecuados y hacinados sin perspectivas de una liberación anticipada, a través del Convenio de Repatriación entre Ecuador y Colombia para los presos condenados, esta crisis se ha agudizado con la introducción de penas más severas y con la anulación de todo el sistema de reducción de penas y de beneficios de preliberación que estaban anteriormente en vigencia, tal como el 2 x 1, debiendo recordar que estos lugares se llaman centros de rehabilitación, pero con tan poco o ningún apoyo no es posible ver la rehabilitación.

7.- El Estado ecuatoriano carece de una política criminal articulada que permita un trabajo efectivo en la prevención de la delincuencia, en el tratamiento de los infractores de la ley penal y en la reincorporación social de las personas liberadas, una vez que han cumplido la sentencia impuesta; la falta de una política penitenciaria adecuada hace que las condiciones de prisión sean tan deficientes que en algunos casos, los prisioneros mueran por desnutrición, asfixia, ataques de otros prisioneros, suicidio, enfermedades terminales que conllevan a la muerte adelantada; en condiciones de hacinamiento extremos y sin asistencia médica necesaria, la insalubridad y las enfermedades como tuberculosis y disentería se proliferan más rápidamente, por lo que el Estado tiene la responsabilidad de asegurar que este sistema sea adecuadamente

financiado, y de darle los recursos requeridos para satisfacer las necesidades básicas de los detenidos. Debe hacerse énfasis en que el Estado es responsable de la organización del aparato de justicia de modo tal que garantice que sean respetados los derechos de los individuos dentro del sistema judicial.

8.- La Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como los demás instrumentos internacionales de los cuales Ecuador es Parte, exigen que las personas privadas de su libertad sean tratadas humanamente, y con respeto por la dignidad inherente a su calidad de seres humanos. Así también requiere que las personas acusadas de delitos sean separadas de aquellas que ya han sido condenadas. Las condiciones carcelarias deben ofrecer a los presos condiciones de vida que estén de acuerdo con tales garantías.

9.- El Código de Ejecución de Penas y Rehabilitación Social, así como su Reglamento contemplan el beneficio de la Prelibertad, a partir del cumplimiento de las dos quintas partes de la sentencia impuesta. Según dictamen del señor Procurador General de la Nación, el Director Nacional de Rehabilitación Social debe dar cumplimiento sin excepción a lo estipulado en dicho Cuerpo legal, por esta razón los sancionados por el delito de Drogas están inmersos en el mismo beneficio de prelibertad, sin embargo, surge una controversia, sin solución hasta ahora, y es sobre los extranjeros que se acogen a dicho beneficio, y es entre otras su situación de arraigo en el país, problemas laborales, vivienda y otros elementos que dificultan la toma de decisión por parte de las autoridades penitenciarias, lo que llevaría a buscar una solución a fin de que los internos extranjeros hagan uso de este beneficio, para lo cual considero que se deben encontrar mecanismos suficientes para que los internos colombianos que son repatriados hasta Colombia, se beneficien con el proceso de prelibertad y que puedan cumplir esta fase en su país de origen, a través de la figura de libertad condicional la misma que contempla el Código Penal Colombiano.

10.- Asimismo se debería concertar con organismos que desarrollan actividades laborales y de generación de empleo tanto en Ecuador como en Colombia, para que a través del estado se desarrollen mecanismos que

conlleven a resolver la situación laboral de los detenidos, mediante alternativa penal de trabajo comunitario como parte del Sistema Progresivo, del Sistema Penitenciario.

Por último sería importante que los Ministerios de Relaciones Exteriores tanto de Ecuador como de Colombia acojan el Adendum propuesto por la autora de esta investigación, a fin de desburocratizar el trámite de Repatriación entre la Corte Suprema de Justicia del Ecuador y el Ministerio del Interior y de Justicia, de Colombia, y que sean las Cancillerías las encargadas de este trámite que a mi manera de ver es tan sólo administrativo, así, para la legalidad de la mencionada Propuesta, será el Departamento de Asesoría Legal de la DNRS quien acoja la referida propuesta y la eleve hasta el Consejo Nacional de Rehabilitación social, para que canalizado por el Ministerio de Relaciones Exteriores se apruebe dicho adendum al Reglamento de Procedimiento o al “Convenio sobre Tránsito de Personas, vehículos, Embarcaciones Fluviales y Marítimas y Aeronaves” o más conocido al interior del Centro de Rehabilitación Social Varones de Quito Nr0. 2, como el “Convenio de Esmeraldas”, y surta los efectos legales que para este tipo de reformas se necesita.

## **GLOSARIO DE TERMINOS USADOS FRECUENTEMENTE.**

### **CODIGO DE EJECUCION DE PENAS Y REHABILITACION SOCIAL:**

Publicado en el Registro Oficial Nro. 282 De 9 de Julio de 1982, se establecen normas a seguir dentro de los diferentes Centros de Rehabilitación Social en lo que tiene que ver con los convictos sentenciados o no y las funciones que cumplen cada departamento existente en la Dirección Nacional de Rehabilitación Social y sus Centros de Rehabilitación, Consejo Nacional de Rehabilitación Social, Director Nacional y Director de Centros.

**CODIGO PENAL**, el que permitirá establecer las penas a los diferentes tipos de delitos acordes a la legislación ecuatoriana.

**CODIGO PENAL COLOMBIANO** el que permitirá establecer las penas a los diferentes tipos de delitos acordes a la legislación de ese país.

**CODIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL** como procede la ley para lograr sentenciar a los convictos.

**LEGISLACION INTERNACIONAL ENTRE ECUADOR Y COLOMBIA:** la que mantiene Acuerdos y Convenios en Materia Penal y que hace alusión a los prisioneros de ambos países.

**CONSEJO NACIONAL DE REHABILITACION SOCIAL:** Entidad del sector público, cuyo objetivo es la determinación de la política penitenciaria con el propósito de obtener la rehabilitación integral de los internos y la adecuada administración de los Centros de Rehabilitación Social, está adscrito al Ministerio de Gobierno y lo integran: el Ministro de Gobierno o su delegado, el Presidente de la Corte Suprema de Justicia o su delegado, el Ministro Fiscal General o su delegado, el Director de Recursos Humanos y Empleo del Ministerio del Trabajo, el Director del Instituto de Criminología de la universidad Central, el delegado de la Federación de Servidores Públicos de Rehabilitación Social.

**DIRECCION NACIONAL DE REHABILITACION SOCIAL:** Organismo dependiente del Consejo Nacional de Rehabilitación Social, con personería jurídica y capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones, con sede en la ciudad de Quito y jurisdicción nacional, y que constituye la unidad superior de la política penitenciaria.

**INPEC:** Instituto Nacional de Penitenciario y Carcelario de Colombia.

**SISTEMA PENITENCIARIO:** El que reconoce el principio de la individualización de las penas que consagra el derecho penal y que consecuentemente, aplicará en la ejecución de las mismas, la individualización del tratamiento.

**CRS:** Centro de rehabilitación Social, lugar donde guardan prisión los reos.

**PRESO:** Persona detenida por sospecha criminales, por haberse dictado prisión preventiva, y que el juez dicta para garantizar su presencia durante el proceso penal , debiendo señalar que con la reforma de 13 de enero del 2003 la prisión preventiva pasa a convertirse en Detención en firme, mediante la cual toda persona que sobre ella se haya dictado auto de llamamiento a juicio deberá permanecer detenido en un centro penitenciario hasta que se le convoque a una audiencia de estrados en donde se le aplica una sentencia absolutoria o condenatoria.

**SENTENCIA,** designará la decisión judicial definitiva en la que se impone a una persona, como pena por la comisión de un delito, la privación de la libertad o restricción de la misma. Se entiende que una sentencia es definitiva cuando no esté pendiente recurso legal ordinario o extraordinario contra ella en el Estado remitente o que el término para interponerlo haya fenecido.

**SENTENCIADO:** Aquel que cumple una pena impuesta, a través de una decisión legítimamente dictada por juez competente y dentro de un establecimiento carcelario, sentencia que no deberá estar sujeta a impugnación, es decir ejecutoriada.



**PENA:** Sanción establecida mediante ley en contra de quien comete un delito, las penas pueden ser de prisión, de prisión correccional, de reclusión menor ordinaria, reclusión mayor ordinaria, reclusión mayor extraordinaria.

**ARRESTO** se entiende el acto de aprehender a una persona con motivo de la supuesta comisión de un delito o por acto de autoridad;

**PERSONA DETENIDA** se entiende toda persona privada de la libertad personal, salvo cuando ello haya resultado de una condena por razón de un delito;

**JUEZ U OTRA AUTORIDAD** se entiende una autoridad judicial u otra autoridad establecida por ley cuya condición y mandato ofrezcan las mayores garantías posibles de competencia, imparcialidad e independencia.

**TORTURA** todo acto por el cual se inflija intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido, o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia. No se considerarán torturas los dolores o sufrimientos que sean consecuencia únicamente de sanciones legítimas, o que sean inherentes o incidentales a éstas.

**TRANSFERENCIA O TRASLADO:** Paso de un lugar a otro.

**REPATRIACION:** Los nacionales de un Estado Parte del que haya recibido sentencia por las autoridades competentes de la otra Parte.

Figura que no tiene antecedentes en el Derecho de los Tratados, es la repatriación de los presos, la cual ha sido establecida por las Partes mediante suscripción del Convenio de esmeraldas de 18 de abril de 1990.

**CONVENIO:** Contrato, Convención, Pacto, Tratado; acuerdo de dos o más personas sobre un objeto de interés jurídico.

**CONVENIO DE ESMERALDAS:** O Convenio sobre Tránsito de Personas, Vehículos, Embarcaciones Fluviales, Marítimas y Aeronaves.

**REGLAMENTO:** aplicación de algún acuerdo o contrato.

**ENTREGA:** Acción de dar o poner en manos de otro, en su poder, a su disposición una persona o una cosa para que cuide, disponga de ella o la conduzca a donde corresponda o quiera.

**PASO DE FRONTERA:** Habilitado por las autoridades nacionales competentes para el ingreso y salida al territorio de la otra Parte, de personas, animales o cosas.

**RIOS FRONTERIZOS:** Son los ríos San Miguel, Putumayo, Mira y Mataje en su parte navegable.

**ESTADO RECEPTOR O DE CONDENA,** designará el Estado al cual la persona condenada puede ser transferida o lo haya sido ya, con el fin de cumplir su condena.

**ESTADO REMITENTE,** designará el Estado que haya impuesto una condena y, del cual la persona condenada pueda ser transferida o lo haya sido ya.

**CONDENA,** designará cualquier pena o medida privativa de la libertad por cumplirse en un establecimiento penal, centro de rehabilitación social, hospital u otra institución en el Estado remitente, que haya impuesto un órgano judicial, con una duración limitada o indeterminada, por razón de un delito.

**CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DEL ECUADOR**, Autoridad competente para aplicar los Reglamentos sobre el procedimiento y Operativo para repatriación de personas condenadas.

**MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO DE COLOMBIA**, Autoridad competente para aplicar los aplicar los Reglamentos sobre el procedimiento y Operativo para repatriación de personas condenadas.

**DIRECTOR DE MIGRACION Y EXTRANJERIA**, entidad ecuatoriana que realiza movimientos migratorios

**EXEQUATUR**- Exclusión El exequátur es un mecanismo para la incorporación y ejecución de una sentencia extranjera en el territorio colombiano. Busca proteger los derechos del condenado, por lo cual es un trámite de gran importancia en determinados casos. Sin embargo, su exclusión por el tratado no implica vicio de inconstitucionalidad, no sólo por cuanto el exequátur es un instituto de naturaleza legal y no constitucional sino, además, porque el tratado establece garantías a los derechos del condenado y reposa en la voluntariedad misma de los traslados.

## **BIBLIOGRAFIA:**

Albán Gómez Ernesto, Manual de derecho penal, Corporación ediciones legales, Quito, 1992

Boletín Estadístico DNRS, el Sistema Penitenciario en cifras

Boletín Estadístico 2004-2005 DNRS, el Sistema Penitenciario en cifras

Castillo Fabio, Los Nuevos Jinetes de la Cocaína, editorial La Oveja Negra Ltda. 1996, Santafé de Bogotá.

Cabanellas de Torres Guillermo, "Diccionario Jurídico Elemental"

Constitución Política del Estado

Código Penal

Código de Procedimiento Penal

Comité de Prisioneros del CRSVQ-2

Coloma Romero Alicia, Tesis Doctoral: "Hacia una Cultura de Respeto y Promoción de los Derechos Humanos en el Ecuador

Declaración Universal de Derechos Humanos

Entrevistas a Internos Colombianos

Encarta Microsoft Corporation, 2006. 1993-2005

González Cano María Isabel, Profesora Titular de Derecho Procesal. Universidad de Sevilla- España.

Hidalgo Albuja Edgar, Presidente del Colegio de Abogados de Pichincha. Últimas Noticias. Opinión, 1 septiembre 1999.)

Ley Sobre Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas

Magallanes Ruiz Mercy, Tesis Doctoral: "Las Pruebas en el Enjuiciamiento por los delitos de drogas"

Román Abarca Milton, Consultor Proyecto hacia la Seguridad, Fase de Diagnóstico, Informe de Diagnóstico. Sector Penal.

Silva Consuelo, Tesis Doctoral: La Internacionalización de la Justicia y los Derechos Humanos"

Zambrano Castillo Guido, La Colombianización de Ecuador, Corporación de Información, Liderazgo y Desarrollo Ecuatoriano-CILDE

Zambrano Pasquel Alfonso, Magistrado de la Corte Suprema de Justicia.

Internet

Revistas

Periódicos

Conferencias

Seminarios

**ANEXOS:**